



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Neointerpretación del carácter tutelar del amparo frente al precedente vinculante fijado en la STC N° 0987-2014-PA

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctor en derecho

AUTOR

Mg. Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano

ASESOR:

Dr. Rodolfo Fernando Talledo Reyes

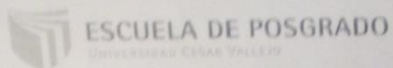
SECCIÓN:

Derecho.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Constitucional

PERÚ – 2018



DICTAMEN DE LA SUSTENTACIÓN DE TESIS

EL / LA MAESTRO (A): GUTIERREZ OTINIANO JUAN ERNESTO

Para obtener el Grado Académico de *Doctor en Derecho*, ha sustentado la tesis titulada:

NEOINTERPRETACIÓN DEL CARÁCTER TUTELAR DEL AMPARO FRENTE AL PRECEDENTE
VINCULANTE FIJADO EN LA STC N° 0987-2014-PA

Fecha: 9 de agosto de 2018

Hora: 8:00 a.m.

JURADOS:

PRESIDENTE: Dra. Luzmila Garro Aburto

Firma:

SECRETARIO: Dra. Yolanda Soria Pérez

Firma:

VOCAL: Dr. Rodolfo Fernando Talledo Reyes

Firma:

El Jurado evaluador emitió el dictamen de:

..... *Aprobar por excelencia*

Habiendo encontrado las siguientes observaciones en la defensa de la tesis:

.....
.....
.....
.....

Recomendaciones sobre el documento de la tesis:

.....
.....
.....

Nota: El tesista tiene un plazo máximo de seis meses, contabilizados desde el día siguiente a la sustentación, para presentar la tesis habiendo incorporado las recomendaciones formuladas por el jurado evaluador.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 1418 – 2018 – UCV – L – EPG

Los Olivos, 8 de agosto de 2018

VISTO:

El expediente presentado por GUTIERREZ OTINIANO JUAN ERNESTO solicitando autorización para sustentar su Tesis Doctoral titulada: **NEOINTERPRETACIÓN DEL CARÁCTER TUTELAR DEL AMPARO FRENTE AL PRECEDENTE VINCULANTE FIJADO EN LA STC N° 0987-2014-PA** y

CONSIDERANDO:

Que el(los) magister(es) GUTIERREZ OTINIANO JUAN ERNESTO, ha(n) cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Doctor en Derecho;

Que, el proceso para optar el Grado de Doctor está normado en los artículos del 22° al 32° del Reglamento para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado;

Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la letra dice: *"Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres miembros, nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con el Jefe de la Unidad de Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada con el tema de la Tesis"*;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes;

SE RESUELVE:

Art. 1°.-

AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis Doctoral titulada: **NEOINTERPRETACIÓN DEL CARÁCTER TUTELAR DEL AMPARO FRENTE AL PRECEDENTE VINCULANTE FIJADO EN LA STC N° 0987-2014-PA**; presentada por GUTIERREZ OTINIANO JUAN ERNESTO.

Art. 2°.-

DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis Doctoral a los docentes:

Presidente : Dra. Luzmila Garro Aburto
Secretario : Dra. Yolanda Soria Pérez
Vocal (Asesor de la tesis) : Dr. Rodolfo Fernando Talledo Reyes

Art. 3°.-

SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes:

Lugar : Aula 205
Día : 9 de agosto de 2018
Hora : 8:00 a.m.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Dr. Carlos Ventura Orbegoso
Jefe

Escuela de Posgrado – Filial Lima Norte



MBA Ommero Trinidad Vargas
Secretario Académico
Escuela de Posgrado – Filial Lima Norte

Cc: Jurados, interesado, Archivo.

Dedicatoria

A mi amada compañera Leyvi y a mi bella niña Rosa Isabel: motores de mi vida.

A la memoria de mi madre Mirza Margot, Abogada ejemplar, a mi padre Ganverty, a todas mis hermanas, hermanos y, familiares todos.

Agradecimiento

A las autoridades y colegas del Tribunal Constitucional Peruano, del Poder Judicial de Perú a nivel de judicatura y de Procuraduría, y de la academia del Derecho nacional y extranjera, sin cuyos aportes no sería posible la realización del presente trabajo de investigación.

Resolución de vicerrectorado académico N° 00011-2016-UCV-VA

Lima, 31 de marzo de 2016

Declaración de autoría

El suscrito, Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano, estudiante de la Escuela de Posgrado, de la Universidad César Vallejo, sede/filial Lima Norte; procede en declarar que el trabajo académico titulado Neointerpretación del carácter tutelar del amparo frente al precedente vinculante fijado en la STC N° 0987-2014-PA, presentado en 162 folios para la obtención del Grado Académico de Doctor en derecho corresponde a quien suscribe la presente.

Por tanto, declaramos lo siguiente:

Se han mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo estipulado por las normas de elaboración de trabajos académicos;

No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este trabajo;

Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.

Somos conscientes que el trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios;

De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, nos sometemos a las sanciones que determinan el procedimiento disciplinario.

Lima, marzo de 2018

Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano

DNI 42075359

Presentación

Señores miembros del Jurado:

La investigación titulada Neointerpretación del carácter tutelar del amparo frente al precedente vinculante fijado en la STC N° 0987-2014-PA, tuvo como objetivo principal comprender e interpretar si el proceso de amparo preserva intangible su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC N° 0987-2014-PA.

En su contenido se destaca el estatus quo de la justicia de la libertad en el país con motivo de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) N° 0987-2014-PA, conocida en el medio como caso Francisca Vásquez Romero, la misma que introduce cambios respecto al modo de atención de los recursos de agravio constitucional presentados por los justiciables en el marco del proceso de amparo ante el máximo ente de justicia nacional; por ello, se desarrolla de forma concreta todo lo concerniente al precedente vinculante y al proceso constitucional de amparo, por ser la columna vertebral de la investigación. Finalmente, todo lo abordado, es cotejado con los aportes de expertos en la materia vía entrevistas de profundidad que permiten obtener los resultados, conclusiones y la construcción del aporte para el mejoramiento de la institución.

Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

El autor

Índice de contenido

Dictamen de sustentación y resolución de designación de jurado	ii
Dedicatoria	iv
Agradecimiento	v
Declaratoria de autenticidad	vi
Presentación	vii
Índice de contenido	viii
Resumen	xii
Abstract	xiii
Resumo	xiv
I. Introducción	
1.1. Realidad problemática	16
1.2. Trabajos previos	18
1.3 Teorías relacionadas al tema	21
1.4. Formulación del problema	30
1.5. Justificación del estudio	31
1.6. Supuestos Categóricos	32
1.7. Objetivos	33
II. Método	
2.1. Diseño de investigación	36
2.2. Categorización	39
2.3. Sujetos participantes	40
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, fiabilidad	42
2.5. Métodos de análisis de datos	44
2.6. Aspectos éticos	44

III. Resultados	46
IV. Discusión	57
V. Conclusiones	62
VI. Recomendaciones	64
VII. Propuesta	67
VIII. Referencias	80

Anexos

Anexo 1	Matrices de triangulación - entrevistas exploratorias realizadas a juristas de 03 nacionalidades distintas en el área constitucional en septiembre de 2016 (Argentina, Colombia y Perú).
Anexo 2	Matrices de triangulación - entrevistas realizadas a juristas expertos en el área constitucional entre agosto y septiembre de 2017(Perú y Bolivia).
Anexo 3	Guía de entrevista semiestructurada.
Anexo 4	Imágenes del proceso de entrevistas.
Anexo 5	Texto completo de la STC 0987-2014-PA

Índice de tablas

Tabla 1	Categorización	39
Tabla 2	Muestreo	41
Tabla 3	Perfil entrevistados en fase exploratoria	46
Tabla 4	Pregunta 1-Fase exploratoria	47
Tabla 5	Pregunta 2-Fase exploratoria	47
Tabla 6	Pregunta 3-Fase exploratoria	48
Tabla 7	Pregunta 4-Fase exploratoria	48
Tabla 8	Pregunta 5-Fase exploratoria	48
Tabla 9	Total expedientes y sent. Interlocutorias	48
Tabla 10	Perfil de cada profesional a ser visitado para entrevista a profundidad	51
Tabla 11	Pregunta 1-Fase formal de recop, de datos	53
Tabla 12	Pregunta 2-Fase formal de recop, de datos	53
Tabla 13	Pregunta 3-Fase formal de recop, de datos	54
Tabla 14	Pregunta 4-Fase formal de recop, de datos	54
Tabla 15	Pregunta 5-Fase formal de recop, de datos	55
Tabla 16	Pregunta 6-Fase formal de recop, de datos	55

Lista de figuras

Figura 01	Comparación total expedientes vs interlocutorias periodo 09.10.2014-09.02.2018	50
-----------	---	----

Resumen

El estudio buscó interpretar si el proceso de amparo preserva intangible su finalidad a partir de las reglas vinculantes fijadas en la STC 987-2014-PA/precedente Vásquez Romero, siendo la interrogante principal, ¿El proceso de amparo preserva intangible su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional (RAC) en dicha materia a partir de la STC N° 0987-2014-PA?

Ha sido desarrollado bajo el paradigma interpretativo y dentro del enfoque cualitativo, practicándose entrevistas semiestructuradas a expertos en la materia para el recojo de información que fuera analizada con ayuda del método hermenéutico e inductivo y la técnica de triangulación.

El principal hallazgo constituye en que, a partir del precedente Francisca Vásquez Romero, se forja una neo interpretación del carácter tutelar del proceso de amparo, habida cuenta que el Tribunal Constitucional en materia de recursos de agravio constitucional opera en clave de Corte de Casación, desnaturalizando así el sentido del inciso 2 del artículo 202° del Texto Constitucional Peruano de 1993, comprometiendo su finalidad, considerando que el competente para determinar si procede o no el referido recurso es la Sala Superior Especializada que conoce en vía de apelación el caso en el que el litigante alega haber sufrido el agravio constitucional invocado exceptuando a los jueces constitucionales y en general de su rol garante, quebrantando así el Estado Constitucional y Democrático de Derecho en el Perú.

Palabras Claves: interpretación constitucional, amparo, precedente constitucional vinculante.

Abtsract

The study sought to interpret whether the amparo process preserves intangible its purpose based on the binding rules established in the STC 987-2014-PA / precedent Vásquez Romero, the main question being, does the amparo process preserve its purpose intangible against the increase of assumptions for the origin of the remedy of constitutional tort (RAC) in this matter from the STC N ° 0987-2014-PA?

It has been developed under the interpretative paradigm and within the qualitative approach, practicing semi-structured interviews to experts in the subject for the collection of information that was analyzed with the help of the hermeneutic and inductive method and the triangulation technique.

The main finding is that, from the previous Francisca Vásquez Romero, a neo-interpretation of the protective nature of the amparo process is forged, given that the Constitutional Court in matters of constitutional tort remedies operates in the key of the Cassation Court, denaturing thus the meaning of paragraph 2 of Article 202 of the Peruvian Constitutional Text of 1993, compromising its purpose, considering that the competent authority to determine whether or not the referred appeal is the Superior Specialized Chamber that is aware of the appeal in the case in which the litigant alleges to have suffered the constitutional tort invoked except the constitutional judges and in general of its guarantor role, thus breaking the constitutional and democratic rule of law in Peru.

Keywords: constitutional interpretation, amparo, binding constitutional precedent.

Resumo

O estudo procurou interpretar se o processo de amparo preserva intangível sua finalidade com base nas regras vinculantes estabelecidas na STC 987-2014-PA / precedente Vásquez Romero, sendo a questão principal, o processo de amparo preserva sua finalidade intangível contra o aumento de hipóteses para a origem do remédio de responsabilidade constitucional (RAC) nesta questão do STC N ° 0987-2014-PA?

Tem sido desenvolvido sob o paradigma interpretativo e dentro da abordagem qualitativa, praticado entrevista semiestruturada com especialistas na área para a recolha de dados foram analisados utilizando o método técnica e triangulação hermenêutico e indutivo.

A principal constatação é que, a partir do anterior Francisca Vásquez Romero, uma interpretação neo a natureza protetora de amparo é forjada, dado que o Tribunal Constitucional em recursos delito constitucional opera em chave Tribunal de Cassação, desnaturação e o significado do parágrafo 2º do artigo 202 ° da Constituição Peruano 1993, a comprometer a sua finalidade, enquanto que a jurisdição para determinar se ou não o referido recurso é a audiência Especializada Superior Câmara em fase de recurso no caso em que o litigante alega ter sofrido a exceção delito constitucional invocado os juízes constitucionais e em geral o seu papel fiador, quebrando assim o estado constitucional e democrático de direito no Peru.

Palavras-chave: interpretação constitucional, amparo, precedente constitucional vinculativo.

I. Introducción

1.1. Realidad problemática

La recarga procesal ha sido siempre un problema en la judicatura nacional y, en los últimos años ha sido argumento de peso en instituciones como el Tribunal Constitucional Peruano (TC, en adelante) para la construcción de reglas jurídicas vinculantes en que se ha fijado más de un filtro para la tramitación de los recursos, como es el de agravio constitucional, en perjuicio de los litigantes, como las acentuadas a partir de la STC N° 0987-2014-PA del 06 de agosto de 2014 (STC: sentencia del Tribunal Constitucional, en adelante) adoptándose la figura de la sentencia interlocutoria denegatoria.

El referido ente, ha pretendido resolver el problema expuesto mediante precedentes de similar calibre, como los registrados en el “caso Anicama Hernández”. (Tribunal Constitucional Peruano, 2005), y, en el “caso Lagomarcino Ramírez”. (Tribunal Constitucional Peruano, 2006)

Resulta de menester señalar que, en la Carta Constitucional peruana se ha dejado prescrito en el inciso 2 de su artículo 200º que el TC conoce el recurso de agravio constitucional interpuesto contra las sentencias denegatorias de segunda instancia, mas no encarga el deber de recalificar dicho recurso; sin embargo, con las reglas fijadas en el precedente en cuestión, se ha ido contraviniendo su espíritu afectando el derecho de defensa y el principio de inmediación reservado a los litigantes en sede especializada.

Tal ha sido el impacto del citado precedente que, entre el 09 de octubre de 2014 y el 09 de febrero de 2018, el TC dictó 13006 sentencias interlocutorias denegatorias (en número igual de expedientes, equivalente a más del setenta por ciento de su carga procesal en dicho período) aplicando sus reglas vinculantes, haciendo inaccesible la justicia constitucional en materia de amparo.

Ahora bien, tomándose en cuenta que el amparo es el último proceso al que se puede recurrir en el Perú, por su carácter residual, éste a partir de la sentencia vinculante acotada, en vía de agravio sólo era accesible a partir de supuestos contrarios a su finalidad, que al parecer habría sido reexpresada o tal vez neointerpretada.

A glosa de ilustración, se propone lo siguiente; María, en su condición de trabajadora del hogar es víctima de despido arbitrario y acude a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), instancia en que no logró un acuerdo con su otrora empleador, por ello tuvo la necesidad de acudir a la vía judicial ordinaria (vía igualmente satisfactoria en términos del precedente Elgo Ríos Núñez) en cuyas instancias tanto ordinarias como extraordinaria tampoco logró su reposición y mucho menos el pago de una indemnización.

Agotada la vía judicial ordinaria, María acude al proceso de amparo, pero conforme se describió ab initio, éste ya estaba condicionado a las reglas precedente contenido en la STC 0987-2014-PA, por ello, a las sentencias que en primera y segunda instancia se dictaron contra sus pretensiones constitucionales, se sumó la tercera: una sentencia interlocutoria denegatoria emitida por el TC bajo fundamentos subjetivos y desproporcionados, distorsionándose el thelos del precedente y sin observar que éstos deben ratificar el carácter tutelar de los procesos constitucionales.

Como resulta evidente, nos encontrábamos ante una neointerpretación del carácter tutelar del amparo, cuando más bien debió mantenerse invívita su finalidad, en perfecta sintonía con su naturaleza tuitiva, finalista y garantista a fin de ampliar y mejorar la cobertura de los derechos fundamentales.

Cada uno de los componentes citados fueron abordados bajo el enfoque cualitativo conforme a Mucchielli (1996), es decir, desde una óptica comprensiva e

interpretada con el apoyo de técnicas como la entrevista semiestructurada, observación libre y recopilación de documentos.

En este orden ideas, el trabajo es de gran relevancia, al ocuparse de una de las actividades más sensibles en el campo del Derecho: la justicia constitucional de la libertad siendo además pertinente porque en la actual coyuntura, el carácter tutelar del amparo ha sufrido una transformación kafkiana y que de no corregirse en el futuro, bajo el argumento de la especial trascendencia constitucional y otros supuestos señalados en el precedente en cuestión, se torne inaccesible, y aunque resulte necesario reducir la carga procesal, ésta se tenga que realizar sin desgarnecer, y sin abdicar a su razón de ser, la defensa de los derechos constitucionalmente protegidos y la vigencia del orden constitucional.

1.2. Trabajos previos

Antecedentes nacionales

García (2017) *Metamorfosis de un precedente discutible: la sentencia interlocutoria denegatoria*; cuestionó al precedente Vásquez Romero por su inflexibilidad y propone mejorar el Poder Judicial a través de la formación de jueces ordinarios constitucionales y tener un Tribunal Constitucional más garantista (pp.23-34).

Torres (2015) Precedente Vásquez Romero: nuevos y mayores obstáculos para el acceso a la justicia constitucional, concluyó que éste no tiene una justificación objetiva que pueda estar sustentada en la recarga procesal, asimismo, que resulta carente de motivación violando el derecho de acceso a la justicia constitucional de los ciudadanos y principios rectores". (Pp.79-80)

Landa (2015) Límites y alcances de la «especial trascendencia constitucional, reconstrucción del precedente vinculante 0987-2014-PA/TC, concluyó que el TC está

condenado empujar perpetuamente una montaña de expedientes... y así indefinidamente” (p. 109).

En dicha línea Távara (2015) Razones para comprender la «especial trascendencia constitucional, concluyó que este tipo de planteamientos responden a la necesidad que tienen los altos tribunales de justicia en el mundo de resolver el problema de la recarga procesal. (p. 74)

Espinosa (2015) La especial trascendencia constitucional como causal para el rechazo liminar de recursos de agravio en el Perú, concluyó que los precedentes y la jurisprudencia son susceptibles de ser interpretados y constituyen una alternativa necesaria. (p. 53)

Figuerola (2015) La exigencia de «especial trascendencia constitucional» en el ordenamiento constitucional peruano. Indeterminación y y reconstrucción del precedente vinculante 0987-2014-PA/TC, concluyó que el precedente Vásquez Romero revoluciona el campo de aplicación del proceso de amparo, no faltando razones como para que se haya implementado una fase de transición entre los criterios señalados en el caso Anicama Hernández hacia los actuales que corren anotados en la STC 0987-2014-PA. (p. 132)

Por su parte, Carpio (2015) El rol del Tribunal Constitucional. Balances, problemas y perspectivas a partir de un precedente, concluyó que el Tribunal Constitucional ha diseñado un mero mecanismo de descarga procesal descuidando referirse al fondo del asunto en los expedientes que resulten ser de su conocimiento, a partir de las reglas jurídicas fijadas en la STC 0987-2014-PA. (pp. 179-180).

Asimismo, Sosa (2015) El requisito especial trascendencia constitucional como rechazo in limine exigido por la Constitución, concluyó que la mayor parte de casos no serán resueltos en la vía del amparo a no ser que tengan especial trascendencia

constitucional. (pp. 210-211). En esta misma línea Gutiérrez (2015), La especial trascendencia constitucional Un análisis desde el derecho comparado y la legitimidad del derecho constitucional.

Al respecto, Urviola (2015) Los conceptos de contenido constitucionalmente relevante y especial trascendencia constitucional, concluyó que las reglas jurídicas fijadas en expediente en cuestión ya estuvieron en su momento recogidas en el caso Lagomarcino Sánchez de manera que no es una novedad que se fijen supuestos para la procedencia del RAC en materia de amparo. (p. 39).

Finalmente, Blume (2014) La Sentencia Interlocutoria Denegatoria, concluyó que las sentencias interlocutorias denegatorias suponen un cambio de paradigma en cuanto se debe descargar, pero sin desproteger al litigante (p. 32)

Antecedentes internacionales

Hernández (2015) *El amparo constitucional. Doctrina y problemas actuales. La admisibilidad del recurso*; concluyó que, “uno de los principales objetivos que pretendió la reforma de la L. O. 6/2007 (España) fue reducir la pendencia de asuntos ante el Tribunal Constitucional... También se ha conseguido reducir las demandas de amparo planteadas... Sin embargo, la consecución de estos objetivos ha sido a costa de un alto precio que puede verse reflejado en una serie de problemas”. (pp. 160-161).

Asimismo, Esquivel (2013) El requisito de la especial trascendencia constitucional: decidir no decidir, concluyó que, la reforma impulsada en España significó una transformación del amparo en sus dimensiones tanto procedimental como estructural, por cuanto, se incorporaron requisitos para su admisión más rígidos alejándolo de su función inherente, esto es la defensa de los derechos fundamentales. (pp. 197-199)

Por su parte, Díaz (2009) Tribunal constitucional y procesos constitucionales en España: algunas reflexiones tras la reforma de la ley orgánica del tribunal constitucional de 2007, concluyó que el TC español, evita a partir de la reforma introducida acumular expedientes, y le traslada el protagonismo de la garantía jurisdiccional de los derechos al fuero ordinario, pero sin suprimir esta competencia. (pp. 82-104),

Matía (2009) La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo, sostuvo que: “una cosa es que el Tribunal Constitucional disponga de un amplísimo y muy justificado margen para entender cuándo concurre la especial trascendencia constitucional y otra, muy distinta, que disponga de él como si de un arcano se tratara, ajeno al mundo del Derecho”. (p. 367)

De la Oliva (2009), La perversión jurídica del amparo constitucional en España, concluyó que la reforma, empuja, por así decirlo, a desamparar lo amparable, cuando no sea constitucionalmente interesante”. (p.384).

Finalmente, Montesinos (2015) Tutela multinivel de los derechos: Obstáculos procesales, Tesis Doctoral presentada ante la Universidad Carlos III de Madrid-España., conviene en señalar que ésta supone una restricción del acceso del particular a la jurisdicción constitucional, como consecuencia de no haberse perfilado el refuerzo de la protección dispensada por los jueces y tribunales ordinarios a los derechos constitucionalmente protegidos. (p. 543)

1.3 Teorías relacionadas al tema

El Derecho Constitucional.

De lo expuesto por Germán Bidart Campos en su amplia trayectoria en la Argentina, a propósito de un reciente trabajo publicado en forma colectiva por distintos juristas

en que destaca Manili (2017) se puede enfatizar que, propugnó una desdovergerización del concepto del derecho constitucional, esto es asumió que la constitución es una norma jurídica y no una constelación de ilusiones defendidas a lo largo de la historia y que puede verse hoy reflejada por así decirlo en la cláusula de los derechos fundamentales de la persona.

Por su parte, el jurista alemán Peter Haberle en una entrevista que concedió a Héctor López Bofill (Centro de Estudios Constitucionales, 2015), se puede destacar que es en el preámbulo de cada texto constitucional en que se reafirma la mayor actividad creativa del ser humano dado que en ésta se confirman los valores que orientan el quehacer de una nación. En efecto, es el Derecho Constitucional la disciplina jurídica coordinadora de todo el engranaje jurídico de un Estado.

González (2013), por ejemplo, sostiene que, “es parte del derecho interno o nacional que estudia las instituciones políticas del Estado y el sistema de gobierno, así como los principios que lo sustentan”. (p. 58).

Santi Romano, citado por De La Cueva (2008) sostiene que “es la parte del derecho público que está en una más estrecha y general relación con las otras partes del derecho público, sin excluir a ninguna y en un cierto sentido es el coordinador de todo el derecho público”. (p. 32). En esta línea, Correa (2007) y García (2007) para quienes nuestra disciplina encabeza como ya se sostuvo en un párrafo anterior, el estamento jurídico del Estado.

En el mismo plano, Henríquez (2007), confirma en el carácter histórico y sobretudo evolutivo de nuestra disciplina habida cuenta que ésta registra un avance de más de dos siglos. Al respecto el jurista nacional Eto (2002), señala:

Es una disciplina jurídica que estudia no sólo a la constitución, o sea, a ese texto o documento codificado que todos conocemos, sino también a

cualquier constitución, sea ésta de orden liberal, autoritaria o socialista; esté o no vigente; también estudia toda aquella legislación o normatividad constitucional cuya materia entre en los predios de este singular mundo jurídico llamado derecho constitucional. (p.87)

En la década de los ochenta del siglo pasado, diversos juristas del globo asociaron de manera férrea la Constitución con las instituciones políticas del Estado como es el caso de Herrera (1987), Duverger (1984) y, Sepúlveda (1982).

Ahora bien, si pretendemos recoger algunos datos complementarios sobre la visión respecto a nuestra disciplina hacia finales de la década del setenta del siglo XX, se debe acudir a Quiroga (1978), Lucas (1974) y Bielsa (1954), este último un poco más de antaño, por ser quienes reafirman la pertenencia del derecho constitucional al derecho público.

De todo lo antedicho podemos colegir que, es la disciplina jurídica que aporta las herramientas que hace más comprensible el mundo del Derecho y se ocupa de la materia constitucional, que se encuentra integrada por cuatro elementos, a saber: dogmática constitucional, pragmática constitucional, constitución económica y las disposiciones finales que en cada plexo constitucional se recogen como luminarias de todo el orden jurídico de un Estado.

El carácter pluridimensional de la disciplina hace posible una mejor comprensión de los fenómenos jurídicos, considerando que el plano fáctico, jurídico, axiológico y lo añadido en los últimos años por la corriente alemana: tiempo y persona, exigen del hermeneuta e investigador jurídico emplear diversas estrategias de investigación propias del campo social.

En este sentido, no es casualidad que Maleta (2009) afirme que el análisis cualitativo aplique como anillo al dedo en el campo del Derecho.

El proceso de interpretación constitucional.

Las normas legales son la materialización de una decisión política y, por tanto, para interpretarlas es necesario emplear diversos métodos como el histórico, teleológico, literal, etc y en el caso particular de normas con rango constitucional se deben emplear los siguientes insumos: preceptos y principios constitucionales.

En esa línea Goig (2013), ha enfatizado que ésta requiere un proceso de compleja realización. La interpretación constitucional por su propia naturaleza se rige por principios y se encuentra orientada a reafirmar el carácter supremo del texto constitucional vigente.

Sobre la línea propuesta, resulta imperativo anotar que el Tribunal Constitucional Peruano a partir de las reglas fijadas en el precedente Vásquez Romero está realizando una interpretación distorsionada del rol garante que le fuera confiado en el marco del artículo 1 de su Ley Orgánica de creación.

El Proceso constitucional de Amparo.

Es sin duda uno de los procesos más completos en el ámbito constitucional adjetivo. De origen mexicano, ha sido reafirmado su carácter subsidiario en los diversos fallos emitidos en sede constitucional, al ocuparse de los derechos que no son objeto de protección de los demás procesos de la libertad, tal como se afirma por el Tribunal Constitucional Peruano (2006) en un caso en que se incide respecto a su contenido esencial resguardado.

Sobre el particular, El Congreso de la República del Perú (2004) ha reafirmado legislativamente su contenido o radio de acción y que es corroborado por Landa (2010) al reforzar nuestra tesis inicial respecto al carácter estelar del amparo.

El asunto de fondo es que a partir de la emisión de la STC N° 0987-2014-PA, el citado proceso se ha visto condicionado en su accionar tras la configuración de supuestos que vienen haciendo de la justicia amparista inaccesible a los litigantes y que se puede confrontar con el número de expedientes archivados con flagrante afectación del derecho de defensa con motivo de la expedición de más de diez millares de sentencias interlocutorias denegatorias sobre las cuales hay posiciones encontradas en la comunidad jurídica peruana.

El Precedente Constitucional Vinculante

Resulta necesario afirmar que es la ratio decidendi en una sentencia con efecto normativo en el que se configura el precedente conforme a la legislación procesal constitucional en el Perú.

En esa línea, Landa (2010), García (2009), Rodríguez (2007) y, Díez y Pasquel (2004), confirman la trascendencia de los precedentes en el marco del objetivo de predictibilidad de la justicia en el campo de la libertad.

Ahora bien, dentro del contexto abordado conviene señalar que el Tribunal Constitucional Peruano (2015) en otro precedente en materia laboral – público fijó reglas vinculantes que fueron duramente cuestionadas por uno de sus magistrados mediante su voto singular y en que conforme advertimos en líneas previas, se confirmó la desnaturalización de la justicia amparista.

En este orden de ideas, es un conjunto de reglas jurídicas fijadas por el máximo intérprete del Texto Constitucional que tienen fuerza de ley, pero no es ley, y al carecer del elemento coercitivo permite el apartamiento de su aplicación previa justificación.

Sentencia interlocutoria denegatoria.

Con motivo de la STC 0987-2014-PA en el Perú, se adopta la figura de la sentencia interlocutoria denegatoria que conforme a una publicación realizada en la Ley (2014) en puridad constituye un auto de improcedencia.

Tenerse en cuenta que conforme a lo prescrito en la carta constitucional peruana la calificación del recurso de agravio corresponde a la sala superior del órgano judicial que expidió la sentencia denegatoria en segunda instancia sea en materia de amparo u otro y no por el Tribunal Constitucional.

Al respecto, Blume (2014), sostiene que “no obstante que la figura de la sentencia interlocutoria denegatoria es vista comúnmente por la doctrina como una resolución que tiene la naturaleza de un auto, que no resuelve el fondo de la controversia sino un asunto meramente procedimental, ...”. (p. 37)

El Neoconstitucionalismo.

La eterna discusión entre iusnaturalistas y iuspositivistas cobra fuerza con el surgimiento de esta corriente que según fuentes históricas vería la luz después de la segunda guerra mundial y que se recoge en el presente informe habida cuenta que paradójicamente al carácter principalista o rol garante que deben asumir los jueces constitucionales, se ve menguado con motivo de la STC 0987-2014-PA, situándonos ante una eventual neointerpretación del carácter tutelar del amparo.

El prefijo neo equivale a nuevo, sin embargo, como diversos juristas afirman ¿qué de nuevo se registra en el campo constitucional? Al respecto, Hernando (2008) en clara alusión a lo refrendado por Sanchis enfatiza el carácter principalista de esta corriente frente a la postura garantista o positivista defendida por Ferrajoli y García

Amado. A su turno, Bernal (2009), resalta que, a juicio de García Amado, por el contrario, la Constitución sólo dice lo que dicen sus palabras y no también aquello que los intérpretes derivan del texto constitucional. (p. 81). Esta como es de advertirse en netamente positivista. En dicho sentido también se encuentra Zambrano. (2011)

El origen histórico de la corriente jurídica en mención, siguiendo a Hernando (2008) quien trae a colación el aporte de Carbonel, tiene como punto de partida las experiencias registradas en Europa, por ello es que sus defensores y detractores son o bien de procedencia alemana, española, italiana y en el ámbito sudamericano, colombiana o brasilera.

En su defensa, Pozzolo, afirma respecto a la corriente citada:

El derecho ofrece razones para actuar;

La autoridad del Derecho deriva de estándares internos al derecho mismo;

El objetivo de la teoría es reproducir el modo en que el Derecho funciona;

La idea que el Derecho sea un sistema coercitivo es una perversión de la teoría porque la aceptación del Derecho no puede deberse a razones prudenciales;

El objetivo antiformalista es que se haga de la justicia constitucional haga referencia a principios;

La teoría de la interpretación es ejemplificada por la técnica de la ponderación;

La normatividad del Derecho está relacionada con la promoción del bien común;

El derecho es una realidad dinámica que consiste, sobre todo, es una práctica social compleja;

La validez del Derecho debe entenderse en términos sustanciales;

Existen criterios objetivos que pueden ofrecer un carácter racional a la justificación práctica de las decisiones (la jurisprudencia es instrumental y, por lo tanto, insuficiente). (2011, Pp. 206-207)

Finalmente, Ramírez (2011), con gran acierto señala que estamos frente al fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico y esto tiene mayor sentido con la impronta del neoconstitucionalismo.

Marco histórico social

El problema de la carga procesal sufrido por los tribunales de justicia en el Perú no es de reciente data y conforme a experiencias registradas en el tiempo, se han diseñado diversos filtros que ha tornado más compleja y accidentada la tramitación de los procesos y recursos judiciales representando así mayores exigencias a los justiciables. El Tribunal Constitucional nacional no ha sido la excepción a esta tendencia, dado que desde el año 2005, se ha especializado en diseñar estrategias conducentes a reducir su carga procesal.

El referido Tribunal es los años 2005 y 2006 ensayó algunas estrategias de solución conforme se ha descrito en la sección de realidad problemática para resolver dicho tema, sin embargo, el horizonte ha sido otro, reafirmandose en agosto de 2014 esa inclinación, al punto que más del 70 por ciento de su carga procesal ha sido reducida sí, pero al amparo de sentencias interlocutorias denegatorias en serio perjuicio de derechos tan esenciales de los litigantes como el de defensa y el de ser oídos o escuchados.

En el marco de la constitucionalización del orden jurídico los jueces asumen un rol garante y no de renuncia a sus deberes encomendado por la ley de leyes y su propia ley orgánica de creación.

Marco Conceptual

El Derecho Constitucional; en la línea de García (2008), que toma parte de las nociones construidas por Borja, viene a ser el que dota de soporte normativo al Estado tanto a nivel dogmático como pragmático.

Por su parte, el amparo; es el mecanismo adjetivo de carácter subsidiario o residual que se emplea para la restitución del estado de cosas anterior a la amenaza o vulneración de un derecho constitucionalmente protegidos conforme a lo determinado en la legislación procesal constitucional. (Construcción personal). Asimismo, el precedente constitucional vinculante; en la línea de Quiroga (2016) aporta a la predictibilidad de las decisiones en el campo de defensa de los derechos esenciales del hombre.

A su turno, las sentencias interlocutorias denegatorias; siempre bajo el apoyo de Quiroga (2016) no son más que autos que declaran la improcedencia de un recurso de agravio constitucional emitidos por el TC y el recurso de agravio constitucional la ruta que deben seguir los litigantes para llevar a dicho ente sus expedientes para una última revisión, de ser el caso.

Finalmente, el justiciable es la persona natural o jurídica que solicita tutela jurisdiccional efectiva sea en calidad de demandante o demandado, denunciante o denunciado en las diversas áreas disciplinarias del Derecho. (Construcción personal) y las STC; siglas que corresponden al constructo sentencia del Tribunal Constitucional emitida en un expediente concreto y en el que se ofrece un pronunciamiento respecto a las pretensiones o pretensión formulada en la demanda constitucional. (Construcción personal)

1.4 Formulación del Problema

El problema identificado ha sido abordado desde el paradigma interpretativo, y por tanto se aplicó en el decurso de la investigación los métodos inductivo y hermenéutico, respectivamente.

A continuación, se presentan las interrogantes de investigación:

1.4.1 Formulación de interrogantes de investigación

General:

¿El proceso de amparo preserva intangible su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC N° 0987-2014-PA?

Específicos

¿Se registra alguna paradoja en el campo de la justicia de la libertad como consecuencia de la reducción del carácter tutelar del amparo frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC N° 0987-2014-PA?

¿La especial trascendencia constitucional conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA, constituye una metodología eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo?

¿El tratamiento de la especial trascendencia constitucional en los términos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA persigue confirmar el carácter tutelar de la jurisdicción de la libertad o la simple reducción de su carga procesal?

¿El rechazo de la demanda de amparo bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, conforme a lo estipulado por el Tribunal Constitucional en la STC N° 0987-2014-PA, es coherente con el carácter tuitivo de la jurisdicción de la libertad?

¿A contrario sensu, en atención a lo estipulado por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA, una demanda de amparo merezca una sentencia favorable bajo el argumento que se ha decidido de manera estimatoria en casos sustancialmente iguales?

1.5 Justificación del estudio

El estudio realizado se apoyó en el enfoque racional subjetivo y en fuentes doctrinarias que han permitido interpretar las categorías derivadas de la información recogida mediante entrevistas semiestructuradas a expertos, considerando que, la materia en cuestión genera posturas diametralmente opuestas, por ello, es de necesidad actual determinar si estamos o no ante una neointerpretación del carácter tutelar del amparo a partir de la STC 0987-2014-PA.

Resulta inverosímil que en pleno siglo XXI, los procesos constitucionales ostenten características inquisitivas, máxime si se encuentra vigente el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, por ello, ha sido necesario efectuar la investigación atendiendo que el amparo es el último recurso del que disponen los justiciables es la vía constitucional y que en forma categórica está siendo afectada con el precedente en cuestión.

En dicha línea, se enfocó la afectación de derechos constitucionales tales como tutela jurisdiccional efectiva, derecho de defensa en más de diez millares de litigantes peruanos, así como el principio de inmediación; en el caso de Abogados, el principio de defensa cautiva.

De mantenerse las reglas contenidas en el precedente citado, una cantidad significativa de Abogados no podrán ejercer la defensa técnica de sus patrocinados, porque no podrán hacer valer ante las salas del Tribunal Constitucional el derecho que le asiste a sus clientes a ser oídos en el marco de una audiencia pública reduciéndose los procesos constitucionales a la mera escrituralidad, propio del sistema procesal inquisitivo, proscrito en la actualidad y que debería ser reemplazado por un sistema garantista adversarial.

Finalmente, el aporte es teórico, por cuanto se enfatiza en la comprensión e interpretación del fenómeno jurídico abordado para efecto del presente estudio. Asimismo, propone una nueva visión sobre los fenómenos jurídicos que tienen alta repercusión en el amparo, de manera que, el esquema alcanzado bajo el paradigma interpretativo puede aplicarse en temas vinculados al Derecho Civil, Comercial, Laboral, Penal, conforme lo dispongan futuros investigadores.

1.6 Supuestos Categóricos

General

El proceso de amparo no preserva invívita su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC N° 0987-2014-PA.

Específicos

Se registra una paradoja en el campo de la justicia de la libertad como consecuencia de la reducción del carácter tutelar del amparo frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC N° 0987-2014-PA;

La especial trascendencia constitucional conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA, no constituye una

metodología eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo;

El tratamiento de la especial trascendencia constitucional en los términos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA persigue la simple reducción de su carga procesal;

El rechazo de la demanda de amparo bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, conforme a lo estipulado por el Tribunal Constitucional en la STC N° 0987-2014-PA, no resulta coherente con el carácter tuitivo de la jurisdicción de la libertad;

A contrario sensu, en atención a lo estipulado por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA, una demanda de amparo debe merecer una sentencia favorable bajo el argumento que se ha decidido de manera estimatoria en casos sustancialmente iguales;

1.7 Objetivos

General

Interpretar si el proceso de amparo preserva intangible su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC N° 0987-2014-PA.

Específicos

Determinar si, existe una paradoja en el campo de la justicia de la libertad como consecuencia de la reducción del carácter tutelar del amparo frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC N° 0987-2014-PA;

Determinar si, la especial trascendencia constitucional conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA, constituye una metodología eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo;

Determinar si, el tratamiento de la especial trascendencia constitucional en los términos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA persigue confirmar el carácter tutelar de la jurisdicción de la libertad o la simple reducción de su carga procesal;

Determinar si, el rechazo de la demanda de amparo bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, conforme a lo estipulado por el Tribunal Constitucional en la STC N° 0987-2014-PA, es coherente con el carácter tuitivo de la jurisdicción de la libertad;

Determinar si, a contrario sensu, en atención a lo estipulado por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA, una demanda de amparo merezca una sentencia favorable bajo el argumento que se ha decidido de manera estimatoria en casos sustancialmente iguales;

II. Método

2.1. Diseño de investigación

El diseño se ha caracterizado en la línea de Lincoln y Guba (1985) por la profunda conexión entre quien investiga y el objeto de estudio en que destaca la aplicación de estrategias cualitativas y otras herramientas en dicha dimensión. El estudio realizado se sustentó en un diseño hermenéutico y en que tiene significativo influjo el paradigma interpretativo conforme a Medina (2000) en referencia a los aportes de Thomas Kuhn para el cabal entendimiento del constructo paradigma. Al respecto, González sostiene que:

En este paradigma han influido de modo determinante el historicismo, la hermenéutica y la fenomenología, construcciones filosóficas nacidas en Alemania, así como el interaccionismo simbólico oriundo de los Estados Unidos” (2000, p. 230). Agrega: “el paradigma interpretativo renuncia al ideal objetivista de la explicación (erklären) y postula a la búsqueda de la comprensión (verstehen). (2000, p. 232)

Por su parte, los criterios que convergen en el paradigma invocado son: 1) Ontológico, considerando que el tema materia de estudio es abstracto o subjetivo por tanto materia de interpretación; 2) Epistemológico, por cuanto se analiza el proceso investigativo que da origen al conocimiento racional. Las investigaciones cualitativas son racionales, vale decir fruto de la interpretación; 3) Axiológico; es decir una investigación cualitativa bajo este paradigma no está desprovista de valores y; 4) Metodológico; por cuanto los conocimientos en este tipo de investigaciones se obtienen de manera inductiva, por ello el método empleado es el inductivo.

El enfoque cualitativo ha sido el respaldo en la elaboración del estudio y que en el camino señalado por Dorio, Sabariego y Massot (2004) hace posible la comprensión de los objetos de estudio, en el caso puntual los que tienen lugar en el campo del Derecho.

A este respecto, Yin, citado por Verd y Lozares, afirma que:

La investigación cualitativa nunca busca la generalización estadística, esto es, identificar la frecuencia...sino que su objetivo es la generalización analítica, que se refiere a mejorar la comprensión y explicación de los fenómenos vinculados a preguntas del cómo y por qué. (2016, p.114)

Sin perjuicio de lo antes expuesto, conforme a Quintana y Montgomery (2006) en relación al diseño elegido, éste ha permitido incluir nuevos elementos desde las entrevistas realizadas. Asimismo, ha sido posible modificar aspectos contemplados en el proyecto inicial en lo referente a los expertos consultados. En otras palabras, se caracteriza por la apertura, flexibilidad, sensibilidad estratégica y por ser referencial.

Asimismo, habiéndose aplicado entrevistas el año anterior a la ejecución formal del presente trabajo, los datos recolectados permitieron oportunamente llevar a cabo un muestreo integral y de esta forma determinar sobre quiénes serían los expertos a consultar en fase formal de investigación.

Ahora bien, el trabajo que se propone ha sido desarrollado bajo el paradigma interpretativo, habiéndose aplicado el método inductivo, siguiéndose las siguientes etapas o fases:

En la primera etapa, se aplicaron entrevistas exploratorias a expertos de tres nacionalidades con el propósito confirmar la pertinencia del tema de interés;

En la segunda etapa, con la información recogida en etapa exploratoria se determinaron las categorías genéricas;

En la tercera etapa, se recurrió a otros expertos en mayor número con el propósito de realizar entrevistas a profundidad cuya información permitiera fijar discrepancias y coincidencias en el marco de sus opiniones sobre el tema de interés aplicando la técnica de la triangulación;

En la cuarta etapa, se llevó a cabo la interpretación sobre la base de las convergencias y divergencias surgidas entre las opiniones de cada experto vía entrevista;

En la quinta etapa, la interpretación ha permitido llevar a cabo la fase de discusión de resultados que conlleva a la redacción de conclusiones y sugerencias.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, debemos precisar que la estrategia cualitativa que se ha empleado es el de estudio de casos, que siguiendo a Gerring, citado por Verd y Lozares, es entendida como:

Aquella estrategia de investigación basada en el estudio en profundidad de un número reducido de instancias (o incluso una sola) en que el fenómeno objeto de interés está presente. Estas instancias objeto de estudio pueden ser tanto unidades de carácter microsocial, por ejemplo, individuos como de carácter meso o macrosocial, por ejemplo, instituciones o países. (2016, p.50).

2.2. Categorización

Concretamente, en el campo de las investigaciones cualitativas, encontramos categorías que son fruto de un proceso de recolección de datos, las que permiten la interpretación del fenómeno abordado.

Tabla 01

Categorización

Categoría 1: Proceso constitucional de amparo	<p>Subcategorías</p> <p>a) Proceso constitucional de la libertad;</p> <p>b) Tutela de urgencia;</p> <p>c) Carácter residual o subsidiario</p>
Categoría 2: Precedente constitucional vinculante	<p>Subcategorías</p> <p>a) Regla jurídica sustantiva;</p> <p>b) Regla jurídica procesal;</p> <p>c) Carácter vinculante o fuerza normativa.</p>

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Estas categorías han sido definidas gracias a las entrevistas iniciales que hemos realizado a juristas de la República de Argentina, Colombia durante el año 2016 en contraste con los datos cualitativos proporcionados por un jurista nacional.

2.3. Sujetos participantes

Yin, citado por Verd y Lozares parte de una pregunta interesante:

¿Cómo puede generalizarse a partir de un solo caso? Las respuestas suelen sostenerse en argumentos muy parecidos: la investigación cualitativa nunca busca la generalización estadística, esto es, identificar la frecuencia con que se da un fenómeno o un comportamiento dentro de una población dada con un grado de error y significatividad previamente establecidos, sino que su objetivo es la generalización analítica, que se refiere a la posibilidad de mejorar la comprensión y explicación de los fenómenos vinculados a preguntas del tipo cómo y por qué. (2016, p.114)

Esta generalización analítica sólo es posible con el apoyo de informantes clave a quienes se les ha realizado entrevistas durante el año 2017 conforme se puede evidenciar en la tabla que se muestra a continuación.

Todas las personas descritas, tienen experiencia en el objeto de comprensión e interpretación y sus percepciones son recogidas a través de audios que han sido debidamente transcritos permitiéndonos la construcción de la interpretación que desemboca en la propuesta que alcanzamos en la parte in fine.

Tabla 02
Muestreo

Edad	Profesión	Centro laboral	País	Experiencia	Función	Cant.
30-70	Abogado	Tribunal Constitucional	Perú	Amplia	Magistrado	01
30-50	Abogado	Tribunal Constitucional	Perú	Amplia	Abogado del Gabinete de Asesores	01
30-50	Abogado	Poder Judicial	Perú	Amplia	Juez Constitucional	01
30-70	Abogado	Poder Judicial	Perú	Amplia	Personal permanente	01
30-50	Abogado	Poder Judicial	Perú	Amplia	Abogado de la Procuraduría	03
30-50	Abogado	Universidad Privada Estudio Jurídico Particular	Perú	Amplia	Docente y litigante	03
30-50	Abogado	Universidad Pública Estudio Jurídico Particular	Bolivia	Amplia	Docente y litigante	01

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Como es de verse en líneas precedentes, el muestreo es pertinente, adecuado, conveniente, oportuno y en función a la disponibilidad de los recursos manejados, siguiendo a Quintana y Montgomery (2006).

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, fiabilidad

Técnica

Con respecto a la técnica, Verd y Lozares (2016), señalan claramente que, en este tipo de trabajos:

La entrevista cualitativa es el método que permite obtener mayor profundidad y detalle de la información. Agregan: utilizaremos la entrevista cualitativa cuando se pretenda aprovechar para la investigación la posición privilegiada o especialmente relevante de las personas entrevistadas en relación de los hechos que estudiamos. Se trata pues, de entrevistas a informantes clave. (Pp.150-151)

Siguiendo a los autores antes citados, la entrevista es semidirigida o semiestructurada. Conforme afirman, se parte de un guión de preguntas elaboradas previamente que se aplican con flexibilidad durante la interlocución. Las respuestas son libres o abiertas. Este manejo flexible del cuestionario implica que en función del desarrollo de la entrevista se alterará el orden previamente establecido o la formulación específica de las preguntas. (Verd y Lozares, 2016, p.152)

Instrumento

En la línea que propone Kvale (2011) la guía de la entrevista es sin duda la que nos permite definir el contexto en que se proceda con el recojo de información

clave. En efecto, durante los meses de investigación fue posible ir perfilando las interrogantes por cuanto uno de los entrevistados en un primer momento era parte del colegiado constitucional máximo del país y en la actualidad está a cargo de éste.

En el caso de la investigación de naturaleza cualitativa no se abordan los tópicos de validez y confiabilidad, dado que siguiendo a Álvarez y Jurgenson (2003) que citan a Norman Denzin “se realizará una triangulación de datos que permite dotar de mayor autenticidad al presente trabajo de investigación”. (p.31).

Para efecto de la presente investigación el instrumento es una guía de entrevista semi-estructurada que se anexa en la parte in fine.

Fiabilidad de los resultados de la investigación

Los hallazgos del presente estudio son confiables por cuanto, se cuidó la pertenencia entre los supuestos categóricos, temario y contenido de la guía de entrevista semiestructurada empleado en el recojo de datos con el apoyo de los expertos que participaron como sujetos informantes, luego todo ello fue sometido a un proceso de análisis basado en la técnica de la triangulación. Durante todo ese camino, ha ido aumentando la fiabilidad del estudio, gracias a la documentación realizada, siempre en la línea de lo defendido por Flick (2004).

En dicho orden de ideas, el proceso de recolección de datos cualitativos en el estudio se encuentra debidamente documentado mediante audios de entrevista, transcripciones de la información obtenida en matrices de triangulación y con imágenes registradas en la fase exploratoria y formal de investigación.

2.5. Métodos de análisis de datos

El proceso de investigación emprendido tiene como respaldo el diseño hermenéutico, por ello, los datos obtenidos mediante la técnica de entrevista semiestructurada son analizados mediante la técnica de triangulación.

Ahora bien, bajo un criterio de orden epistemológico, se recogieron opiniones de expertos a partir del cual se construyen los conocimientos base de los hallazgos expuestos en la parte final del informe. Conforme afirma Rivas:

El término triangulación es, particularmente, usado en el paradigma de investigación interpretativo cualitativo; en este caso, triangulación significa el uso combinado o complementario de diversos aspectos, técnicas (de recolección y/o análisis de datos), métodos, paradigmas de investigación, teorías o disciplinas distintas, al interior de una misma investigación". (2014, p.563)

En la parte in fine, se anexan las matrices de triangulación que corresponden a la fase exploratoria y formal del proceso de investigación llevado a cabo.

2.6. Aspectos éticos

En el presente trabajo, se pretende describir, comprender e interpretar la situación del proceso constitucional de amparo a partir del precedente vinculante reseñado a lo largo del planteamiento con la intención de aportar en el desarrollo de la disciplina jurídica del Derecho Constitucional en el Perú, de manera que bajo esta propuesta inédita esperamos concretar diversas proposiciones legislativas que permitan una mejor acceso a los justiciables a los diversos mecanismos de protección de la materia constitucional.

III. Resultados

3.1 Estudio preliminar

Con el propósito de interpretar si el proceso de amparo preserva su finalidad a partir del precedente Vásquez Romero, en el presente trabajo se han seguido los lineamientos del paradigma interpretativo, en consecuencia, se aplicó el método inductivo y conforme más adelante se expresa, para efecto de analizar los resultados obtenidos se ha empleado la técnica de triangulación.

El estudio comienza con un conjunto de entrevistas de nivel exploratorio que se realizaron a expertos en el tema de tres nacionalidades distintas con el propósito de confirmar la viabilidad del tema de interés y así determinar las categorías genéricas.

Analizados e interpretados los datos obtenidos en fase exploratoria, entre el 09 y 28 de setiembre de 2016, mediante entrevistas a destacados juristas de las hermanas Repúblicas de Argentina, Colombia y Perú en la ciudad de Lima, se obtuvo lo siguiente:

Tabla 03

Perfil de los entrevistados en fase exploratoria.

Entrevistado	Institución	Función	País
Sáez Capel José			
(Entrev1)	Consejero Juez de la Magistratura	Juez	Argentina
Boss Agudelo Jovanny			
(Entrev2)	Corporación Universitaria Americana Remington	Docente	Colombia
Matos Quesada Julio César	Universidad Privada y defensa libre	Abogado litigante, Docente Universitario	Perú
(Entrev3)			

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Datos cualitativos claves que fueron proporcionados.

Tabla 4

Pregunta 1- Fase exploratoria

¿Representa para usted una paradoja en el campo de la jurisdicción de la libertad, la reducción del carácter tutelar del amparo frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero)?

Interpretación: Los juristas entrevistados en fase exploratoria consideran que sí se origina una paradoja en el campo de la jurisdicción de la libertad, por cuanto los procesos de la libertad tienen que ser una vía expeditiva rápida y limitarla de esa forma constituye una aberración.

Lo interesante de la opinión recogida al señor jurista argentino respecto al tema propuesto en fase exploratoria es que, no obstante que en su país no existe una institución equivalente al Tribunal Constitucional Peruano, la postura es siempre pro Homine, tal como señala el jurista de la República de Colombia en que pese a que su Corte Constitucional se encuentra adscrita al Poder Judicial nacional la visión antropocéntrica se mantiene firme. La apreciación del jurista nacional abordado en esta oportunidad enfatiza la paradoja advertida en la referida institución.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Tabla 5

Pregunta 2- Fase exploratoria

¿Desde su experiencia, considera que el proceso de amparo preserva invívita (viva) su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia, a partir de la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero)?

Interpretación: Los tres juristas abordados en fase exploratoria, señalan que el sistema de por sí acusa deficiencias que de ninguna manera se tengan que endosar a los justiciables.

En definitiva a quienes resulten ser los actores protagónicos de la justicia constitucional se tiene que encargar la defensa de los derechos fundamentales, porque como a decir del jurista Colombiano: como debe saber usted no se puede inventar procedimientos que terminan siendo filtros, o más que filtros muros, y de esa forma señalar que ha sugestionado la justicia, porque se está perdiendo el fin.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Tabla 6

Pregunta 3- Fase exploratoria

¿La especial trascendencia constitucional conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), constituye una metodología eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo?

Interpretación: Esta pregunta ha sido formulada sólo a dos de los tres juristas entrevistados en fase exploratoria, considerando que la entrevista es semiestructurada. Ahora bien, se considera que la falta de unidad de criterio de interpretación en esta área genera problemas.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Tabla 7

Pregunta 4- Fase exploratoria

¿El tratamiento de la especial trascendencia constitucional en los términos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero) persigue confirmar el carácter tutelar de la jurisdicción de la libertad o la simple reducción de su carga procesal?

Interpretación: Esta pregunta ha sido formulada sólo a uno de los tres juristas entrevistados en fase exploratoria, considerando que la entrevista es semiestructurada. Ahora bien, se considera que la carga procesal no tiene que ver con el problema de fondo por que las instituciones están en la posibilidad de contar con mayor número de personas no considerándola como excusa para efecto de la emisión de este tipo de sentencias.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Tabla 8

Pregunta 5- Fase exploratoria

¿El rechazo de las demandas de amparo bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, conforme a lo estipulado por el Tribunal Constitucional en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), es coherente con el carácter tuitivo de la jurisdicción de la libertad?

Interpretación: Esta pregunta ha sido formulada sólo a uno de los tres juristas entrevistados en fase exploratoria, considerando que la entrevista es semiestructurada. Ahora bien, se considera que la existencia de vías igualmente satisfactorias no puede ser razón suficiente para la disminución de derechos, conforme precisa el entrevistado: en este caso el amparo es un proceso constitucional no es un proceso ordinario como otros que existen en el país.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

A partir de la información recabada, en el proceso de investigación surgió la necesidad de recurrir a expertos en el tema, sobre todo aquellos que registren experiencia en el campo de la defensa, docencia universitaria y judicatura en el ámbito constitucional, y a partir de entrevistas semiestructuradas desarrolladas con su apoyo contar con mayores elementos de juicio al respecto.

Paso previo a la elaboración de la guía de entrevista, se decidió navegar en la página web del Tribunal Constitucional del Perú con el propósito de tener datos numéricos respecto a los expedientes resueltos en vía de agravio constitucional y así distinguir aquellos en los que se aplicó el precedente Vásquez Romero. El periodo considerado es desde el 09 de octubre 2014- al 09 de febrero de 2018, conforme se presenta a continuación:

Tabla 9

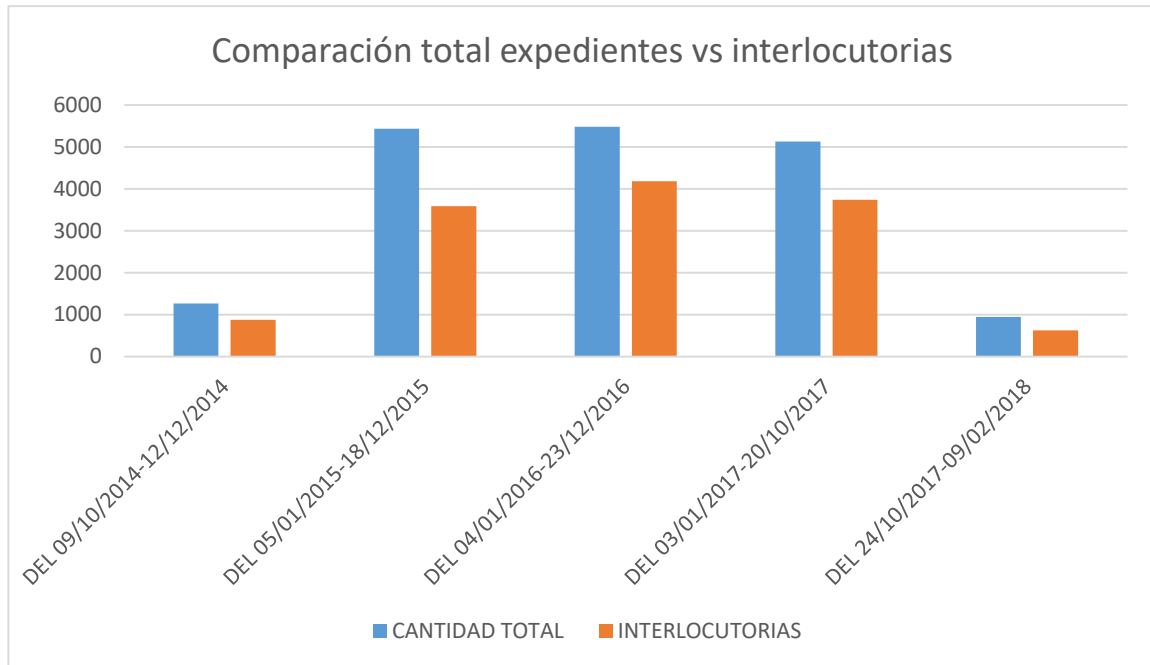
Cuadro comparativo total de expedientes y sentencias interlocutorias

Periodo de emisión	Casos resueltos (en cifras)	Sentencias interlocutorias denegatorias expedidas (en cifras)	Sentencias interlocutorias vs casos resueltos (en términos porcentuales)
Del 09/10/2014-12/12/2014	1264	875	69.22468354
Del 05/01/2015-18/12/2015	5433	3585	65.98564329
Del 04/01/2016-23/12/2016	5482	4187	76.37723459
Del 03/01/2017-20/10/2017	5129	3739	72.89920062
Del 24/10/2017-09/02/2018	944	620	65.6779661
Totales	18252	13006	71.25794433

Nota: La fuente fue elaborada por el autor de la tesis, sustentado en la información extraída de <http://www.tc.gob.pe/tc/public/resolución/pubdet/web/22122017/total>.

Figura 01

Comparación total expedientes vs interlocutorias periodo 09.10.2014-09.02.2018



Nota: La fuente fue elaborada por el autor de la tesis, sustentado en la información extraída de: <http://www.tc.gob.pe/tc/public/resolucion/pubwebmes/ultimo>.

Los datos que se expresan tanto en la tabla como en el gráfico confirman que las categorías genéricas son 1) proceso constitucional de amparo y; 2) precedente constitucional vinculante, considerando que el problema de fondo se registra en la forma cómo los magistrados han resuelto los recursos de agravio constitucional (RAC) interpuestos en procesos de amparo impulsados por 13006 ciudadanos en el período del 09 de octubre de 2014 y el 09 de febrero de 2018. En los casos antes citados el Tribunal Constitucional ha dictado sentencias interlocutorias denegatorias aplicando las reglas jurídicas vinculantes contenidas en la STC N° 0987-2047-PA- Asunto Francisca Vásquez Romero.

Como resulta de los datos revelados, el número de expedientes archivados mediante sentencias interlocutorias denegatorias asciende al 71.25 por ciento del total de causas que han sido tramitadas por el supremo intérprete de la Constitución en el Perú en dicho período.

A partir del primer hallazgo era imperativo acudir a otras fuentes de información, es así que se toma la decisión de acudir a expertos con el siguiente perfil:

Tabla 10

Perfil de cada profesional visitado para las entrevistas a profundidad.

Entrevistado	Institución	Función	País
Ernesto Blume Fortini (Entrev1)	Tribunal constitucional	Magistrado	Perú
Luis Andrés Roel Alva (Entrev2)	Tribunal constitucional	Asesor legal	Perú
Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta (Entrev3)	Poder judicial	Juez especializado en lo constitucional	Perú
Julio Cesar Gonzalo Pacherras (Entrev4)	Poder judicial	Especialista legal	Perú
Erickson Aldo Costa Carhuavilca (Entrev5)	Estudio jurídico particular	Abogado litigante Profesor universitario	Perú
Juan Carlos Rivera Veliz (Entrev6)	Estudio jurídico particular	Abogado litigante Profesor universitario	Perú

Augusto Hernán Tapia Ugarriza (Entrev7)	Estudio jurídico particular	Abogado litigante Profesor universitario	Perú
Ricardo Rivera Aldunate (Entrev8)	Universidad extranjera	Abogado Litigante y Profesor Universitario	Bolivia
Marcos Piña burga (Entrev9)	Poder Judicial	Abogado de la Procuraduría	Perú
Luis Herrera Bustinza (Entrev10)	Poder Judicial	Abogado de la Procuraduría	Perú
Roger Puma Pacco (Entrev11)	Poder Judicial	Abogado de la Procuraduría	Perú

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

3.3 Datos cualitativos proporcionados por los sujetos participantes (expertos).

Entre el 01/08/2017 y el 30/09/2017 se procedió en entrevistar a 11 juristas expertos en el área constitucional de las Repúblicas de Bolivia y Perú. Los datos proporcionados han sido analizados utilizándose la técnica de triangulación. Las matrices construidas para dicho efecto, tienen como referencia las entrevistas realizadas en fase exploratoria en setiembre de 2016 a juristas de Argentina, Colombia y Perú.

Tabla 11

Pregunta 1- Fase formal de recopilación de datos

Pregunta 1: ¿Representa para usted una paradoja en el campo de la jurisdicción de la libertad, la reducción del carácter tutelar del amparo frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero)?

Interpretación: Partiendo de la premisa de lo que se debe comprender por paradoja, y asistidos por la posición mayoritaria de juristas entrevistados podemos señalar que ésta existe en el campo de la jurisdicción de la libertad con motivo de la reducción del carácter tutelar del amparo frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC 0987-2014-PA – Asunto: Francisca Vásquez Romero) como consecuencia de las masivas sentencias interlocutorias denegatorias que se vienen expidiendo por el máximo tribunal de justicia del Perú en expedientes de amparo, recortando la posibilidad que los justiciables puedan arribar a través del Recurso de Agravio Constitucional a una de las salas del Tribunal Constitucional o al pleno en el mejor de los casos; sin embargo estos recursos están siendo rechazados sin que ellos sean oídos y sin respetarse su derecho de defensa, incluso afectando la defensa cautiva que corresponde al ejercicio profesional del Abogado.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Tabla 12

Pregunta 2- Fase formal de recopilación de datos

Pregunta 2: ¿Desde su experiencia, considera que el proceso de amparo preserva invívita (viva) su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia, a partir de la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero)

Interpretación: Partiendo de la premisa que todo precedente vinculante debe ser pro homine, y asistidos por la posición mayoritaria de juristas entrevistados podemos señalar que el proceso de amparo no preserva invívita (viva) su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia, a partir de la STC 0987-2014-PA – Asunto: Francisca Vásquez Romero.

Se ha lesionado la esencia del proceso de amparo como de los demás procesos constitucionales de la libertad considerando que los precedentes vinculantes deben seguir una línea orientada a incrementar la cobertura de protección de los derechos constitucionalmente protegidos, y con mayor razón la forma como se debe interpretar los alcances y la aplicación del precedente Vásquez Romero en cada asunto en particular. Descargar sin desguarnecer debería ser la perspectiva del máximo tribunal de justicia.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Tabla 13

Pregunta 3- Fase formal de recopilación de datos

Pregunta 3: ¿La especial trascendencia constitucional conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), constituye una metodología eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo?

Interpretación: Considerando la importancia de la objetividad con la que se deben definir los criterios de revisión de los recursos formulados por los justiciables para la defensa de sus derechos constitucionalmente reconocidos, y amparados en la posición mayoritaria de los juristas expertos entrevistados, consideramos que la especial trascendencia constitucional conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA – Asunto: Francisca Vásquez Romero), no constituye una metodología (en sentido amplio) eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo, por cuanto es eminentemente subjetivo y es criticado en la actualidad en España, país del cual se ha trasladado el molde procesal al Perú.

Al respecto, se han identificado dos distorsiones; la primera, referida a que el Tribunal Constitucional Peruano recalifica el recurso de agravio constitucional concedido por la Sala Superior y luego lo declara improcedente sin pronunciarse sobre la pretensión siendo incongruente con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 200° del Texto Constitucional Peruano de 1993 y de otro lado, que originalmente el precedente en cuestión había sido concebido sólo para un reducido número de casos con un criterio restrictivo, sin embargo éste viene siendo aplicado en forma indiscriminada a 13006 expedientes entre el 01 de octubre de 2014 y el 09 de febrero de 2018.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Tabla 14

Pregunta 4- Fase formal de recopilación de datos

Pregunta 4: ¿El tratamiento de la especial trascendencia constitucional en los términos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero) persigue confirmar el carácter tutelar de la jurisdicción de la libertad o la simple reducción de su carga procesal?

Interpretación: En virtud de la posición antes recogida, consideramos que el tratamiento de la especial trascendencia constitucional en los términos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA- Asunto: Francisca Vásquez Romero persigue la simple reducción de su carga procesal tal y como ha ocurrido en la experiencia española en que se procura sólo brindar oportunidad a las causa reputadas como importantes dejando la mayor parte para la justicia ordinaria o definida así en la STC 2383-2013-PA – Asunto: Elgo Ríos Núñez, como vía igualmente satisfactoria.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Tabla 15

Pregunta 5- Fase formal de recopilación de datos

Pregunta 5: ¿El rechazo de las demandas de amparo bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, conforme a lo estipulado por el Tribunal Constitucional en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), es coherente con el carácter tuitivo de la jurisdicción de la libertad?

Interpretación: Apoyados en la posición mayoritaria de juristas expertos entrevistados es posible aseverar que el rechazo de las demandas de amparo bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, conforme a lo estipulado por el Tribunal Constitucional en la STC 0987-2014-PA – Asunto: Francisca Vásquez Romero, no resulta coherente con el carácter tuitivo de la jurisdicción de la libertad, considerando que no es posible la existencia de dos casos iguales, como ocurre por ejemplo a nivel del proceso de hábeas data en que se meritúa aspectos vinculados a información personalísima. Al respecto y secundando lo afirmado por Michele Taruffo es complejo demostrar probatoriamente que exista dos casos similares ya que cada caso ostenta peculiaridades especiales.

Ahora bien, este punto es altamente polémico porque habitualmente el máximo tribunal de justicia invoca para la emisión de sus interlocutorias, resoluciones que han sido sólo publicadas en la página web institucional, dejando de lado a los justiciables que por razones accesibilidad tecnológica no podrán verificar el contenido de aquellos casos que presuntamente guarden identidad con las pretensiones que propongan en sus demandas constitucionales.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

Tabla 16

Pregunta 6- Fase formal de recopilación de datos

Pregunta 6: ¿En sentido contrario, en atención a lo estipulado por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), es posible que una demanda de amparo merezca una sentencia favorable bajo el argumento que se ha decidido de manera estimatoria en casos sustancialmente iguales?

Interpretación: Parcialmente, la terna de juristas expertos entrevistados apoya la posibilidad que una demanda de amparo merezca una sentencia favorable bajo el argumento que se ha decidido de manera estimatoria en casos sustancialmente iguales, considerando que es complejo demostrar probatoriamente que exista dos casos similares ya que cada caso ostenta peculiaridades especiales.

En efecto, si el Tribunal Constitucional Peruano persiste en la aplicación de esta regla jurídica procesal, por equidad deberá estimar aquellos casos que cuentan con antecedentes favorables alineados así al principio pro hominen.

Nota: La fuente ha sido elaborada por el autor de la tesis.

IV. Discusión

Para efecto de la categoría: proceso constitucional de amparo, Hernández (2015) concluyó que, “uno de los principales objetivos que pretendió la reforma de la L. O. 6/2007 (España) fue reducir la pendencia de asuntos ante el Tribunal Constitucional... También se ha conseguido reducir las demandas de amparo planteadas... Sin embargo, la consecución de estos objetivos ha sido a costa de un alto precio que puede verse reflejado en una serie de problemas”. (pp. 160-161). En dicha línea, Díaz (2009), sostuvo que el máximo intérprete de la Constitución Ibérica, evita a partir de la reforma introducida acumular expedientes, y le traslada al fuero ordinario, pero sin suprimir esta competencia. (pp. 82-104).

A este respecto, Esquivel (2013), concluyó que, la reforma impulsada en España ha significado una transformación del amparo en sus dimensiones tanto procedimental como estructural, por cuanto, se incorporaron requisitos para su admisión más rígidos alejándolo de su función inherente, esto es la defensa de los derechos fundamentales. (pp. 197-199). En dicha línea, Sosa (2015), concluye que la mayor parte de casos no serán resueltos en la vía del amparo a no ser que tengan especial trascendencia constitucional. (pp. 210-211). En el plano nacional, Blume (2014) señaló que no se puede renunciar al carácter tutelar de la justicia de la libertad”. (p. 32). En esta línea Montesinos (2015).

De otra parte, a nivel de la categoría: precedente constitucional vinculante, García (2017) en Metamorfosis de un precedente discutible: la sentencia interlocutoria denegatoria; “cuestiona al precedente Vásquez Romero por su inflexibilidad y propone mejorar el Poder Judicial a través de la formación de jueces ordinarios constitucionales y tener un Tribunal Constitucional más garantista” (pp.23-34). A su turno, Torres (2015) en Precedente Vásquez Romero: nuevos y mayores obstáculos para el acceso a la justicia constitucional, concluyó que “este no tiene una justificación objetiva que pueda estar sustentada en la recarga procesal, asimismo, que resulta carente de motivación afectando la situación jurídica de los litigantes”. (Pp.79-80)

Por su parte, Landa (2015) respecto a la situación afrontada por el TC afirmó que “está condenado empujar perpetuamente una montaña de expedientes... y así

indefinidamente” (p. 109), agregando Távara (2015) que este tipo de planteamientos responden a la necesidad que tienen los altos tribunales de justicia en el mundo de resolver el problema de la recarga procesal. (p. 74), así como Espinosa (2015) y, Figueroa (2015) que concluyó que, el precedente Vásquez Romero revoluciona el campo de aplicación del proceso de amparo, no faltando razones como para que se haya implementado una fase de transición entre los criterios señalados en el caso Anicama Hernández hacia los actuales que corren anotados en la STC 0987-2014-PA. (p. 132)

En esa línea, Carpio (2015), concluyó que el Tribunal Constitucional se conforme diseñó al precedente descuidando referirse al fondo del asunto en los expedientes que resulten ser de su conocimiento, a partir de las reglas jurídicas fijadas en la STC 0987-2014-PA. (pp. 179-180), así como Gutiérrez (2015).

Sobre este punto, Urviola (2015), concluyó que las reglas jurídicas fijadas en expediente en cuestión ya estuvieron en su momento recogidas en el caso Lagomarcino Sánchez de manera que no es una novedad que se fijen supuestos para la procedencia del RAC en materia de amparo. (p. 39)

Finaliza, Matía, concluyendo que: “...una cosa es que el Tribunal Constitucional disponga de un amplísimo y muy justificado margen para entender cuándo concurre la especial trascendencia constitucional y otra, muy distinta, que disponga de él como si de un arcano se tratara, ajeno al mundo del Derecho”. (p. 367)

Es verdad, que la problemática de la recarga procesal compromete las diversas dependencias del Estado inclusive al Tribunal Constitucional Peruano por ello, desde lo resuelto en el Exp. 1417-2005-PA-Asunto: Manuel Anicama Hernández, se iban ya perfilando mecanismos orientados a reducirla sustentado en filtros de orden procesal que permitieran eliminar casos y que llegaran hasta dicha sede los que representan-entre comillas- una genuina lesión a los derechos constitucionalmente protegidos.

Por ello, luego de haberse consultado diversas fuentes, era necesario determinar si nos encontramos o no ante una neointerpretación del carácter tutelar del amparo.

Luego de la revisión del marco referencial, se decidió recurrir a la técnica cualitativa por excelencia: la entrevista, pero en su modalidad semiestructurada considerando que concedía cierto margen de flexibilidad respecto a qué preguntas formular o no a los entrevistados, pero siempre sobre la base del temario comprendido en la guía. Por su parte, la estrategia elegida para el análisis de la información ha sido la triangulación de sujetos para efecto de la interpretación de los datos alcanzados.

Asimismo, por la naturaleza del trabajo propuesto, en el marco del paradigma interpretativo, se aplicó el método inductivo y de interpretación sobre los datos aportados por los entrevistados, en un primer momento proporcionados en fase netamente exploratoria o preparatoria y luego en la fase formal de recopilación de datos mediante entrevistas a profundidad siendo que un total de 14 juristas de 04 nacionalidades han brindado sus opiniones respecto al tema de interés.

De todo lo expuesto y considerando que el principal hallazgo constituye en que, a partir del precedente Francisca Vásquez Romero, se forja una neo interpretación del thelos del amparo , habida cuenta que el TC en materia de recursos de agravio constitucional opera en clave de Corte de Casación, desnaturalizando así el sentido del inciso 2 del artículo 202° del Texto Constitucional Peruano de 1993, comprometiendo su finalidad, considerando que el competente para determinar si procede o no el referido recurso es la Sala Superior Especializada que conoce en vía de apelación el caso en el que el litigante alega haber sufrido el agravio constitucional invocado exceptuando a los jueces constitucionales y en general de su rol garante, quebrantando el orden constitucional; por ello:

En todos los antecedentes de investigación revisados se fijó como eje de discusión la recarga procesal que afronta el TC, sin advertir que más bien nos encontramos antes una neointerpretación del amparo, que implica la renuncia de los magistrados constitucionales a su deber fundamental de defensa de los preceptos y principios que

orientan todo el ordenamiento, en que la justicia constitucional no debiera merecer restricción salvo las necesarias por equidad permitiendo a los litigantes velar por el respeto de sus derechos más básicos, así como la defensa cautiva, evitándose la escrituralidad, al estar proscrita, al guardar coherencia sí pero con el modelo inquisitivo, enquistado en el sistema peruano por décadas.

En este orden de ideas, el precedente en cuestión hace posible una neointerpretación del carácter tutelar del amparo, y nos conduce a su replanteamiento teleológico.

V. Conclusiones

Primera: El precedente Vásquez Romero ha forjado una neointerpretación del carácter tutelar del amparo, y ésto nos conduce a su replanteamiento teleológico.

Segunda: Se ha registrado una paradoja en el campo del amparo a partir de la STC N° 0987-2014-PA.

Tercera: La especial trascendencia constitucional, no constituye una metodología eficiente y sólo persigue la simple reducción de la carga procesal del TC.

Cuarta: El rechazo de la demanda de amparo bajo los argumentos definidos en el precedente en cuestión, no son coherentes con su carácter tuitivo.

Quinta: Las demandas en el campo del amparo deben merecer una sentencia favorable teniendo como referencia casos análogos con resultados favorables, bajo un enfoque pro homine.

VI. Recomendaciones

Primera: A los señores magistrados del TC, modificar el artículo 11° de su reglamento normativo, para cuyo efecto alcanzamos una propuesta en la parte in fine del presente informe.

Segunda: A los señores magistrados del TC, promover el overruling a nivel del precedente Vásquez Romero.

Tercera: A los señores magistrados del TC, modificar a nivel del precedente Vásquez Romero el supuesto de la especial trascendencia constitucional al no constituir una metodología eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo y otros mecanismos, sin perjuicio de afirmarse que sólo persigue la simple reducción de su carga procesal.

Cuarta: A los señores magistrados del TC, suprimir a nivel del precedente Vásquez Romero el supuesto en virtud del cual se rechazan los RAC bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en situaciones análogas por no ser coherente con el carácter tuitivo del amparo, debiendo incluirse un supuesto que establezca que una demanda constitucional merezca una sentencia favorable bajo el argumento que se ha decidido de manera estimatoria en casos análogos, bajo el principio pro homine.

Quinta: A los señores magistrados del TC, suprimir a nivel del precedente Vásquez Romero el supuesto en virtud del cual se pueden declarar improcedentes los RAC por contravenir un precedente vinculante considerando que éste tiene fuerza de ley por no es ley, además que los juzgadores pueden apartarse de su aplicación previa fundamentación.

Sexta: A la Presidencia de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, se sugiere iniciar las acciones legales, de considerar pertinente que conduzcan al respeto del artículo 3° del Código de Ética del Abogado (aprobado en abril de 2012) , en el extremo que teniendo la abogacía por fin la defensa de los derechos de las personas y la consolidación del Estado de Derecho, la justicia y el orden social; la emisión de sentencias interlocutorias denegatorias impiden que los letrados puedan

informar oralmente ante el Tribunal Constitucional atentándose contra la defensa cautiva y el derecho de defensa de los justiciables.

VII. Propuesta



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Proyecto de innovación/mejoramiento

Título

Fortalecimiento del rol garante de jueces y magistrados
en el ámbito del amparo

Autor:

Mg. Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano

Asesor:

Dr. Rodolfo Fernando Talledo Reyes

Lima – 2018

1. Datos de identificación:

Título del proyecto: Fortalecimiento del rol garante de jueces y magistrados en el ámbito del amparo		
Nombre del ámbito de atención:		
Departamento: Lima.	Provincia: Lima	Localidad: Lima

2. Financiamiento:

Monto total: 10000.00	Financiado por el Tribunal Constitucional Peruano y por el sector privado
-----------------------	---

3. Beneficiarios

Directos:	Indirectos:
-----------	-------------

Litigantes en el área constitucional.	Familiares de los litigantes.
---------------------------------------	-------------------------------

4. Justificación

Entre el 01 de octubre de 2014 y el 09 de febrero de 2018, se ha resuelto un total de 13006 expedientes utilizándose las reglas contenidas en el precedente Vásquez Romero. A partir éste, se forja una neo interpretación del carácter tutelar del amparo, atendiendo que el TC en clave de Corte de Casación, desnaturalizando así el contenido del inciso 2 del artículo 202° del Texto Constitucional Peruano de 1993.

Ahora bien, el amparo es el más empleado para la defensa de los derechos sustantivos considerando que para llegar a sus predios se tiene que agotar vías previas como la administrativa y lo que hoy se conoce como vía igualmente satisfactoria (penal, civil, laboral, contencioso administrativo, comercial, etc.), en suma, un genuino vía crucis jurídico.

En el precedente en cuestión se desarrollan 04 supuestos que tornan la tramitación del RAC más compleja e inaccesible a los litigantes en el Perú y tampoco se tiene en cuenta la importancia de la inmediación, oralidad, y sobre todo el derecho de la parte interesada a ser oída y así el juzgador disponer de mayores elementos de juicio.

Asimismo, que al emitir una sentencia interlocutoria denegatoria se recorta el derecho de defensa al justiciable y la posibilidad que los Abogados puedan efectuar una adecuada intervención en las audiencias, de las que se prescinde a partir de la aplicación del presente Vásquez Romero.

Bajo un enfoque eminentemente garantista, lo que se debe promover es un cambio cualitativo y no cuantitativo como se viene realizando en el seno del referido Tribunal en el que por referencias de su ex Presidente, Dr. Manuel Miranda Canales

en su discurso en que desarrolló la memoria institucional fechado el 04.01.2018 confirmó que se ha venido aplicando en su institución un plan de reducción de la carga procesal entre los años 2016 y 2017 y se ha superado las metas fijadas sin hacer reparos respecto a la cantidad de expedientes constitucionales en que los justiciables no tuvieron oportunidad de asistir a una audiencia y muchos menos que su defensor efectúe a favor suyo la defensa técnica afectándose así el principio de inmediación.

Los precedentes vinculantes tienen fuerza de ley, pero no son ley, por tanto, carecen del elemento coercitivo; en tal sentido, constitucionalmente no se puede aceptar que un recurso de agravio pueda ser declarado improcedente cuando se contradiga alguno de los 45 que a la fecha ha fijado el mencionado ente en diversas materias, debido a que esto constituye una distorsión al genuino sentido del sistema jurídico al que pertenece el Estado Peruano. Además, que los jueces pueden apartarse de la aplicación de un precedente vinculante expresando con claridad en sus resoluciones los motivos que orientan tal decisión.

5. Diagnóstico

De no llevarse a cabo el overruling a nivel del precedente Vásquez Romero se corre el alto riesgo que se reduzca la carga procesal a nivel del TC, pero bajo consecuencias negativas que alcanzarían a miles de litigantes en el Perú

Adjuntamos al final del documento (Anexo 01) el Árbol de problemas y objetivos.

6. El problema:

A partir de la STC 0987-2014-PA, se condiciona la tramitación del RAC impidiendo que miles de litigantes accedan a las bondades del amparo trayendo como consecuencia la renuncia de los jueces y magistrados constitucionales a la renuncia de su rol garante

7. Impacto del proyecto en los beneficiarios directos e indirectos

beneficiarios directos	Litigantes en el área constitucional, concretamente quienes emplean la vía del amparo.
beneficiarios indirectos	Familiares de los justiciables.

8. Objetivos

Objetivo General	Objetivos Específicos	
Optimizar el servicio de justicia en el campo constitucional	1	Modificación parcial del reglamento del TC.
Fortalecer el rol garantista de jueces y magistrados en el área constitucional	2	Modificación de las reglas jurídicas vinculantes contenidas en el fundamento 49 de la STC 0987-2014-PA

9. Resultados esperados

Objetivo específico asociado		Descripción Resultado Esperado
1	1.1	Modificación de 02 incisos y derogación de 02 incisos del artículo 11° del reglamento normativo del TC
2	2.1	Modificación de las reglas jurídicas vinculantes contenidas en el fundamento 49 de la STC N° 0987-2014-PA

10. Planteamiento metodológico

Se basa en las siguientes estrategias.

10.1 Estrategias de Gestión.

Realizada la publicación del artículo científico, inmediatamente cursaremos un documento formal a la Presidencia del Tribunal Constitucional Peruano adjuntando un proyecto de modificación y derogatoria de los incisos contenidos en el art. 11 de su reglamento normativo así como, se alcanzará el pedido formal de modificación de las reglas jurídicas vinculantes contenidas en el fundamento 49 de la STC 0987-2014-PA

11. Actividades

Objetivo específico 1.1: Modificación de 02 incisos y derogación de 02 incisos del artículo 11° del reglamento normativo del TC					
Actividad	Responsable	Inicio y término (cronograma)		Productos	Cantidad de beneficiarios
Presentación del proyecto de Modificación de 02 incisos y derogación de 02 incisos del artículo 11° del reglamento normativo del TC	Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano	Inicio (octubre 2018)	Término (noviembre 2018)	Proyecto	1000 litigantes

Objetivo específico 1.2: Modificación de las reglas jurídicas vinculantes contenidas en el fundamento 49 de la STC N° 0987-2014-PA					
Actividad	Responsable	Inicio y término (cronograma)		Productos	Cantidad de beneficiarios
Presentación del proyecto de Modificación de las reglas jurídicas	Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano	Inicio (octubre 2018)	Término (noviembre 2018)	Proyecto	1000 litigantes

vinculantes contenidas en el fundamento 49 de la STC N° 0987- 2014-PA.					
--	--	--	--	--	--

12. Presupuesto

a. Gastos presupuestarios:

Actividad asociada (Número)	Gastos de Operación	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1.1	Asesoría y redacción de la propuesta de mejora del reglamento del TC	1	5000.00	5000.00
1.2	Asesoría y redacción de la propuesta de mejora para el overruling a nivel del precedente Vásquez Romero.	1	5000.00	5000.00
Gasto total (Operación + Desarrollo Profesional)				

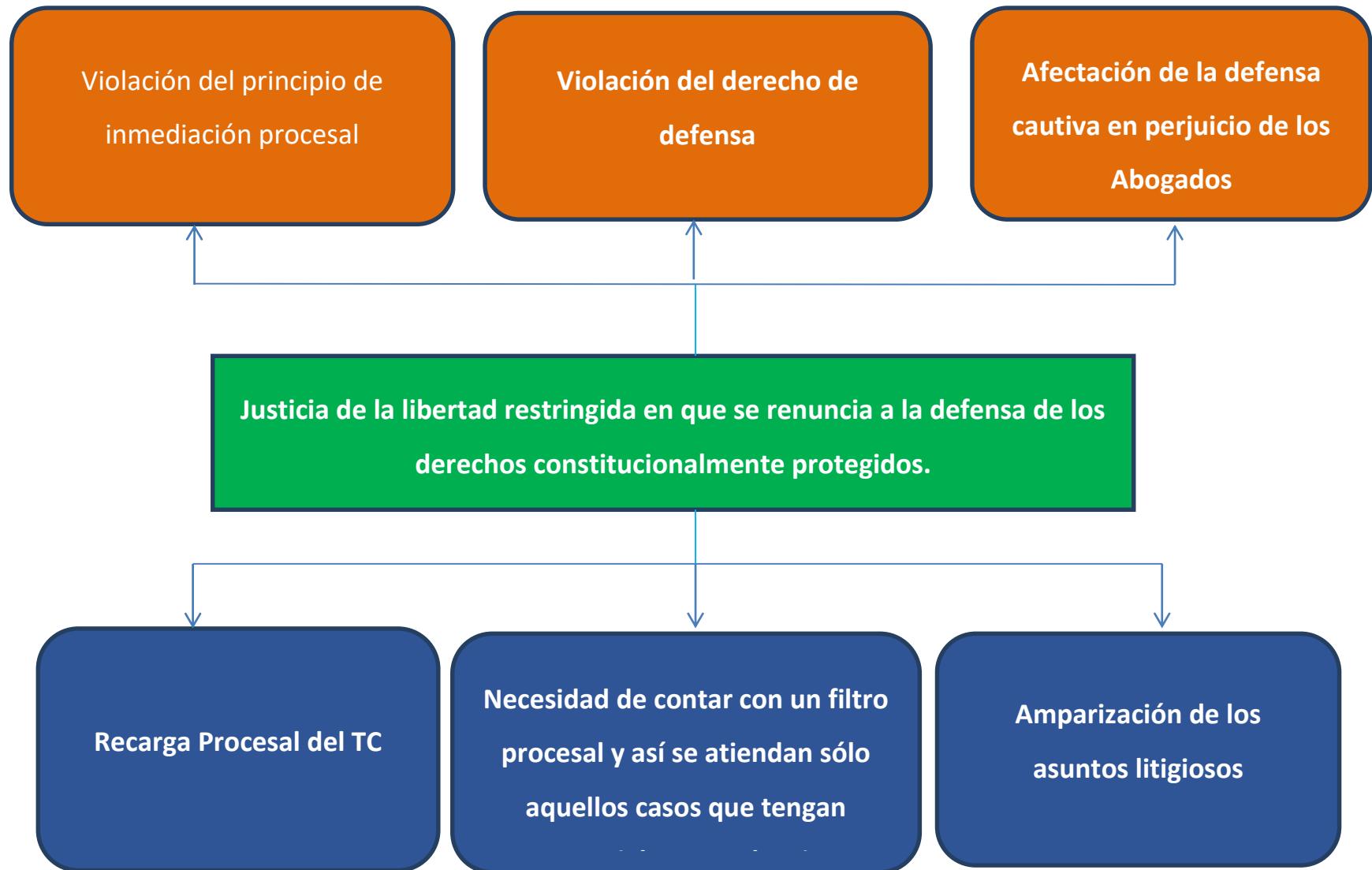
13. Diseño de seguimiento y evaluación del plan

Resultados esperados		Dimensiones	Indicadores de logro	Medios de verificación	Periodicidad	Responsables de la evaluación
1	Aceptación de propuesta de mejora del reglamento del TC	Proyecto de modificación normativa	Proyecto elaborado previa asesoría técnica.	Proyecto de modificación normativa en soporte físico según guía de técnica legislativa del MINJUS presentado a la presidencia del TC	Mensual	Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano Rodolfo Talledo Reyes
2	Aceptación de propuesta de mejora del precedente Vásquez Romero.	Proyecto de modificación jurisprudencial	Proyecto elaborado previa asesoría técnica.	Proyecto de modificación jurisprudencial en soporte físico según guía de técnica legislativa del MINJUS presentado a la presidencia del TC	Mensual	Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano Rodolfo Talledo Reyes

14. Sustentabilidad

La propuesta, se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos sin perjudicar el contexto. Los recursos financieros se van a gestionar a nivel de TC y de parte del sector privado considerando que los cambios que se puedan introducir en las normas en cuestión repercuten favorablemente en la situación jurídica de miles de litigantes del país.

Árbol de problemas



Árbol de objetivos



VIII. Referencias

Álvarez, J. y Jurgenson, G (2003) *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. Ed. México: Paidós Educador.

Bernal, C. (2009) *El Neoconstitucionalismo y la normatividad del Derecho*. Ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Bielsa, R. (1959) *Derecho Constitucional*. Buenos Aires: Depalma.

Blume (2014) *Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional*. Ed. Lima: Adrus D. y L Editores/ Título del trabajo: La Sentencia Interlocutoria Denegatoria.

Carpio, E. (2015) *El rol del Tribunal Constitucional. Balances, problemas y perspectivas a partir de un precedente*, publicado en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 08 “La Especial Trascendencia Constitucional”, Centro de Estudios Constitucional- Tribunal Constitucional del Perú, Año: 2015.

Centro de Estudios Constitucionales (2015) *La especial trascendencia constitucional- Revista Peruana de Derecho Constitucional*. Ed. Lima: CEC- Tribunal Constitucional Peruano-

Congreso de la República del Perú (2004) *Código Procesal Constitucional*. Ed. Lima.

Correa, R, (2007) *Derecho Constitucional Comparado*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.

De la Cueva, M. (2008) *Teoría de la Constitución*. 2° Ed. México: Editorial Porrúa.

De la Oliva, A. (2009) *La perversión jurídica del amparo constitucional en España*, publicado en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLII, núm. 124, enero-abril, 2009, pp. 355-387; Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México, recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42715756013>, el 06 de febrero de 2017.

Díaz, F (2009) *Tribunal constitucional y procesos constitucionales en España: algunas reflexiones tras la reforma de la ley orgánica del tribunal constitucional de 2007*, publicado en Estudios Constitucionales, vol. 7, núm. 2, 2009, pp. 81-108 Centro de Estudios Constitucionales de Chile Santiago, Chile recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82011841004>, el 10 de marzo de 2017.

Díez Canseco, L y Paquel E. (2004) *Stare decisis, intercambios comerciales y predictibilidad, una propuesta para enfrentar la reforma del Poder Judicial*, publicado en Revista de Economía y Derecho, p. 17.

Duverger, M. (1970) *Instituciones políticas y Derecho Constitucional*. Ed. Barcelona: Ariel.

Espinosa, E (2015) *La especial trascendencia constitucional como causal para el rechazo liminar de recursos de agravio en el Perú*, publicado en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 08 “La Especial Trascendencia Constitucional”, Centro de Estudios Constitucional- Tribunal Constitucional del Perú, Año: 2015.

Eto, G (2002) *Estudios de Derecho Constitucional*. ED. Trujillo: Editora Nuevo Norte.

Figueroa, E. (2015) *La exigencia de «especial trascendencia constitucional» en el ordenamiento constitucional peruano. Indeterminación y reconstrucción del precedente vinculante 0987-2014-PA/TC*, publicado en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 08 “La Especial Trascendencia Constitucional”, Centro de Estudios Constitucional- Tribunal Constitucional del Perú, Año: 2015.

Flick, U. (2004) *Introducción a la investigación cualitativa*. Ed. Madrid: Ediciones Morata.

González, J. (2000-2001) *Cuestiones pedagógicas*, disponible en: Revista de Ciencias de la Educación, ISSN 0213-1269, ISSN-e 2253-8275, N°. 15 (Ejemplar dedicado a: Educación y calidad de vida), pp. 227-246

García, V. (2009) *Las sentencias: conceptualización y desarrollo jurisprudencial en el Tribunal Constitucional Peruano, publicado en Aspectos de Derecho Procesal Constitucional*. Ed.Lima: Idemsa.

García, V. (2008) *Teoría del Estado y Derecho Constitucional*, Lima: Palestra Editores.

García, D. (2017) *Metamorfosis de un precedente discutible: la sentencia interlocutoria denegatoria*, publicado en El Amparo en la actualidad, posibilidades y límites (Doctrina Constitucional), Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Centro de Estudios Constitucionales del Perú.

García, D. (2007) *Constitución y Política*. 3° Ed. Recuperado de: <http://www.garciabelaunde.com/Biblioteca/ConstitucionyPolitica.pdf>, el 10 de febrero de 2017.

Goig, J. (2013) *La interpretación constitucional y las sentencias del tribunal constitucional. De la interpretación evolutiva a la mutación constitucional*, publicado en Revista de Derecho UNED, núm. 12, ISSN 1886-9912, pp. 257-292.

González, M. (2013) *Derecho Constitucional General*. Lima: Editorial Universitaria de la Universidad Ricardo Palma.

Gutiérrez, R. (2015) *La especial trascendencia constitucional Un análisis desde el derecho comparado y la legitimidad del derecho constitucional*, publicado en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 08 “La Especial Trascendencia Constitucional”, Centro de Estudios Constitucional- Tribunal Constitucional del Perú, Año: 2015.

Centro de Estudios Constitucionales. (2015) *Poesía y Derecho Constitucional. Una conversación*. Ed. Lima (Dir. Carlos Ramos Núñez) Peter Haberle y Héctor López Bofill, una conversación.

Esquivel, Y. (2013) *El requisito de la especial trascendencia constitucional: «decidir no decidir, recuperado de: [http:// revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/221](http://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/221), el 10 de febrero de 2017.*

Herrera, D. (1987) *Derecho Constitucional e Instituciones Políticas*. 2° Ed. Lima: Eddili.

Hernando, E. (2008) *Neoconstitucionalismo y teoría de la argumentación jurídica*, publicado en Gaceta Constitucional, Año: 2018 Tomo VII, Lima-Perú.

Henríquez, H. (2007) *Derecho Constitucional*. Ed. Lima: Editorial Fecat.

Hernández, M. (2015) *El amparo constitucional. Doctrina y problemas actuales. La admisibilidad del recurso*, recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5157768>. Pdf, el 10 de febrero de 2017.

Kvale, S. (2011) *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Ed. Madrid: Ediciones Morata.

Landa, C. (2015) *Límites y alcances de la «especial trascendencia constitucional*, publicado en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 08 “La Especial Trascendencia Constitucional”, Centro de Estudios Constitucional- Tribunal Constitucional del Perú, Año: 2015, Lima-Perú.

Landa, C. (2010) *Los precedentes constitucionales: el caso del Perú*, en: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional ISSN 1138-4824, núm. 14, Madrid, pp. 193-234, recuperado de: <https://recyt.fecyt.es/index.php/AIJC/article/view/40534>, el 08 de febrero de 2017.

Landa, C. (2010) *El proceso de amparo en América Latina*, en: *Ius et Veritas* N° 41 Lima, pp. 112-126, recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12113/12679>, el 05 de febrero de 2018.

Lincoln Y. S. y Guba E.G. (1985) *Naturalistic Inquiry (Consulta naturalista en español)*. London: Sage Publications India, recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=2oA9aWINeooC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbg_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, el 05 de enero de 2018.

Maletta, H. (2009) *Epistemología aplicada: Metodología y técnica de la producción científica*. Ed. Lima; CIES-CEPES-Universidad del Pacífico.

Manili, P. (2017) *Maestros del derecho constitucional*. Ed. Buenos Aires: Editorial Astrea

Matía, F. (2009) La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo, recuperado de: [recyt.fecyt.es/index.php/ REDCons/article/viewFile/46855/28339](http://recyt.fecyt.es/index.php/REDCons/article/viewFile/46855/28339), el 10 de febrero de 2017.

Medina, C. (2000) *Paradigmas de la investigación sobre lo cuantitativo y lo cualitativo*, recuperado de: [https:// revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1382](https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1382), el 09 de febrero de 2017.

Montesinos, C. (2015) *Tutela multinivel de los derechos: Obstáculos procesales, Tesis Doctoral presentada ante la Universidad Carlos III de Madrid- España*, recuperado de: [www.google.com/ Tutela multinivel de los derechos: Obstáculos procesales.exe](http://www.google.com/Tutela%20multinivel%20de%20los%20derechos:Obst%C3%A1culos%20procesales.exe), el 09 de febrero de 2017.

Mora, G. y Benítez, V. (2015) *Retos del derecho constitucional contemporáneo*. Ed. Buenos Aires- Bogotá : Astrea- Universidad La Sábana.

Mucchielli, A. (1996) *Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas y sociales*. Ed. Madrid: Síntesis.

Pozzolo, S. (2011) *Neoconstitucionalismo y positivismo jurídico*. Ed. Lima: Palestra Editores.

Quintana, A. y Montgomery, W. (Eds.) (2006). *Psicología: Tópicos de actualidad*. Ed. Lima: UNMSM, recuperado de: https://ciencias sociales.webcindario.com/PDF/Cualitativa/Inv_quintana.pdf, el 30 de marzo de 2018.

Quiroga, A. (2016) *El régimen del recurso de agravio constitucional, los precedentes vinculantes y las sentencias interlocutorias*, publicado en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 08 “Cosa Juzgada Constitucional, Centro de Estudios Constitucional- Tribunal Constitucional del Perú, Año: 2016.

Quiroga, H. (1984) *Derecho Constitucional*. Ed. Buenos Aires: Depalma

Ramírez, J. (2011) *El constitucionalismo de nuestro tiempo. Breves apuntes del Neoconstitucionalismo*, publicado en Gaceta Constitucional, Año: 2011 Tomo 42, Lima- Perú.

La Ley (2014) *TC dejará de conocer muchos amparos*, recuperado de: [www. La Ley. Pe](http://www.laley.pe), el 21 de noviembre de 2017.

Rivas, F. (2014) *Diccionario de Investigación científica cualitativa y cuantitativa*. Ed. Lima: Concytec.

Rodríguez, R. (2007) *El precedente constitucional en el Perú: entre el poder de la historia y la razón de los derechos*; publicado en Estudios al precedente constitucional. Lima: Palestra Editores.

Sabariego, M, Massot, I y Dorio, I. (2004) *Métodos de investigación cualitativa*, publicado en Metodología de la Investigación Educativa, Ed, Madrid: La Muralla.

Sosa, J. (2015) *El requisito especial trascendencia constitucional como rechazo in limine exigido por la Constitución*, publicado en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 08 “La Especial Trascendencia Constitucional”, Centro de Estudios Constitucional- Tribunal Constitucional del Perú, Año: 2015.

Távora, F. (2015) *Razones para comprender la «especial trascendencia constitucional»* en el precedente vinculante del Tribunal Constitucional, publicado en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 08 “La Especial Trascendencia Constitucional”, Centro de Estudios Constitucional- Tribunal Constitucional del Perú, Año: 2015.

Torres, H. (2015) *Precedente Vásquez Romero: nuevos y mayores obstáculos para el acceso a la justicia constitucional*, publicado en Gaceta Constitucional, Tomo 91-Julio, Lima-Perú.

Tribunal Constitucional Peruano. (2004) *Reglamento Normativo*, recuperado de: www.tc.gob.pe, el 10 de marzo de 2018,

Tribunal Constitucional Peruano. (2014) *STC recaída en el Expediente N° 0987-2014-PA*, recuperado de: www.tc.gob.pe, el 25 de enero de 2018.

Tribunal Constitucional Peruano. (2007) *STC recaída en el Expediente N° 10490-2006-AA/ TC (fj.6)*, recuperado de: www.tc.gob.pe, el 25 de enero de 2018.

Tribunal Constitucional Peruano. (2015) *STC recaída en el Expediente N° STC N° 5057-2013-AA*, recuperado de: www.tc.gob.pe, el 25 de enero de 2018.

Tribunal Constitucional Peruano. (2006) *STC recaída en el expediente N° 2877-2005-PHC/TC- Asunto: Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez*, recuperado de: www.tc.gob.pe, el 22 de marzo de 2018.

Tribunal Constitucional Peruano. (2005) *STC recaída en el Expediente N° 1417-2005-PA-Asunto: Manuel Anicama Hernández*, recuperado de: www.tc.gob.pe, el 22 de marzo de 2018.

Urviola, O. (2015) *Los conceptos de «contenido constitucionalmente relevante» «especial trascendencia constitucional» en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, publicado en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 08 “La Especial Trascendencia Constitucional”, Centro de Estudios Constitucional- Tribunal Constitucional del Perú, Año: 2015.

Verd, J. y Lozares, C. (2016) *Introducción a la Investigación Cualitativa*. Ed. Madrid. Editorial Síntesis

Zambrano, A. (2011) *Del Estado Constitucional al Neoconstitucionalismo. El sistema Interamericano de DDHH a través de sus derechos*. Ed. Quito: Edilex S.A

Anexos

.

Anexo 1

Matrices de triangulación

Datos cualitativos obtenidos en virtud de las entrevistas exploratorias realizadas a juristas de 03 nacionalidades distintas en el área constitucional en septiembre de 2016

Pregunta 01: ¿Representa para usted una paradoja en el campo de la jurisdicción de la libertad, la reducción del carácter tutelar del amparo frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero)?

Entrev1	En realidad, por lo que usted me cuenta es una paradoja, porque el amparo que no sea de la libertad, el amparo de derechos que establece el pacto de San José tiene que ser una vía expedita rápida y que lo lógico es que cualquier juez letrado puede atender en el mismo, o sea yo me da la sensación de lo que quieren evitar que la burocratización en exceso de burocratización de la justicia lo van a burocratizar mucho más, y por otro lado no se va a ver garantizada las cuestiones constitucionales. En cuanto al habeas corpus limitarlo de esa manera, me parece una aberración, o sea el habeas corpus tiene que ser una cuestión rápida que en 24 horas sea resuelto, y sobre todo en nuestros países donde hoy en día gozamos de cuestiones, gozamos realmente de gobiernos democráticos pero lamentablemente tenemos una triste historia donde a veces el amparo por un lado o el habeas corpus han sabido como forma de garantizar la libertad.
---------	---

Entrev2	Bueno, este tendríamos que tener en cuenta parámetros simétricos. Primero es importante también contextualizar que la llegada de los procesos constitucionales o de las acciones constitucionales a Latinoamérica, se ven como la gran alternativa de la sociedad o al Estado para poder hacer efectiva el acceso a la Justicia dado que es un problema común Latinoamericano que nuestros sistemas no funcionen como deben funcionar. En este entendido, cuando aparece la Justicia Constitucional, finales de la década
---------	---

del 70 y que se fortalece en el 80 y se viene hablando de amparo o acción de tutela, digamos que la relevancia que toma nuestros tribunales es de suma importancia, pero eso genera o generó un cambio también de concepción, no solo en los juristas sino también en el ciudadano común que ve en el amparo para Perú o de tutela para Colombia una herramienta para el todo. Llegando a congestionar en forma incalculable los tribunales constitucionales o las acciones o las Cortes de esta jurisdicción. Y así como fue iniciado por el ciudadano para lograr la solución de cualquier tipo de problema y trajo como consecuencia las congestiones de este tipo de tribunales o la congestión de justicia constitucional pues de esa misma forma vienen respondiendo estos Tribunales. Ciertamente, es creando procedimientos inicialmente no regulados vía jurisprudencial ni siquiera vía legislativa que se convierten en filtros con el objetivo de evadir su función principal y simplemente lograr una descongestión en término de estadística que en ningún momento va solucionar de fondo el problema del asociado para con el estado y se convierte en denegatorio de justicia.

Entrev3

El amparo como proceso constitucional regido a tutelar los derechos de las personas, en ese sentido el tribunal constitucional bajo su visión y criterio tiene toda la potestad de emitir las sentencias que estimen pertinentes, sin embargo, en los últimos años existen algunas divergencias o discrepancias en cuanto a un malentendido sobre la interpretación del amparo, y éste a veces excede sus ámbitos de aplicación, *de aplicabilidad constitucional* y en otros casos también vemos que existen otros mecanismos; muchas veces se da esa paradoja, es decir tanto la sentencia como el tema del amparo reconocido constitucionalmente y en el Código procesal constitucional a veces como que disgregan o no concuerdan con sus fundamentos por lo que si es necesario tener en cuenta que el amparo debe aplicarse conforme estrictamente fue creado, para

proteger derechos fundamentales de la persona.

Pregunta 02: ¿Desde su experiencia, considera que el proceso de amparo preserva invívita (viva) su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia, a partir de la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero)

Entrev1	Yo creo que si esto ocurre en otros países, yo no conozco a fondo Perú pero si varios de la región, lo que creo es que no faltará que recurra primero al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea al pacto de San José, primero a la comisión donde la cuestión se resuelva, diríamos diplomáticamente, y si no se soluciona así dará corte, para que la corte declare ellos todo este sistema.
---------	--

Entrev2	Yo lo que creo es que las deficiencias de los estados no se le puede trasladar a sus asociados. Si usted crea un tribunal constitucional y desarrolla una justicia constitucional para la protección de derechos fundamentales, y por ineficacia estatal no es capaz de mantener esa jurisdicción operando como debe ser usted no se puede inventar procedimientos que terminan siendo filtros, o más que filtros muros, y de esa forma señalar que se ha sugestionado la justicia, porque se está perdiendo el fin. Si el estado asume la creación e implementación de una justicia constitucional y a ella le da las facultades para resolver todos los temas de derechos fundamentales, siendo el tribunal de cierre en ese aspecto, pues el estado debe asumir la responsabilidad de fortalecer esa jurisdicción, no solo en temas de conocimientos, si no en temas de logística, para que sea capaz de responder a la necesidad del estado. De esa forma, la idea de lo que debe pensar el estado es en evitar el gran número de vulneración de derechos fundamentales para descongestionar así la justicia constitucional, pero o no puede ser al contrario, crear muros para no acceder a la justicia constitucional. Y hago una claridad, desde mi posición teórica, yo no soy muy amigo de los tribunales constitucionales, no estaría muy de acuerdo, pero si se creó y está vigente, no puede ser el mismo tribunal el
---------	---

que crea de forma jurisprudencial escollos en el procedimiento para acceder a la justicia, porque hay entes que hay vulneración directa del acceso a la justicia que es garantía judicial, tal y como se lee en la Convención Americana para los Derechos Humanos

Entrev3

Considero que existen lógicamente algunos vacíos en cuanto no a la norma sino a la aplicación de la norma, a la interpretación, recordemos que cada cinco años se cambian los miembros del Tribunal Constitucional, los anteriores miembros del Tribunal Constitucional tenían una opinión o una apreciación de acuerdo a la interpretación, cómo podía tener una aplicabilidad los fundamentos del amparo. El actual Tribunal Constitucional con esta nueva sentencia, prácticamente ha variado en un sentido la inmutabilidad de la norma prescrita. Esto es el amparo como proceso residual protege derechos fundamentales y no necesariamente tenga que existir para proteger derechos o bienes jurídicos que tengan prestancia constitucional, creo que todos los bienes jurídicos en principio deban ser tutelados sean éstos en el campo civil, penal, constitucional como en este caso.

Pregunta 03: ¿La especial trascendencia constitucional conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), constituye una metodología eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo?

Entrev1

Se reformuló la pregunta en los siguientes términos: ¿Cómo se están atendiendo en Argentina los temas constitucionales, entiendo yo, al no contar ustedes con un tribunal constitucional, los juzgados, las salas especializadas del poder judicial de su país atienden estos temas, se han creado algún tipo de precedentes o algún tipo de criterio que hayan hecho de la justicia constitucional sustantiva o procesal, también tarifada como ocurre actualmente en el Perú?

Respuesta: Nosotros en Argentina tenemos un sistema en la constitución que es semejante a Norte América, es decir no hay un tribunal constitucional, sino como usted debe conocer el famoso y el reconocido precedente

Marbury Vs Madison, cualquier juez llega antes de la constitución, es decir que si yo juez he de aplicar una ley y considero que es inconstitucional, así la declaro y no la aplico, por supuesto que yo, esto puede ser recurrido y el que tiene la última palabra en mi país, en la corte suprema de justicia que es corte suprema y tribunal constitucional compuesta por 5 miembros, pero quien tiene que resolver sobre la constitucional de una norma es el juez que tiene que aplicar la ley, porque si está obligado a aplicar una ley que él la considere inconstitucional.

Eso es en un sistema con el que yo le planteé, otros sistemas donde existen tribunales constitucionales, no es así, hay que hacer una demanda de inconstitucionalidad. Pero bueno, esto proviene porque realmente la idea de los tribunales constitucionales viene de la mentalidad europea donde el derecho constitucional recién es conocido como tal, después de la segunda guerra, antes era derecho administrativo, entonces el control es totalmente distinto. A parte una constitución que no tenga un sistema de control constitucional por parte de los jueces es simplemente una declaración de principios y no hay forma de plantear inconstitucionalidad.

Entrev2

No se formuló esta pregunta

Entrev3

Gracias por la pregunta, de mi parte, particularmente con el mayor de los respetos, no existe una interpretación que los miembros del tribunal constitucional hayan dado en ese caso a favor de los derechos de la persona; yo creo que a partir del año 2005 hay muchos casos en los que no hay uniformidad de criterio. En algunos casos sí se protegen los bienes jurídicos y en otros casos no y en algunos los aspectos procesales son tutelados y bien enmarcados, pero en otros casos no. En este caso esta falta de uniformidad crea este tipo de divergencias, entonces no hay unidad de criterio en las sentencias emitidas como debería ser, porque deberían declarar fundada y quizá a favor de la protección de un bien jurídico y de aquí entre dos o tres

años otro pleno del tribunal emitan un pronunciamiento en contra, entonces esta situación constitucional nosotros los abogados, todos los ciudadanos, investigadores, catedráticos debemos hacer un pedido al Tribunal Constitucional para que se mantenga esa unidad de criterio y siempre se base en la protección de los derechos fundamentales.

Pregunta 04: ¿El tratamiento de la especial trascendencia constitucional en los términos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero) persigue confirmar el carácter tutelar de la jurisdicción de la libertad o la simple reducción de su carga procesal?

Entrev1	No se formuló esta pregunta
---------	-----------------------------

Entrev2	No se formuló esta pregunta
---------	-----------------------------

Entrev3	Creo que es la simple reducción de su carga procesal y eso es un tema que no sólo se da en el tribunal constitucional, recuerde que el Poder Judicial y el Ministerio Público, también se dan estas apreciaciones, siempre se echa la culpa a la carga procesal. La carga procesal no tiene nada que ver, porque nosotros incrementamos personas y si las personas son ineficientes igual va a seguir habiendo carga procesal, el tema está en saber llevar el despacho, en este caso constitucional y ellos tiene un staff de asesores y los que pueden interpretar y emitir sentencias unificadoras, pero sin embargo siguen alegando el problema de la carga. En mi experiencia como magistrado del Ministerio Público no creo que sea una excusa para emitan este tipo de sentencias.
---------	---

Pregunta 05: ¿El rechazo de las demandas de amparo bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, conforme a lo estipulado por el Tribunal Constitucional en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), es coherente con el carácter tuitivo de la jurisdicción de la libertad?

Entrev1	No se formuló esta pregunta
---------	-----------------------------

Entrev2	No se formuló esta pregunta
---------	-----------------------------

Entrev3	Mi especialidad es también penal y ustedes conocen que está prohibido la aplicación de la analogía así sea in bonnanpartem (existe in malampartem) y en el caso del Tribunal Constitucional sí existen casos que hayan sido resueltos, existe otra vía (civil, penal o administrativa) por lo que no habría problema de acudir a la vía constitucional, por ejemplo si existe un aparente delito en vía penal y cuando se archiva el caso las partes pueden acudir a la vía civil por el tema de los daños y perjuicios y antes el incumplimiento futuro se puede acudir a la vía constitucional, es decir no puede ser excusa de disminución de derechos fundamentales, en este caso el amparo es un proceso constitucional no es un proceso ordinario como otros que existen en el país.
---------	---

Anexo 2

Matrices De Triangulación

Datos cualitativos obtenidos en virtud de las entrevistas realizadas a juristas expertos en el área constitucional entre agosto y septiembre de 2017(Perú y Bolivia)

Pregunta 01: ¿Representa para usted una paradoja en el campo de la jurisdicción de la libertad, la reducción del carácter tutelar del amparo frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero)?

Entrev1

Yo creo que esto es realmente incompatible con una línea garantista y el tema para mí es sumamente complicado y delicado porque si nosotros observamos las estadísticas que nos ofrece la realidad vamos a ver que casi el 90% de procesos se rechazan por sentencia interlocutoria-denegatoria esto es mediante una recalificación como repito al recurso de agravio constitucional que se declara improcedente y sin vista de la causa sin escuchar a la parte sin darle oportunidad de su derecho de defensa el tema es rechazado, si uno compara las estadísticas anteriores a la creación de este precedente observará que históricamente las improcedencias han ido de un 50% más o menos a un 70% 75% no ha llegado a un 90% y por otro lado las resoluciones que declaraban fundada la demanda fluctuaban entre el 10 y 20% y hoy esas resoluciones se han reducido al 4% es decir hay una situación para mi preocupante porque el tribunal obviamente mediante esta fórmula no está cumpliendo desde mi punto de vista y lo digo con todo respeto y toda consideración a mis ilustres colegas con el rol garantista que le asigna la constitución, es más hay otro tema adicional en esto de la interlocutoria. La interlocutoria es una resolución que digamos corta la posibilidad del justiciable para arribar a esta tercera instancia que por mandato constitucional existe y se adopta esa decisión por 3 votos de 7 es decir decisión tan seria cómo declarar improcedente el recurso de agravio ya concedido procedente a pesar que la competencia de la declaración de procedencia compete al poder judicial a través de la Corte Superior en todo caso ameritaría una decisión del pleno el colegiado sin

embargo son tres magistrados con 3 votos ese proceso queda cortado y el justiciable no tiene más alternativa que irse a la jurisdicción Supranacional, por lo tanto hay que preguntarse si este mecanismo es un mecanismo garantista o no, desde mi punto de vista no es un mecanismo garantista es un mecanismo que puede digamos impulsarse para descargar el movimiento en el tribunal pero yo siempre digo está bien descargar pero descargar sin desamparar, descargar sin desguarnecer, descargar sin aplicar en máximo si la Constitución peruana es sumamente clara vuelvo a repetir cuando dice que contra las resoluciones denegatorias de los procesos de la libertad procede un recurso ante el tribunal constitucional quién interviene en última y definitiva instancia y aquí quiero detenerme qué cosa es una instancia, una instancia es un nivel en el proceso donde el justiciable tiene la oportunidad de que su caso se revise en el marco del debido proceso y en el marco de la tutela procesal efectiva esto es en el marco de máxima cobertura de sus derechos constitucionales y especialmente en su derecho de defensa, de su derecho a ser oído, de su derecho a un debido proceso en donde tenga la absoluta libertad y garantía de exponer con amplitud y sin limitaciones los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan su posición sin embargo esto se ha dejado de lado se dice que en otros tribunales se está aplicando fórmulas parecidas se citan básicamente tres ejemplos; el ejemplo de la corte Suprema de los Estados Unidos, el ejemplo del Tribunal Constitucional Español y el ejemplo de la Corte Constitucional Colombiana; sin embargo creo que se incurre en el error de comparar sistemas distintos y que tienen regulaciones distintas y me voy a referir a cada uno de ellos. En el caso de Estados Unidos tenemos que es un país de 300 millones de habitantes que tiene 40 y tantos estados cada estado tiene su propia administración de justicia con su propia Corte Suprema y la Corte Suprema Nacional es una corte de corte que está habilitada para escoger lo que ve pero nunca niega el derecho a recurrir a ella y a pedirle que vea y el justiciable tiene que recorrer el camino de toda una administración estatal y federal para llegar recién a la Corte Suprema entonces no se puede decir que es igual ese caso cuando es tan clara la constitución al establecer que es última y definitiva instancia. En el caso del tribunal constitucional español es distinto porque ahí el amparo no es un proceso sino es un recurso directo ante el

tribunal y porque ahí hay una ley del parlamento español habilitante para rechazar los asuntos que no tienen trascendencia constitucional y por lo tanto no podemos decir que el tribunal español es instancia última y final sino simplemente ahí se recurre directamente al tribunal y el tribunal en casos excepcionales está habilitado a rechazar por una ley y luego el caso de la tutela perdón de La Corte Constitucional Colombiana también es diferente porque la Corte Constitucional Colombiana no es instancia y la acción de tutela cubre las alternativas de nuestros procesos de la libertad la acción de tutela termina en segunda instancia en segundo grado ante el poder judicial y todo se eleva automáticamente a la Corte Constitucional Colombiana se ha fundado o sea infundada a diferencia de lo que ocurre en nuestro país que sólo tiene el demandante la posibilidad de plantear el recurso impugnatorio contra la resolución denegatoria porque si gana termina ahí, en consecuencia hay habilitación constitucional y legal en el caso colombiano para que elevados los expedientes ya sea con sentencia fundada o sentencia infundada la corte constitucional escoge lo que quiere ver pero ese escogimiento libérrimo si se quiere de lo que se quiere ver, valga la redundancia, está previsto en la ley y en la constitución y por lo tanto tiene una cobertura constitucional y legal pero acá no se ha entendido que el caso peruano es diferente porque no olvidemos que inicialmente de acuerdo a la Constitución de 1979 los procesos de garantía de derecho de tutela de derechos tenían tres instancias en el poder judicial; juzgado, superior y Corte Suprema y se podía recurrir al tribunal de garantías constitucionales de aquella época vía el recurso extraordinario para que ese tribunal interviniera por mandato constitucional como un tribunal de casación que es distinto y la constitución establecía que era un tribunal de casación o de requisición entonces cómo es posible que aquí se aplique una lógica de la casación que no tiene Amparo constitucional y tiene Amparo legal más aún si la Constitución manda que es tercera y última instancia y más aún que el Código Procesal Constitucional que hace bloque de constitucionalidad con la constitución claramente establece en su Artículo 18 que contra las resoluciones denegatorias de Habeas Corpus Y Amparo Habeas Data y Cumplimiento procede el recurso de agravio en el plazo de 10 días para elevar el expediente al tribunal constitucional y más aún cuando el mismo código

habilita al tribunal a conocer el recurso de queja por denegatoria del recurso de agravio con el fin de garantizar que el tribunal revise la improcedencia del recurso de agravio y se pronuncie para asegurar que ese recurso de agravio está realmente bien declarado improcedente o no porque la idea es proteger al justiciable del demandante entonces toda esta situación que se ha generado yo realmente lo encuentro carente de un fundamento constitucional y legal adecuado y creo con todo respeto que no ha sido una decisión adecuada y que está motivando una situación complicada en el país porque el tribunal está rechazando sin audiencias, sin oír, sin respetar el derecho de defensa ni siquiera darles ninguna oportunidad a las partes para rechazar de plano y se rechazan temas bastante delicados por ejemplo Amparo contra resolución judicial bueno es una situación muy complicada porque ha habido un proceso una resolución firme un proceso terminado donde hubo un Amparo que viene contra esa resolución y se recorre el largo camino de las dos instancias ante el poder judicial que son realmente yo que he ejercido la profesión, que es sido defensor, que he estado en el patrocinio judicial.

Entrevistador: Un viacrucis

Entrevistado: Es realmente un viacrucis entonces yo me pregunto el máximo garante de la vigencia efectiva de los fundamentales puede sabiendo que el justiciable pasa 3, 4 y hasta 5 años para llegar a ello, rechazarle de plano sin siquiera darle oportunidad de defensa, honestamente y con todo respeto a mí no me parece que es la salida constitucional adecuada y creo que es un error ojalá en el futuro se deje sin efecto este precedente o en todo caso se constriña al máximo su aplicación y se habrá un poco más la posibilidad de que los justiciables tengan una audiencia cómo era antes sean oídos y se resuelva lo que corresponde pero sin este rechazo preliminar de doble calificación de recurso de agravio.

Bueno yo considero que ese es un retroceso porque nosotros en el Tribunal Constitucional consideramos en

Entrev2

el despacho donde trabajo que es del Magistrado Ernesto Blume Fortini que el Tribunal no sólo es el complemento de la constitución y el controlador de la constitución sino también es el último entre grandes y fundamentales y el precedente Vázquez Romero lo que hace es limitar la actuación del Tribunal Constitucional en esta gran labor que tenía y que ha venido desarrollando más aun entendiendo de que la interlocutoria que es lo que generalmente lo que crea el precedente Vázquez Romero evita que el Tribunal haga una emisión de fondo sino más bien declara improcedente el recurso de agravio constitucional cuando según la Constitución peruana de 1993 el Tribunal es una instancia más dentro de los procesos constitucionales de tutela.

Entrev3

Buenas tardes, en realidad yo no creo que sea un precedente que vulnere los derechos fundamentales, digamos lo que yo entiendo es que el Tribunal ha tratado de ordenar supuestos en la cual ellos van a entrar al fondo del asunto, entendido ello desde la perspectiva del Tribunal Constitucional no solamente de o preste una cantidad digamos en innumerables de casos que tiene que resolver, entonces ellos están haciendo un filtro en la cual casos que ellos consideran que son de relevancia constitucional pasan a ser resueltos por el pleno y dejan de lado los procesos que ya hayan resuelto, ya tenga criterio, digamos que ya el recurso constitucional el agravio no tenga mayor sustento. En realidad a mí no me parecería que afecte digamos los derechos fundamentales, en principio.

Entrev4

Bueno si, este precisamente es una de las paradojas procesalísticas que siempre se han presentado con esta decisión del interprete supremo de la constitución no, en ese sentido quien habla también en maso menos, y disculpe que hable un poco de mí, cuando estuvo un año de terminar mi carrera en la Universidad Católica, porque yo egresé en el año 1983, es decir durante el año 1982 en las épocas en que nosotros hacíamos tesis para ser bachilleres, nos dedicamos a investigar el amparo, en esa época sobre el amparo no había nada, absolutamente nada, y nos dedicamos a recorrer incluso embajada por embajada, para ver las cuestiones constitucionales sobre el amparo y requerir algunas cosas que los pocos agregados jurídicos que

serían de ese país, y desde ya se iba viendo que iba a ser una gran novedad en nuestro país, sobre todo que cuando empiece esta figura con la constitución incluso de 1979, se veía de que se creó esta garantía constitucional, hoy en día llamando proceso constitucional, con la finalidad de respaldar, de hacer respetar todos los derechos fundamentales de la persona excepto el de la libertad individual que lo ve el habeas corpus, en ese sentido la función tutelar del amparo como una forma procesal de hacer respetar un sin número de derechos fundamentales que tenemos básicamente los estipulados en el artículo segundo y algunos otros creativos que nazca a partir del artículo tercero de la constitución, hoy en día pues de alguna manera han ido ajustándose a raíz de esta decisión del Tribunal Constitucional lo que es contradictorio porque cuanto dice la doctrina fundamental y la doctrina constitucional general y aplicada de que los derechos fundamentales en todo caso se van ampliando no se van restringiendo y de igual manera las garantías que hacen respetar estos derechos tienen que irse ampliando y no restringiéndose, por eso que efectivamente Dr. Gutiérrez es una gran contradicción.

Entrev5

Bueno el tema es que el cuestionamiento que se le hace a este precedente Francisca Vásquez Romero recaído en el expediente 987-2014 proceso de Amparo es justamente cuál es la finalidad por la cual el tribunal constitucional tomó esa opción si es para disminuir la carga procesal o es para el fondo poner la tutela de urgencia como una respuesta inmediata, eficaz al propio sistema de protección de derechos fundamentales que es la raíz matriz de la constitución del 93 en su capítulo del artículo 200 respecto a la función propia que cumple el tribunal constitucional en nuestro sistema de jurisdicción constitucional en ese sentido la paradoja sería pues sí prevalecemos la tutela de urgencia o solamente lo tomamos como un mecanismo a través del precedente constitucional vinculante como un mecanismo de disminución de carga procesal esa es la paradoja esa es la contradicción.

En mi opinión hay que partir de una premisa el derecho

Entrev6

de defensa de los justiciables en relación a los procesos de Amparo tiene que ser respetado en todas las instancias de un proceso hay que partir de la premisa que el recurso de agravio como todo medio impugnatorio debe garantizar el derecho de defensa y teniendo presente que relación a el recurso de agravio como un medio impugnatorio y al tribunal constitucional en diversas jurisprudencia ha señalado que toda persona tiene derecho a la impugnación, en ese sentido, siendo este recurso una manifestación del derecho a la impugnación este forma parte de las manifestaciones del derecho de defensa, en ese sentido, recortar la procedencia del recurso para la oportunidad que se le brindaría a los justiciables en relación a garantizar plenamente el derecho de defensa a través del principio de inmediación procesal ya que la procedencia va determinar que el recurso sea materia de contradictorio entre los magistrados del tribunal constitucional y el precedente lo que ha hecho desde mi punto de vista es vulnerar los derechos fundamentales; 1 es el derecho a la defensa, 2 es vulnerar el derecho a la inmediación y 3 desde un punto de vista Macro, desde un punto de vista más abstracto yo podría llegar también a la conclusión que el derecho a la impugnación se ve vulnerado ya que si el tribunal constitucional a la señalado que es un derecho, estas no pueden, es decir, este derecho no puede ser limitado vulnerándose también este principio de índole constitucional como el derecho de defensa como el principio de inmediación.

Entrev7

Yo quisiera ser muy preciso y muy conciso en reafirmar de que todo lo que se tiene que respetar en el proceso constitucional está referido a la oralidad, si nosotros no respetamos la oralidad no vamos a tener acceso a la justicia y como dice Eduardo Couture, el famoso autor de los mandamientos del abogado, justicia tardía no es justicia, la inmediatez en el proceso judicial sea cual sea el campo es y será siempre la oralidad.

Entrev8

Nota: Se reformuló esta pregunta considerando la realidad constitucional de Bolivia

Respuesta:

Muy bien, el planteamiento realmente es complejo, porque demanda ya un análisis desde la filosofía y la teoría del derecho, ya que, sacando tres apuntes, uno sería el hecho de que el tribunal constitucional se convierta en un tribunal que también legisla, ese es una teoría que se ha venido debatiendo desde Ross, Kelsen, Hart, si tiene la habilitación constitucional o la competencia para legislar y viene el tema de la legitimidad de los jueces y un debate inmenso, el segundo elemento tiene que ver con un memorial de recurso de amparo o un recurso en si vaya a contrariar un precedente vinculante y eso constituye una causal de inadmisión de la misma, un rechazo o una denegatoria de fondo de una tutela constitucional, eso si realmente es muy nuevo, pero podríamos generar un explicación desde la teoría, y tercer apunte si eso no constituye en un hecho que podríamos llamar nefasto ya que estaría generando aparentemente, no puedo generar una afirmación, un retroceso respecto a la interpretación y tutela en base al principio al método de interpretación pro hominem, respecto al primer punto que si el tribunal constitucional aun siendo el máximo intérprete de la constitución puede ingresar a legislar, este es un debate realmente muy apasionante, ya que desde Montesquieu el juez solo puede ser “BOUCHE DE LA LOI” que se oye muy bonito en francés que solo puede repetir aquello que está establecido en la norma y no le toca generar otras normas que no sean aquellas que devienen o son originadas por el legislativo. En cambio, en la actualidad esa tesis está siendo muy revisada, muy contrariada, debatida y hasta superada ya que tranquilamente en base a especialmente John Austin que tiene una tesis de fondo que es hacer las cosas con palabras, eso sostiene que el derecho es mero lenguaje y a partir de aquello el lenguaje es vago, es contradictorio, es claro y ese lenguaje es inconcluso y a partir de aquello quien debe concluir el derecho y perfeccionarlo el máximo interprete que viene a ser el tribunal constitucional y esa tesis es la que está imperando hoy en día, ya que el tribunal constitucional le da sentido a los enunciados contenidos en la constitución y al darle sentido no siempre ese sentido va ser sentido acabado por supuesto aquello que está establecido en el enunciado, no siempre va ser ese sentido y esto implica o da a entender que se está formando un legislador realmente positivo o en su caso un legislador negativo, ahora está habilitado para

aquello que algunos teóricos sostienen que sí ya que es el máximo interprete y al darle una interpretación a la norma siempre va encontrar algo que no está regulado en la norma y lo va regular por medio de sus reglas y otros sostienen que no bajo el argumento de la legitimidad o el régimen competencial ya que eso le corresponde solo al legislativo y no al tribunal, eso les lleva a negar que el tribunal pueda a crear este tipo de sub reglas. Ahora Perú debe definirse o tengo entendido tiene definido ya que el tribunal constitucional si puede legislar de forma negativa por medio de la inconstitucionalidad, o de forma positiva como es este caso que puede crear sub reglas. Respecto al segundo punto, que esto de tomar como una contradicción del precedente vinculante por parte de quien interpone la acción de amparo realmente es muy nueva, ya que desde Diego Eduardo López en el derecho de los jueces se tiene que el mismo tribunal constitucional puede generar una sentencia contraria a la anterior que había generado, es decir puede desnegar o puede contrariar sus propias resoluciones el tribunal constitucional o apartarse de la jurisprudencia o la línea si puede pero con mejores argumentos, puede pero el tribunal en su facultad interpretativa y de argumentación constitucional, pero en cambio la pregunta es ¿el ciudadano puede?, pero es el ciudadano quien está planteando la acción perdón el recurso de amparo constitucional y a eso apuntaría esta regla. Ahora podríamos adoptar la tesis anglosajona de que si pueden y replicado por Diego Eduardo López apartarse con mejores fundamentos abría que debatir y yo me llevo como muy buen apunte para generar tal vez un ensayo, se podría no sé en borrador pensando en un borrador pero de borradores, se podría pensar que si puede, puede contrariar un precedente vinculante pero con mejores argumentos, pueden con una fundamentación con una carga argumentativa altísima, pero el tribunal constitucional acá ya está cerrando puerta, está sosteniendo y está afirmando que aquel recurso que contenga una redacción o un sustento contrario a un precedente vinculante es objeto de rechazo, entonces habría que generar un contra ensayo o generar toda un corriente de pensamientos si fuera el caso, de que si podría, porque qué tal el precedente que se encuentra en una sentencia genera una injusticia, entonces estamos habilitados para respetar eso, es realmente honesto respetar ese precedente vinculante o puedo presentar mejor carga

argumentativa para que eso que es injusto se convierta en justo.

Entrev9

Bien mostraré mi posición, para empezar hemos repartir que en la comunidad jurídica de hoy en día, desde mi punto de vista lamentablemente muchas veces existe una actitud temeraria por parte del abogado litigante que con el fin de poder satisfacer los intereses de su cliente muchas veces interpone de manera temeraria indiscriminada acciones de Amparo que no tienen un buen puerto, a qué nos referimos, la acción de amparo está llamada a salvaguardar aquellos derechos fundamentales en su mayoría de carácter procesal, esto es el derecho continente del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el acceso a la justicia, el derecho a la pluralidad de distancia, entre otros, para ello amerita una afectación real, concreta, más no de una apreciación subjetiva y muchas veces equivocada por parte de la defensa técnica de un amparista, precisamente esté precedente vinculante denominado de Francisca Vásquez Romero, el caso Francisca Vásquez Romero busca reducir esa excesiva carga procesal, esos excesivos amparos indiscriminados que llegan a través de un recurso de agravio constitucional al tribunal constitucional, este precedente vinculante, entre sus cuatro puntos el más importante a mi punto de vista es que si el derecho invocado está yendo en contra de un precedente vinculante que el TC a expedido en anterior oportunidad es inoficioso y por tanto improcedente, bajo ese criterio si ya existen precedentes vinculantes por parte del tribunal constitucional caso Huatuco entre otros están marcados por qué interponer una acción de amparo frente a ello, desde mi punto de vista, no, ahora el derecho invocado muchas veces por parte de los abogados litigantes no está inmerso en el contenido sustancial protegido, a qué me refiero con esto, cuando hablamos de contenido constitucionalmente protegido y que lo señala el precedente Francisca Vásquez Romero, que tiene de por si muchos detractores entre ellos acá el doctor, colega Gutiérrez Otiniano, estamos hablando de que el derecho invocado ósea el debido proceso por ejemplo se ha visto afectado, ha sido reducido, por ejemplo hablemos del acceso a la justicia que está inmerso en el contenido del debido proceso, por ejemplo si a mí determinado abogado litigante no

fue debidamente notificado y esto es imputable al órgano jurisdiccional, por ejemplo no fue notificado con la sentencia en la primera instancia, y con ello al no tomar conocimiento, no puede impugnar dicha sentencia que le puede resultar desfavorable existe a todas luces una afectación al acceso a la justicia, ahí por supuesto que sí es recurrible a través de una acción de Amparo en sede constitucional porque es algo imputable al órgano jurisdiccional, pero que sucede en otros casos por ejemplo cuando dicen me han recortado mi derecho a la defensa porque no he sido debidamente notificado pero un momento por favor y lo digo por experiencia y dentro de la procuraduría, usted se cambió de domicilio procesal y eso no lo puso en conocimiento de ningún órgano jurisdiccional, ahí no existe un recorte al derecho a la defensa, al acceso a la justicia y por ende al debido proceso, siendo así a mi punto de vista y a la institución que ya vengo representando como trabajador de ella que es la procuraduría pública del poder judicial, mostramos conformidad, nos allanamos y es parte de nuestro argumento el precedente vinculante que ya caemos en una redundancia se dice, y cuando hablamos de precedente vinculante del caso Francisca Vásquez Romero.

Entrev10

Claro que sí, creemos que abandona la naturaleza tutelar, garantista y finalista de los procesos tutelares de libertad, sabes que el tribunal constitucional debe constituirse como el último resquicio de garantía de los derechos fundamentales, una vez implementado los supuestos de improcedencia establecidos en Vásquez Romero que han sido elevados a bueno al carácter del reglamento normativo del tribunal constitucional, se ha habido una reducción dramática en cuanto a la fundabilidad de las resoluciones en los procesos de tutela, así mismo se han acrecentado las improcedencias de información propia que ha sido recabado por quien les habla, podemos ver que el principal supuesto que ha sido empleado en los procesos al menos el nivel de hábeas Corpus 93% de estos ha sido sobre la especial trascendencia constitucional, la especial trascendencia constitucional a nuestra opinión se constituye como una carga adicional que desvirtúa aún más ya el mal trecho proceso constitucional pues se le transfiere a la persona que busca una tutela en este ente que se constituye como la última instancia en estos procesos

de garantía o heroicos a fin de hacer valer sus derechos, como una carga adicional que nuevamente no permite el ejercicio adecuado de esta tutela o de este agradecimiento.

Entrev11

Muchas gracias Dr., en principio agradecerle por esta entrevista respecto a un tema de suma importancia en el derecho constitucional, bueno respecto a dicho precedente, yo quisiera decir que en realidad es un precedente que en la comunidad jurídica aún no hay una posición unánime hay posiciones que apoyan y hay posiciones que critican, yo diría que desde mi punto de vista estrictamente académico estoy a favor de la posición que critica toda vez que es conforme al artículo 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos nos habla que todo Estado Constitucional de Derecho tiene que tener un recurso sencillo rápido y eficaz para proteger o tutelar un derecho que podría ser afectado por el estado, de manera que yo no comparto toda línea estos precedentes vinculante, porque efectivamente reduce a cualquier ciudadano las expectativas para poder acceder a la jurisdicción del tribunal constitucional todo es que ha incrementado como un filtro adicional que no establece incluso en la condición política, porque la condición política que establece claramente que el amparo procede contra resoluciones desestimatorias de segundo grado y punto, en esa línea yo comparto los fundamentos del Magistrado Ernesto Blume Fortini donde crítica que no se puede poner límites a un ciudadano para acceder a la jurisdicción constitucional.

Pregunta 02: ¿Desde su experiencia, considera que el proceso de amparo preserva invívita (viva) su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia, a partir de la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero)

Entrev1

Yo creo que se ha lesionado la esencia del proceso de amparo como también de los demás procesos, porque no nos olvidemos de los demás procesos de defensa de los derechos fundamentales porque esto también afecta el Hábeas Corpus afecta el Habeas Data y afecta el proceso de cumplimiento yo creo que sí toda

la lógica y la filosofía del legislador Constituyente es una lógica garantista y si los precedentes deben ir en una línea de aumentar la cobertura de protección de los derechos fundamentales este precedente y sobre todo la forma cómo se interpreta de los alcances y la aplicación del precedente obviamente que no se condice con esa lógica y yo diría que está afectando el sentido invívito de lo que es el proceso constitucional de amparo.

Entrev2

En el caso Vázquez Romero como usted sabrá el que crea la sentencia interlocutoria denegatoria lo que hace es limitar al Amparo Entonces ya el amparo va perdiendo un poco su eficacia y más bien el tribunal empieza a perder ese activismo que tenía a favor de los Derechos Humanos ya que limita que los accionantes lleguen a su fuero y este emite un pronunciamiento de fondo.

Entrev3

Lo que pasa es que el amparo es un recurso digamos rápido y sencillo, entonces quienes están llamados a tutelar digamos de primera mano o los primeros que tienen que hacer valer sus derechos a través del amparo son los jueces de la justicia digamos del poder judicial, porque no se olvide usted que el proceso de amparo para llegar al tribunal no va transcurrir dos o tres años en el mejor de los casos, entonces el precedente Vázquez Romero están utilizando pautas para calificar un recurso de agravio constitucional cuando ha sido rechazado este amparo o esta habeas data o este incumplimiento en 2 instancias, y si vemos estadísticamente del tribunal constitucional el 80% de recurso de agravio son rechazados con este colegiado y con el anterior, son los que por una cuestión de desestatización entiendo yo por una cuestión del colegiado en pleno quiere resolver casos que digamos vaya a abarcar la pauta de la justicia ordinaria están estableciendo estos filtros, no.

Entrev4

No, definitivamente crea un cuello de botella para muchas posibilidades y muchos problemas que intentan resolverse, efectivamente como usted dice, son diferentes los requisitos y diversos para que pueda aplicarse esta garantía constitucional para los efectos

del mayor respeto a los derechos fundamentales y efectivamente eso genera pues un problema.

Entrev5

Bien hay que partir de una idea, el proceso de Amparo actualmente en el Perú es un procedimiento que ha materializado lo que es una garantía constitucional como el amparo que está regulado en el artículo 200 es decir, el amparo en un principio es una garantía, con el código procesal constitucional lo que se ha hecho es a esta garantía darle un procedimiento, un procedimiento con garantías con principios y con derechos que todo justiciables se le debe respetar, la naturaleza del proceso constitucional de Amparo es precisamente que ante las vulneraciones o amenazas frente a derechos fundamentales y me voy a referir a un caso muy puntual, el amparo contra las resoluciones judiciales, no es en mi ejercicio profesional ni de muchos abogados pasa al hecho, pasa la situación de que ante un caso los jueces de primero y segunda instancia por diversos motivos tanto de índole jurídico como no jurídico ya me sé carga procesal llámese muchas veces falta de conocimiento del tema ya me sé muchas veces también indefensión por partes de los litigantes y que las partes en estos procesos muchas veces se ven afectadas por la razones que pueden de otra manera se ha podido manifestar en ese sentido, al darse la doble instancia y que los justiciable de alguna u otra manera se han afectados en sus derechos por las vulneraciones, infracciones procesales que pueden darse en el mismo, recurren a este proceso de Amparo precisamente para buscar la nulidad de dichos procesos pero que ocurre en la realidad, muchas veces hay casos por así decirlo que termina en una sala superior, sea esta de índole civil, de familia o laboral por así decirlo y tienen que ellos buscando la tutela de quién es un proceso se vulneraron derechos o garantías procesales o sustantivas también, recurren a un proceso de amparo, pero qué es lo que ocurre en primera y segunda instancia, y es un dicho, una idea generalizada en el marco de los litigantes, lo que ocurre es que estas demandas de amparo tanto en su primera o segunda instancia muchas veces son declaradas improcedentes, ósea los justiciables, mejor dicho los abogados en general qué idea teníamos antes de este precedente que era muy probable que primera o segunda instancia en el proceso de amparo nuestras

demandas iban a ser declarados improcedentes y que a través del RAC a través del recurso de agravio sea el Tribunal Constitucional como un ente autónomo a la vía ordinaria porque quierase o no, es decir, si yo tengo un conflicto por ejemplo civil, yo presento mi amparo pero está dentro, es decir los magistrados que van a resolver el caso son jueces que pertenecen a la misma corte y desgraciadamente hay una idea que sin embargo no hay como probarlo de manera directa pero a través de numerosos casos se ha dado el hecho de que existe lo que se llama un espíritu de cuerpo en el poder judicial, es decir, es muy difícil que en la realidad un juez le anule un proceso a otro juez y más aún un juez le anule la sentencia a una sala por un tema de jerarquía, por un tema de unidad dentro del órgano del poder judicial, entonces los justiciables, lo que hacíamos muchas veces es decir, bueno en las dos primeras instancias en una demanda de amparo probablemente esto se declara improcedente pero a través del RAC buscar efectivamente que el Tribunal Constitucional sea quien verifique si en un proceso ordinario se han vulnerado derechos fundamentales y que esta tenga bien declarado la nulidad del proceso, sin embargo a partir del precedente como ya lo he señalado en mi respuesta anterior, al vulnerarse el derecho de defensa, al vulnerarse el derecho de inmediación, los justiciables lo que van a, es decir, el mensaje que se le transmite a la sociedad es que sencillamente el recurso de Amparo se convierte, mejor dicho el proceso de amparo se convierte en un proceso ineficiente porque al fin y al cabo no va satisfacer los intereses de la sociedad y que en muchas oportunidades y obviamente ya los medios de comunicación ya lo ha informado en diversos casos se comete injusticias, se comete arbitrariedades, se cometen vulneraciones a los derechos fundamentales y si no tenemos al Tribunal Constitucional en un sentido coloquial quién va a defender a la sociedad, si se supone que precisamente el Tribunal Constitucional que es el órgano que tiene la principal labor de defensa de la constitución y en ese sentido los derechos fundamentales tanto en un sentido sustantivo como procesal.

Entrev6

Sí justamente dicha normatividad del tribunal constitucional fue modificado a raíz de este precedente sobre todo del fundamento 49 del precedente constitucional vinculante en materia de comentario y es

	<p>que este precedente expuso, no es cierto, de manera taxativa que aquellas causas que no cumplan los requisitos que voy a mencionar este van a ser rechazadas liminarmente, estos requisitos y estos complementos son primero que carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque, segundo la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional, tercero la cuestión de derecho invocada contradiga un precedente constitucional vinculante lo cual es obvio y cuarto se haya decidido de manera desestimatoria en caso sustancialmente iguales.</p>
Entrev7	La respuesta no está alineada al contenido de la pregunta.
Entrev8	No se le formuló la pregunta por ser el entrevistado extranjero.
Entrev9	<p>Por supuesto que sí, porque delimita y deja en claro que hablamos de una afectación real y concreta y a derechos fundamentales en su mayoría como lo dije en la anterior pregunta de carácter procesal, no de una precisión subjetiva o ante la disconformidad del amparista vamos a interponer una acción de amparo sino cuando existe una afectación real y concreta, imputable al órgano jurisdiccional.</p>
Entrev10	<p>Voy a ser conciso, debo afirmar que este incremento de supuesta improcedencia lo que hace es mutilar el carácter tutelar de este proceso a nivel de Amparo, valiéndome de una conclusión que ha sido también extraída de un muestreo que hemos podido realizar en una investigación previa, toda vez que estos 4 supuestos han permitido que la tasa de fundabilidad en las resoluciones que se han visto desde el 96 hasta julio 2016, de un 18 hasta un 7% lo que significa que muchos de los casos que antes se realizaban sobre el fondo hayan sido desatendidos y hayan sido rechazados sin límites, entonces vemos una desnaturalización y como ya muchas veces ha sido alegado en el voto del magistrado Blume, la justicia constitucional abdicando sus funciones.</p>
Entrev11	Perfecto antes de llegar a la respuesta concreta tenemos que precisar que este precedente vinculante

sale a la luz de que abrí un argumento en el tribunal constitucional que habría demasiada carga procesal entonces este que, cuál es la fórmula para poder disminuir esa carga procesal se copia una experiencia del tribunal Federal Constitucional Alemana llega a España y España llega al Perú y cuál es que al tribunal constitucional sólo va a llegar aquellos casos que tienen especial trascendencia constitucional y aquellos casos que no tengan esa condición no tendría sentido a que llegue al tribunal constitucional por qué, porque quitaría tiempo a los magistrados el tiempo logística ósea no tendría sentido revisar esos casos supuestamente que no tendrían especial trascendencia constitucional de manera que incrementa los requisitos o filtros adicionales que no establece la Constitución naturalmente reduce los objetivos tutelares que tiene el amparo porque finalmente este es un proceso constitucional que tutela derechos fundamentales por tanto no es coherente o no es consecuente con el discurso que el Perú es un estado constitucional de derecho, yo considero que el tribunal constitucional peruano no es como la Corte Suprema de los Estados Unidos que es un tribunal de precedente, en el Perú aun hablamos de tribunal de casos por tanto los ciudadanos debería tener expedito su derecho sin limitación alguna de acudir al órgano constitucional para poder eliminar o cesar cualquier amenaza o afectación a su derecho constitucional invocado.

Pregunta 03: ¿La especial trascendencia constitucional conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), constituye una metodología eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo?

Entrev1

Nota: En el marco de la entrevista, nos anticipamos con lo siguiente que está referido a la pregunta en cuestión, en los siguientes términos:

Entrevistador: Muchísimas gracias Doctor Blume, entendemos de que usted tiene a la fecha aproximadamente 6000 votos singulares en estos temas Doctor.

Entrevistado: Sí, efectivamente, mis votos singulares van hacia la forma de aplicación y hacia la extensión de

este precedente que inicialmente fue concebido como una figura que permitía declarar improcedente la pretensión contenida la demanda en aquellos casos excepcionales de grotesca falta de relevancia constitucional en donde se habilitaba la posibilidad para el tribunal de resolver directamente, lo cual no significa que los justiciables no tuviesen la oportunidad de presentar los descargos respectivos, lo que sí no había en esos casos era la vista de la causa ni informes orales pero repito esto fue concebido para casos muy muy contados muy excepcionales y obviamente vuelvo a repetir siempre y cuando hubiese un pronunciamiento sobre la pretensión contenida en la demanda, ocurre que, una vez que salió este precedente observé que por decisión mayoritaria de mis colegas se interpretaba ese precedente en 2 situaciones con las cuales yo disiento radicalmente, la primera situación es que el precedente Vásquez Romero estaría habilitando, no para declarar improcedente la pretensión y previamente el justiciable tenga oportunidad de presentar por escrito los descargos correspondientes o los fundamentos que escribiesen o digamos las argumentaciones que considerara impertinentes, si no que entendieron como que este precedente habilitaba a declarar improcedente el recurso de agravio constitucional, lo cual a mí me parecía totalmente impropio, porque ya el justiciable venía con un recurso de agravio constitucional concebido por el Poder Judicial cuando interpuso el recurso de agravio contra la Resolución denegatoria de segundo grado, por lo tanto se presentaba una situación en donde curiosamente el justiciable que llegaba al Tribunal con un recurso de agravio declarado procedente por la autoridad competente que era la Corte Superior y recurría al máximo garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales se encontraba que este máximo garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales recalificaba el recurso y lo declaraba improcedente, es decir una doble calificación del recurso de agravio ya concebido para denegar y declarar improcedente el recurso de agravio y no se pronunciaban sobre la pretensión. Esto me pareció a mí realmente incongruente con el mandato Constitucional contenido en el artículo 200 inciso 2 de la Constitución que establece claramente contra las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, procede el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal en última y definitiva instancia, es decir la Constitución establece que somos

instancia de grado y por lo tanto tenemos que conocer el expediente que viene del Poder Judicial cuando se trata de resoluciones denegatorias que han sido impugnadas dentro del plazo; esa fue la primera distorsión que observé y la segunda distorsión consistió en que este precedente que había sido concebido para caso muy contados, muy reducidos, con un criterio eminentemente restrictivo, fue visto como una figura que abarcaba prácticamente todas las causales de improcedencia que establece el código procesal constitucional y por lo tanto habilitaba a recalificar el recurso de agravio en todos los demás casos, por lo cual observé que había una desnaturalización total que me llevó a expresar mi disidencia, mi disconformidad y a partir de ahí apartarme de este precedente y en casa caso en el que yo intervenía durante el tiempo que tengo en el tribunal cuando se trata de una sentencia interlocutoria yo he emitido un voto singular sumando a la fecha efectivamente más de 6000 votos.

Entrev2

Es que lamentablemente ese término es muy subjetivo, es más este problema está siendo criticado en España tanto así que en España se creó esta idea de limitar las procedencias del recurso Amparo constitucional al Tribunal Constitucional Español a través de una modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional en donde también ponía que para proceder el recurso amparo constitucional en España titulado constitucional que es un Amparo directo tenía que tener una trascendencia constitucional o realeza constitucional Y antes ya sé criticaba eso porque ya ha cambiado la función del Amparo que es debe ser un proceso de tutela que viene a ser un proceso de control objetivo donde se toma importancia al temas de los bienes y valores constitucionales que los derechos mismos lo mismo está sucediendo en el caso peruano.

Entrev3

Lo que pasa es que, reitero, el proceso de amparo no se debe entender solo como el RAC, ósea digamos la tutela de derecho no solo está vinculado al RAC, cuando el tribunal habla de la especial trascendencia significa que por supuesto no está definido, digamos ellos no han definido, digamos ellos están copiando un modelo del tribunal español y digamos de la jurisprudencia de la Corte del tribunal español, ellos están digamos acá tratando de cegar que solo va haber casos relevantes,

importante que le es con pronunciamiento de fondo, teniendo en cuenta no solamente digamos ese punto que usted señala, si no que ellos ya han señalado que cuando ellos ya se han pronunciado en casos digamos tradicionalmente iguales ya no van a entrar a fondo, ósea digamos cuando son temas novedosos, cuando ellos adviertan afectación a la jurisprudencia, cuando vean criterios de principios de los órganos jurisdiccionales, ellos van a entrar a ver temas novedosos o cuando el abogado del amparista han establecido, han fundamentado por qué su caso tiene relevancia, van a pronunciarse, no.

Entrev4

No, porque nadie tiene porque hacer de alguna manera una discriminación procesal constitucional sobre los diferentes casos que se presente cuando están en vías de que se le respete un derecho fundamental que no sea la libertad individual, qué hace señor que sea más importante para una persona la defensa a su derecho fundamental X o la defensa de su derecho fundamental Y no hay nada de que lo pueda diferenciar porque puede ser tan importante para una persona sencilla como para una persona pudiente, el derecho que quiera salvaguardar, qué hace que tenga mayor o mejor presencia como dice la norma o mejor trascendencia, el criterio de una cuantas personas y el criterio de una cuantas personas no pueden restringir a otras de poder tener una vía constitucional que salvaguarde sus derechos fundamentales, en el fondo lo único que estamos haciendo es crear una nueva puerta de casación como es en la justicia ordinaria, en donde se va a escoger una metodología de trabajo que no viene de acá sino del Tribunal Supremo Americano, de los Estados Unidos, la Corte Suprema escoge que casos va ver, de alguna manera pues hay un acto, digo yo, de discriminación, por qué, porque lo he dicho anteriormente los derechos fundamentales van ampliándose, las garantías que los genera también deben ir ampliándose, por lo tanto no podemos retroceder restringiendo los mismos

Le voy a decir algo con mucha tristeza, en el Perú una grande debilidad que tiene sistema y que obviamente atendiendo a la presentación que hizo el Dr. Juan Gutiérrez, en el Perú hay muy pocos procesalistas, yo ya tengo digámoslo así, unos 5 años abocado al tema

Entrev5

procesal y me doy con la sorpresa de que en muchos procesos en este caso un proceso Constitucional propiamente no respetan la naturaleza de un proceso, me explico, un proceso tiene que ser lo más objetivo posible y porque tiene que ser lo más objetivo posible porque cada una de las etapas no deben admitir ningún tipo de dudas ni tampoco las etapas pueden causar una situación de indefensión o vulneración a los justiciables yo le preguntaría muy respetuosamente al tribunal constitucional que entienden para ellos casos especialmente relevante, qué es lo especial, lo que es especial para mí quizá no lo sea para Juan, para Pedro o para cualquier abogado no es decir, al introducir un elemento estrictamente subjetivo lo que hace es convertir al tribunal constitucional en un órgano arbitrario porque se supone que en un proceso debe estar las reglas claras, yo al introducir un elemento como el especial para la procedencia o no de un recurso lo que estoy haciendo es cometiendo un acto arbitrario, es decir lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es sencillamente avalar la arbitrariedad al introducir un elemento subjetivo y que no tiene justificación y yo muy respetuosamente le preguntaría al Tribunal Constitucional y para ello que es lo especialmente relevante o que es lo especial desde el punto de vista Constitucional yo creo que en general teniendo en cuenta que el ámbito probatorio en estos procesos es concreto objetivo yo considero que lo determinante para la procedencia o no de un RAC del recurso de agravio es afirmar mínimamente qué derecho, mejor dicho qué es lo que se le ha vulnerado al justiciable, si el justiciable no ha podido mínimamente, señalar o afirmar que se le ha vulnerado y que este sea un derecho fundamental, yo creo que ese sería el único requisito para la procedencia, pero de ahí a decir que tiene que ser un tema especial, yo considero que todos los derechos fundamentales por su mismo nombre, los derechos son fundamentales por su misma razón de ser, yo no puedo decir esta especial esta no es especial, o yo no puedo decir para mí esta especial esta no es especial porque se me da la gana, yo creo que con todo respeto el Perú desgraciadamente no hay un conocimiento de lo que es verdaderamente un proceso y considero yo que en ese caso los magistrados del Tribunal Constitucional al emitir este precedente lo que han hecho es sencillamente atentar contra la naturaleza misma de un proceso, en un proceso las reglas deben ser claras y deben estar ajenas a todo criterio de arbitrariedad o subjetivismo que

	<p>obviamente atenta esto contra los derechos de los justiciables como desgraciadamente ha ocurrido con este precedente.</p>
Entrev6	<p>Es que justamente ese es el problema de este precedente no, particularmente pienso que los dos primeros requisitos que son que carezca de fundamentación de la supuesta vulneración que se invoque y la cuestión del derecho contenida en los recursos no sea de especial trascendencia son los elementos cuestionables en el presente precedente por qué, porque justamente el tribunal constitucional fue creado como instancia última, no cierto, en la defensa de los derechos fundamentales por parte de esta clase de proceso de tutela de urgencia de derechos fundamentales y por tal motivo el justiciable, no es cierto, que recurre en uno de estos procesos como son el amparo, el hábeas Corpus y el habeas Data específicamente llegan al tribunal constitucional de manera última para conseguir lo que no consiguieron en la justicia ordinaria, por lo tanto el tribunal, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, debería darles una respuesta de fondo, sin embargo por este precedente lo que se ha creado es como una especie de tamiz, un filtro como así lo hace por ejemplo la Corte Suprema dentro del poder judicial en donde para los recursos de casación existe un segundo filtro, no cierto, y mediante el cual algunos recursos de casación no llega, por lo tanto el tribunal constitucional no es una es una instancia como si lo es la Corte Suprema el tribunal constitucional debería dar respuesta de fondo sobre los recursos de estos proceso que llegan al recurso de agravio constitucional.</p>
Entrev7	<p>Mi experiencia jurídica de ya 22 años en la defensa legal me lleva a la posición de que los abogados tenemos que ser respetuosos de la oralidad, sin la oralidad no vamos a construir nada y es un peligro que el tribunal constitucional este aceptando informes orales porque rompe la esencia del debido proceso, muchas gracias.</p>
Entrev8	<p>Nota: Se reformuló esta pregunta considerando la realidad constitucional de Bolivia</p> <p>Respuesta:</p>

Allá en Bolivia existen tres particularidades que hacen referencia absolutamente a esto de la especial transcendencia del recurso de amparo constitucional, una de esas peculiaridades es la estructura que adopta el Tribunal Constitucional en cuanto a su organización que a partir de aquello la funcionalidad de cada uno de las dos instancias que existen dentro del Tribunal Constitucional, la segunda peculiaridad es debido al control difuso que adopta Bolivia para poder resolver el control tutelar en el ámbito constitucional y la tercera peculiaridad es la realidad que imperaban, digo imperaban porque esto ya ha sido afortunadamente superado en el estado plurinacional de Bolivia respecto a que gran número de abogados estaban considerando a la acción de amparo constitucional como un recurso más dentro del catálogo o el amplio baraje de recursos que tenía el ciudadano para poder generar defensa en sus derechos, ahora respecto a la primera peculiaridad es decir la estructura que adopta el Tribunal Constitucional plurinacional ahora denominado plurinacional se debe a que existe una comisión de admisión que tiene básicamente dos tareas; uno de ver la admisibilidad de revisión en grado de revisión de las acciones de amparo respecto al cumplimiento de los memoriales o las acciones de amparo a todos los presupuestos de forma, y si es admitido por la comisión de admisión pues pasa al magistrado relator para que saque sentencia de fondo. Ahora esto ha generado esta exigencia constitucional y ahora que está insertado en el código procesal constitucional en Bolivia que las acciones de amparo deben tener trascendencia constitucional que implica tres cosas; uno que al plantear una acción de amparo no se planteen hechos que vayan a controvertirse en audiencia tutelar, dos la trascendencia constitucional tiene que ver con el derecho que se encuentra o con el derecho objeto de tutela que le llamamos allá y finalmente la trascendencia constitucional tiene que ver con identificar dos cosas, si estamos ante una simple amenaza de vulneración del derecho que implica una tutela provisional o estamos ya ante la materialización de la vulneración del derecho debidamente probado, lo cual implica una tutela ya correctiva en el ámbito de la acción de amparo, y esto ha permitido al tribunal constitucional identificar las acciones que realmente deben ser revisados por el Tribunal Constitucional en grado de revisión nuevamente repito ya que existe un juez tutelar que saque primero

una resolución en principio ya eso vincula a la tercera peculiaridad que le he contado que es el control difuso y respecto a la segunda peculiaridad en cuanto a que los abogados se han confundido a la acción de amparo como un recurso ordinario más lo cual no debe ser tomado así, ya que la naturaleza de la acción de amparo es tutelar eso implica estar ante una audiencia dentro de un proceso de puro derecho y no un proceso de hecho para no estar discutiendo hechos controvertidos y segundo que los abogados estaban viendo como un medio más para poder generar un ingreso extra el poder llevar acciones de amparo a costa de la ilusión de los ciudadanos lo cual es absolutamente negativo y esto ha permitido realmente poder vencer estos tres elementos que puntea, ahora se plantean acciones de amparo totalmente relevantes en el ámbito constitucional, dos ya no es considerado un recurso más si no una acción de naturaleza estrictamente tutelar y extraordinaria y tercero el tribunal pues genera este filtro para evitarse una congestión en materia de control tutelar y establecer realmente una justicia constitucional.

Entrev9

Por supuesto que sí, desde mi punto de vista no existe una afectación o digamos que este precedente se torna lesivo en lo más mínimo, todo lo contrario desde mi punto de vista porque es un filtro por el cual, riguroso claro sí, por el cual se tiene que pasar de aquí en adelante para evitar defensas temerarias o una interposición y abundante indiscriminada acciones de Amparo por parte de los abogados litigantes, el amparo sigue siendo residual, por supuesto que sí, pero para ello tiene que cumplir determinados requisitos por ejemplo, lo que ya sabemos en el precedente Elgo Ríos Núñez, agotar las vías previas, las vías paralelas para poder recurrir recién ahí a una sede constitucional.

Entrev10

Creo que el supuesto especial trascendencia dentro de los cuatro ya establecidos constituye el de mayor discrecionalidad, por lo cual la discrecionalidad debe estar proscrita en todo ordenamiento objetivo que busca establecer cánones o tamices, entonces creemos que es un despropósito tener una causal que permita abiertamente subjetividades, lo cual verse ya es una desnaturalización del propio proceso.

Entrev11

La especial trascendencia constitucional conforme lo ha señalado el ex presidente del tribunal constitucional el Dr. Urviola Hani es un concepto jurídico indeterminado de manera que si aún no tenemos un concepto concreto claro donde te diga esto es sentencia constitucional, me parece que no es una metodología adecuada para poder exigir a un amparista o a un ciudadano para que exceda al Tribunal Constitucional, ahora si el tribunal constitucional va a fijar concretamente que se entiende realmente por lo especial trascendencia constitucional y no sólo dejarlo a un criterio de los jueces me parece que no sería adecuado la metodología que se están usando.

Pregunta 04: ¿El tratamiento de la especial trascendencia constitucional en los términos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero) persigue confirmar el carácter tutelar de la jurisdicción de la libertad o la simple reducción de su carga procesal?

Entrev1

Bueno ese un tema que los doctrinarios y los estudiosos tendrían que determinarlo en base al análisis de cada caso pero yo particularmente creo que esto de la especial trascendencia constitucional se tiene que ver con pinzas y no en un sentido muy amplio para asidos tomados de esta figura rechazar sin dar oportunidad de su defensa yo no estoy diciendo que se admita necesariamente los casos y se declare infundada las demandas lo que yo estoy diciendo es que se dé oportunidad para que se defienda que se dé oportunidad para que el justiciable se defienda puedan ser oídos porque hay un derecho elemental que es el derecho a ser oído y yo recuerdo de mis conocimientos de historia universal que cuando se produce la Segunda Guerra Mundial y triunfan los aliados y cae Alemania la humanidad estaba estupefacta por lo que había significado el genocidio, el genocidio nazi y la idea era eliminar en menor tiempo posible a los autores, en eliminar en el menor tiempo posible los autores de estas barbaridades de estos genocidios de estos asesinatos y dice que se reunieron los máximos representantes y jefes de los aliados y la opinión mayoritaria era bueno acá tenemos que pasar los por las armas de frente aquí no hay opción, y ese célebre político Winston Churchill dijo un momentito nosotros no podemos hacer lo mismo que han hecho ellos nosotros tenemos

que juzgarlos a través de un juicio en donde sepan los cargos tengan oportunidad de defenderse de tener un abogado y de ser oídos y después decidiremos entonces se instauró el juicio de Núremberg y eso es una demostración que no se puede dejar de lado los derechos inherentes a la adecuada defensa del justiciable máxima y últimas instancias de grado.

Entrev2

: Lo que ha hecho el tribunal constitucional es lo mismo que le comentaba en el caso anterior español el derecho Comparado es muy importante acá porque en el caso español la idea era también reducir la carga procesal del tribunal porque según cuando se planteó la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional allá en España se pretendió de que el tribunal constitucional pudiera y tuviera dar la oportunidad de ver sólo las causas importantes o de gran relevancia para el estado español y se dejaba otras causas para la justicia ordinaria las críticas que han habido allí es qué se viene la reducción de carga pero también el ámbito tutelar del tribunal ha ido perdiendo vigencia su rol que antes tenía en la materia de los derechos fundamentales ha ido perdiendo en el Tribunal Constitucional peruano también por una idea de que el Tribunal sólo puede aplazar los casos importantes como sucedió en el similar español ha buscado que por reducción de la carga tratar de resolver, pero al final no se da porque igual tiene que hacer una revisión, igual tienes que emitir una decisión, igual tienes que utilizar el expediente, entonces más bien lo que sale imitado es los derechos, por ejemplo el acceso a la jurisdicción, informe oral de defensa de los litigantes por un efímero o una consecución una finalidad de reducción de la carga que al final no se va a dar.

Entrev3

Yo por eso le decía, si lo vemos solamente desde la perspectiva del RAC o sea si el precedente Vásquez Romero se entendería que el tribunal no está tutelando debidamente los derechos fundamentales, pero yo vinculo como le digo esto ya a todo un proceso, entonces que se inicia desde el fuero judicial el juez del amparo de la primera instancia, la sala son los llamados a tutelar el derecho y a la Corte y al tribunal constitucional digamos es un órgano que en muchos casos puede entrar al fondo del asunto dependiendo el caso concreto, pero si estaría como un órgano para que fije doctrina, jurisprudencia que permita que esos derechos se tutelen de mejor manera, pero quizás no para ese caso sino para casos futuros, evitando que se plantee demandas innecesarias,

	<p>procesos que ya no deberían ser atendidos en el campo constitucional, no solamente digamos que estamos hablando del caso particular sino también en toda la colectividad, porque son 30 mil, 40 mil casos que el tribunal pueda ver al año no está tutelando tampoco nada porque no resuelve nada a tiempo, hay casos en el tribunal por esto.</p>
Entrev4	<p>Sí, se lo digo en crudo mi querido Dr. Gutiérrez la segunda opción.</p>
Entrev5	<p>A ver vamos por partes, primero yo considero que este requisito debería ser derogado uno, porque ya en la respuesta anterior señalé su naturaleza jurídica que es una naturaleza jurídica arbitraria, ahora, se supone que las garantías constitucionales lo son precisamente para titular derechos, si una garantía que está plasmada ahora en un proceso de amparo vulnera derechos fundamentales al manifestar que este requisito es arbitrario yo considero que desde este punto de vista, el requisito en si es arbitrario, al ser arbitrarios desnaturaliza el proceso de amparo y si el proceso de amparo esta desnaturalizado obviamente todos los derecho que entre comillas debería tutelar el proceso de amparo se ven básicamente vulnerados, ahora una cuestión, en la pregunta que usted me formula, me dice ahora existe una re revisión, hay 2 filtros, hace un tiempo pasaba de alguna u otra manera un cuestionamiento maso menos una similitud con el recurso de casación, qué ocurría muchas veces, muchas veces decían, oye la sala superior debía revisar la calificación del recurso de casación y si se admitía o no el recurso, si se admitía el recurso de casación este iba a la corte suprema y la corte suprema hacia un segundo filtro, se decían oye pero para qué van a haber 2 filtros si se supone que si la sala superior ha admitido el recurso de casación y se ha elevado a la corte suprema, la corte suprema no tenía por qué hacer una nueva recalificación sobre el admisorio del recurso, y qué pasó, se modificó, a finales de la primera década de este ciclo se modifica el código procesal civil, y se encarga que ya las salas superiores ya no debían tener la labor de calificación del recurso de casación, es decir se presenta el recurso de casación ante la sala superior y la sala superior lo único que hace es elevar el recurso a la corte suprema y en la corte suprema finalmente es la que admite o no el recurso, propuesta, mejor dicho 2 propuestas para evitar esta doble revisión una de las posibilidades serian si la sala constitucional, la sala civil o</p>

la sala mixta que es la segunda instancia en un proceso de amparo, se encarga de analizar los requisitos de admisibilidad del RAC sencillamente el Tribunal Constitucional ya no tendría por qué de nuevo hacer la revisión o la otra alternativa es, el recurso se presenta ante la sala superior y es el Tribunal Constitucional el que tendría que realizar la calificación, es decir, o califica la sala superior o califica el Tribunal Constitucional, ahora si me piden a mí una opinión, yo considero que el recurso de casación debería ser aun calificado por una sala superior, porque al ser el Tribunal Constitucional un órgano que recibe los RAC de todas las cortes superiores del Perú, yo considero que ahí se ocasionaría lo que se denomina un cuello de botella, yo considero de que la legitimidad para analizar los presupuesto de admisibilidad deberías continuar con las salas superiores y evitar como dice el Dr. Juan Gutiérrez, evitar una recalificación lo cual ya obviamente sería vulneratoria al derecho de impugnación, porque se supone que el derecho a la impugnación es como todo derecho tiene limitaciones o en algunos casos tienen ciertos requisitos, en este caso yo considero que todo recurso sea el recurso del RAC o sea el recurso de casación o sea el recurso de apelación, la ley te pone requisitos si los abogados cumplimos con los requisitos de señalar lo que son los agravios, la naturaleza del agravio y finalmente cual es nuestra pretensión impugnatoria, yo considero que estos 3 requisitos son suficiente para admitirlo, ahora que el agravio sea o no constitucional eso tendría que verlo el Tribunal Constitucional, porque finalmente él es el máximo intérprete de la constitución, pero establecer un filtro por el propio tribunal de que es lo especialmente trascendente, si hubo una crítica con lo especial yo también me preguntaría y qué es lo trascendente, es decir lo trascendente sería un amparo, un habeas corpus, un habeas data, entonces yo considero que tanto lo especial como lo trascendente no son elementos subjetivos si no obviamente arbitrarios y desnaturalizan la naturaleza propiamente del proceso de amparo, es un proceso tuitivo en el marco de la garantía constitucional establecida en la constitución, en consecuencia la propuesta en este caso sería que o califica el tribunal o califica la sala, la propuesta que yo hago, debe mantenerse las salas calificando y el Tribunal Constitucional debería derogar este requisito que a todas luces atentatoria con los fundamentos que ya se han podido precisar anteriormente.

Entrev6

Es que justamente, acá en el Perú sobre todo hay 2 posiciones de diferentes autores, algunos están a favor del RAC, perdón a favor del precedente y otros están en contra del precedente, porque lo que están a favor indudablemente van a poner de relieve que la tutela de urgencia especial de esta clase de procesos constitucionales indudablemente hace de que el tribunal constitucional que forma parte del sistema de justicia constitucional de una respuesta de fondo, pero si lo tomamos desde el punto de vista de reducción de carga procesal pues simplemente este precedente va a ser un mero filtro para que no se llegue vía recurso de agravio constitucional a obtener una sentencia de fondo por parte o un pronunciamiento de fondo por parte del tribunal constitucional, yo particularmente estoy a favor de aquellos autores que ponen de relieve que la tutela de urgencia en esta clase de procesos hace de que el tribunal si debiera responder con pronunciamiento de fondo sobre la materia controvertida y no un filtro de forma del punto de vista procesal para rechazar liminarmente estos recursos de agravio y finalmente no se dé respuesta de fondo por parte del tribunal constitucional.

Entrev7

Nota: En el marco de la entrevista, reformulamos la pregunta de cabecera y fue presentada de la siguiente forma:

Entrevistador: Y finalmente ya para cerrar su brillante intervención doctor Tapia, qué opinión le merece usted el hecho de que hoy el tribunal constitucional peruano, a partir de la aplicación del caso Francisca Vásquez Romero, prescinda de la vista de la causa en consecuencia nosotros los abogados no podamos realizar los informes orales, usted a lo largo de su alocución hacía referencia de que si no hay oralidad simplemente no es posible pues incluso hacer efectivo el contradictorio y al no hace efectivo el contradictorio pues el que calla otorga doctor.

Entrevistado: Así es, es un peligro y me parece que valga la oportunidad para resaltar la brillante tesis del doctor Gutiérrez, en el sentido que tenemos que ser defensores de la oralidad, porque la oralidad está sujeta al lema del abogado que es el “*orabum causas melius*” o defender las

causas de mejor manera posible acompañados de los 7 adornos del espíritu santo, muchas gracias.

Entrev8

Nota: Se reformuló esta pregunta considerando la realidad constitucional de Bolivia

Respuesta

Muy bien, respecto al precedente vinculante en Bolivia se ha sentado ya dos líneas absolutamente claras, uno que cuando estamos hablando del precedente constitucional por supuesto vinculante, se está hablando de la filosofía respecto al derecho a la igualdad o el valor o el principio de igualdad y dos respecto a que ya desde Kelsen desde el 19 el siglo 20 se viene entendiendo que la constitución debe ser realmente comprendida no solo entendida, comprendida como la ley fundamental de un estado y la ley suprema y en base aquello necesitamos de un control constitucional absolutamente reforzado y debido aquello el artículo 203 de la constitución boliviana, claramente establece que las sentencias que emite el tribunal constitucional vía control normativo, tutelar o del ejercicio de poder político, son absolutamente de cumplimiento obligatorio, por otro lado el razonamiento y la argumentación jurídica que se genera en los fundamentos jurídicos del fallo de la sentencia del tribunal constitucional, son razonamientos que vinculan a los demás razonamientos de las autoridades de estado, hablese de los cuatro órganos de poder y de los organismos constitucionales, así como las decisiones que toman los ciudadanos, ya bajo un nivel de cultura constitucional y eso implica realmente la presencia de toda una teoría y una filosofía del precedente vinculante. Ahora respecto a la trascendencia constitucional o la relevancia constitucional respecto al precedente vinculante, se entiende que el tribunal constitucional genera una teoría muy adecuada que es la siguiente; que los artículos de la constitución ya es una teoría que está siendo muy altamente resistida aún en Bolivia pero una teoría que ya va sentando razonabilidad en cuanto al manejo de los casos y los mismos magistrados que los artículos de la constitución son meros enunciados, es decir lenguaje, un lenguaje que debe adquirir un significado y ese significado solo va ser dado por el tribunal constitucional vía la sentencia interpretativa, y las normas según la tesis que se maneja que las normas no

	<p>lo prevén todo, ya que existen vacíos legales y a partir de aquello el tribunal constitucional está plenamente habilitado para crear sus reglas y esta sentencia que usted me menciona, resulta que al entender en la lógica boliviana el tribunal habría creado tres, perdón cuatro sub reglas a la regla que está en la constitución y en el código procesal constitucional peruano, cuatro sub reglas que no encontraban que no encontramos nosotros en los enunciados de estas normas y el tribunal si está habilitado para crear sub reglas y estas sub reglas en bases al precedente vinculante deben ser cumplidas. Ahora esto nos lleva a la siguiente conclusión de que esto de la especial transcendencia constitucional en cuanto a la argumentación jurídica que esté en los memoriales de los recursos de amparo constitucional pues realmente debe ser cumplido, porque de lo contrario implica negar toda una teoría como es la del precedente vinculante.</p>
Entrev9	<p>Yo creo que cumple ambas funciones, por un lado continua confirmando el carácter tutelar de la jurisdicción de la libertad y por otro lado se expectora por utilizar dicho término amparos que no tiene el objeto del origen que nace este proceso constitucional que es salvaguardar los derechos fundamentales y de esa manera reducir la carga procesal, el tribunal constitucional, tenemos que tenerlo en cuenta que es un órgano que está centralizado, es un órgano que busca coberturarla demanda de Amparo no solamente de la ciudad capital sino al nivel nacional, reducir la carga procesal permite que esta institución se aboque con toda su maquinaria por decirlo de alguna manera acá es donde realmente existe o se presume que existe una afectación real y concreta y que no se desvíe de dicho trabajo y aboque su energía a verdaderos casos que ameriten de un control constitucional.</p>
Entrev10	<p>No podemos negar que bueno el objetivo secundario era totalmente evidente la descarga procesal, sin embargo la descarga no tiene que llevarse a cabo sacrificando bienes de mayor relevancia como es el de la propia función constitucional del tribunal y la función tutelar que tiene de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.</p> <p>En realidad me parece que es absurdo tratar de disminuir el acceso a la justicia constitucional con el solo argumento que vamos a disminuir la carga procesal, la carga</p>

Entrev11

procesal ósea ese momento falas yo comparto el criterio del Dr. García Belaunde donde indica que no se puede tomar a la ligera un derecho fundamental simplemente para aumento de que hay que reducir la carga procesal, conforme a las estadísticas que tiene el tribunal constitucional en realidad la carga procesal no ha disminuido se mantiene igual porque en la actualidad se viene declarando de manera interlocutoria denegatoria las resoluciones que no ameritan tutela constitucional, de qué se prescinde de la vista de la causa, entonces si un justiciable en la jurisdicción ordinaria fue declarado improcedente y el tribunal constitucional también lo declara improcedente, entonces nunca se le ha escuchado el argumento central del justiciable ósea le estamos dando la espalda de manera que se debería revertir esta situación y continuar con lo que ha postulado el poder Constituyente incluso siendo coherentes con la convención interamericana, donde un estado constitucional que tiene discurso de hacer primar los derechos fundamentales debe tener un recurso de rápido eficaz sencillo para salvaguardar aquel derecho que podría estar amenazado.

Pregunta 05: ¿El rechazo de las demandas de amparo bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, conforme a lo estipulado por el Tribunal Constitucional en la STC 0987-2014-PA (CASO FRANCISCA VÁSQUEZ ROMERO), es coherente con el carácter tuitivo de la jurisdicción de la libertad?

Entrev1

Mira yo creo que vuelvo a repetir la idea inicial y la idea por la cual yo digamos apoyé inicialmente este precedente fue aplicarlos en términos sumamente respectivos osea en términos en que evidente y grotescamente estábamos dentro de una de esas causales y por lo tanto esa era la idea y vuelvo a repetir no dejando de lado el derecho de defensa sino permitiendo que presentarán escritos de que se trate pero sin vista de la causa lo único que se eliminaba era sin vista por eso se dice sin más trámite pero esto aplicado a muy contados casos

Entrevistador: Muy residualmente en todo caso

Entrevistado: Claro pero si hacemos una extensión con un

facilismo decir ya a quién plantó como paquete estamos pues dejando de lado los derechos es evidente no, entonces eso es algo que ojalá yo siempre hago votos para que lo revisemos y creo que en algún momento mis ilustres colegas nos van a dar oportunidad para que con estadísticas en las manos, etc, veamos este tema con mucha calma con mucha paciencia y de repente podemos cambiar un poco o pueden cambiar un poco la línea y el criterio que están queriendo aplicar.

Entrev2 No porque no hay casos iguales, más bien otros hemos hecho mención, como le mencionaba en el despacho en donde trabajo, en el estudio del Dr. Ernesto Blume Fortini, por ejemplo como vas a decir que son iguales cuando uno pide información de un habeas data por automatización informativa que es la información personal de uno, cuando todos somos diferentes, cuando todos tenemos una información diferente, entonces como vamos a ser sustancialmente iguales o similares a algunos casos en un mismo supuesto.

Entrev3 Entrevistador: Entonces para usted doctor como juez, ¿considera que puedan existir casos sustancialmente iguales a partir del caso Francisca Vásquez Romero?

Entrevistado: Sí claro que sí, casos sustancialmente iguales, hay procesos digamos de habeas data y de cumplimiento, hay temas que por ejemplo el tribunal a lo largo de los años de los casi 20 años que ya funciona el tribunal constitucional, ha establecido muchos precedente por ejemplo recurrentemente y usted puede verificar si se ha llevado la decisión sustancioso de la sentencia del tribunal constitucional, que los temas que revisa el recurrentemente son temas previsionales y donde el tribunal constitucional ya tiene jurisprudencia co-uniforme hace muchísimos años, entonces esos temas ya no deberían llegar ya al tribunal porque ya hay una jurisprudencia digamos vinculante simplemente que cuando los abogados pierden el juicio vial presenta su agravio porque piensan que ahí puedan tener otra tutela, pero en realidad este tema de la especial transcendencia constitucional viene vinculado ya a toda una trayectoria, a toda una situación que viene juntándose de muchos años en el tribunal, ya estableció muchos precedentes temas que ya ha resuelto que en realidad ya no debería llegar ya al tribunal pero si está llegando, entonces entiendo yo que ellos lo que han buscado es que su perspectiva seguramente, en este objetivo del amparo, de la verdad objetiva es ser una Corte de vestís, no

un tribunal de casos, no.

Entrev4 Por supuesto que no, porque no pueden tratarse 2 casos iguales de manera diferente, por un lado porque eso viola el derecho a la igualdad y en segundo lugar la tuitividad procesal que debe tener el órgano supremo de interpretación constitucional debe ser de carácter permanente, en consecuencia, no puede tenerse un medio fácil como lo es la página web por ejemplo del tribunal para que sencillamente se enerven y se dejen de lado, en inquietudes y derechos en salvaguardar los derechos fundamentales, no, yo considero que definitivamente eso no algo que está bien.

Entrev5 A ver yo le preguntaría también al Tribunal Constitucional qué es lo sustancialmente igual, es decir yo considero que en el marco de lo sustancial que desgraciadamente es otro elemento subjetivo y arbitrario, a ver, yo considero que, y voy a poner un ejemplo, usted ha mencionado que este precedente se aplica un tema de proceso de amparo, un proceso de habeas data, yo le agregaría también un proceso de habeas corpus, entonces qué es lo que sucede, desde una perspectiva estrictamente procesal, actualmente creo que ya es una regla que se aplica a todos los procesos, todos los procesos deben ser examinados a través de tres niveles, un nivel factico, un nivel jurídico y un nivel probatorio, factico, jurídico y probatorio, un criterio que ha establecido el Tribunal Constitucional, y yo considero que es un criterio ya uniforme es que el Tribunal Constitucional no revisa lo referido a la prueba en el proceso, es decir, si hablamos que si en todo proceso se analiza 3 niveles, el nivel factico, jurídico y probatorio, la primera regla que a mi si me parece aplicable a todos los casos y razonablemente aplicable es que lo que no hace el Tribunal Constitucional es valorar las pruebas que ya fueron realizadas por los órganos ordinarios, pero que ocurre, que al nivel factico y normativo los casos no pueden ser iguales, es imposible que sean iguales, es decir, yo puedo tener por ejemplo un proceso de desalojo que se pudieron haber vulnerado derechos o garantías procesales o sustantivas, porque sabemos que el debido proceso tiene 2 ámbitos, un ámbito sustantivo y un ámbito procesal o adjetivo, entonces el tema es el siguiente, yo tengo un proceso de desalojo donde el litigante manifestó que en ese proceso se le han vulnerado derecho de índole estrictamente procesal, ojo se supone que este litigante tiene que manifestar cuales fueron los hechos, que han vulnerado los derecho de carácter procesal, tienes hechos y derechos, supongamos derecho del debido proceso, derecho de defensa, derecho a la impugnación, hay 3 derechos que han

sido vulnerados y un conjunto de hecho que vamos a llamar X Y Z, tenemos 3 hechos y tenemos 3 derechos, viene un segundo proceso de desalojo también en amparo ahora la pregunta es, si el tribunal dice, cuando hay casos sustancialmente iguales, pueda ser que en el caso se planteen los mismos derechos vulnerados, es decir se ha vulnerado el debido proceso, el de defensa y el de impugnación, y yo me hago la pregunta usted cree que los hechos vulneratorios que en ese caso uno van a ser lo mismo acaso 2, imposible, es material jurídicamente imposible entonces qué es lo que ocurre, lo sustancialmente igual resulta arbitrario porque lo mínimo que se le exige a un órgano constitucional de primera o segunda instancia o al Tribunal Constitucional es analizar 2 niveles, nivel factico, nivel jurídico, y el nivel principalmente factico es imposible materialmente que sean iguales, ergo lo sustancialmente igual es un absurdo decir, es un absurdo jurídico con mucha humildad y con todo respeto yo creo que el tribunal tiene que poner las varas en remojo y no pueden introducir elementos que son contradictorios ahora, dada la investigación que el Dr, Juan Gutierrez usted y las conclusiones va a elaborar yo me preguntaría si este tipo de criterios lo maneja los magistrados del tribunal o quienes están haciendo este tipo de criterios, porque sencillamente me pongo a pensar esto yo como abogado y creo que como todo abogado se le exige que mínimamente en un proceso maneje esos 3 niveles y si un abogado no maneja esos 3 niveles, de que estamos hablando, esa sería la respuesta que yo humildemente podría señalar.

Entrev6

Por el tema de caso sustancialmente iguales ahí hay una serie de reparo, en primer lugar en ningún caso es igual a otro, no, lo que puedes es similar es la afectación de derechos fundamentales pero si tenemos en cuenta que cada caso es distinto porque indudablemente los hechos siempre van a variar de un caso a otro, entonces el concepto de casos sustancialmente iguales se convierte en un criterio subjetivo por parte de los magistrados del tribunal constitucional, porque como yo voy a fundamentar que 2 casos son sustancialmente iguales lo que pretende decir este precedente Francisca Vásquez Romero cuando habla de los casos sustancialmente iguales quiere decir de que la afectación de los derechos fundamentales pueden ser muy parecidos o análogos pero jamás los hechos van hacer sustancialmente iguales, por lo tanto nuevamente llegamos al problema de que se está poniendo de relieve un filtro para que los RAC no lleguen al tribunal constitucional.

Entrev7 No se le formuló esta interrogante.

Entrev8 Nota: Se reformuló esta pregunta considerando la realidad constitucional de Bolivia

Respuesta 1:

Respecto a esa pregunta, debo acudir a dos tesis una que viene siendo sostenida por el profesor MicheleTaruffo y otra por Aleinikov, resulta que Aleinikov sostiene que se debe manejar la teoría del precedente vinculante por respeto y en base al valor o principio de igualdad, ya que dos casos iguales no pueden ser tratados de manera diferente y eso implica la vinculatoriedad del razonamiento que va a poner fin a un caso y ese razonamiento debe ser aplicado de manera similar, si se presenta otro caso claro en un futuro tiempo con igualdad de supuestos fácticos o similitud de supuestos fácticos, en cambio MicheleTaruffo siguiendo una corriente inglesa, sostiene que es muy complejo demostrar probatoriamente que exista dos casos similares lo cual eliminaría la teoría del precedente vinculante ya que cada caso tiene unas peculiaridades muy especiales, y en ese sentido yo asumiría la segunda teoría puesto que cada caso presenta una peculiaridad muy particular y eso le llevaría a eliminar el tema de la teoría del precedente vinculante.

Entrev9 Como lo dije en una de las respuestas anteriores al existir un filtro riguroso en el fundamento 49 del precedente vinculante Francisca Vásquez Romero, al indicar el tribunal constitucional de qué se desestime un recurso de agravio que está dirigido a cuestionar un precedente vinculante que ya está marcado parte de la jurisprudencia misma del TC permite al tribunal constitucional continuar reafirmando su postura en la tutela jurisdiccional de derecho fundamentales que realmente se han afectado, vayamos a un tema muy práctico sin necesidad de mucho tecnicismo de que sirve interponer una acción de amparo por ejemplo a cuestionar entre comillas el despido de un determinado trabajador si este no ha ingresado por concurso público estaríamos yendo en contra del precedente vinculante de Rosalía Huatuco Huatuco, eso ya está marcado, eso ya está delineado por parte del tribunal constitucional ir en contra del precedente huatuco es inoficioso razón por la cual en el fundamento 49 del caso Francisca Vásquez Romero si este está dirigido coaccionar un precedente vinculante ya demarcado es por lo tanto desestimado.

Entrev10

Yo creo que este supuesto en algunos matices puede ser muy subjetivo, pero en otras aplicaciones digamos creo que puede servir de manera suficiente para cuidarse ciertos supuestos si me deja explicarle lo referido, en este sentido por ejemplo tenemos que la ONP presenta cantidades de demandadas casi a niveles macro sobre los mismos supuestos y casi sobre los mismos hechos que vienen de la misma infracción normativa yo creo que en ese caso puede ser eficiente para tutela, sin embargo en cuestiones cuando se debaten temas personalísimos o digamos derechos subjetivos muy ligados digamos a una calificación personal o una situación en especial ya desnaturaliza este propósito y la valoración de que si es más adecuado priorizar la descarga procesal o la tutela, yo creo que ni siquiera se puede pensar en irse por el beneficio a nivel de política jurisdiccional de la descarga, si no sobre la concreción o del cumplimiento de la finalidad de tutela del tribunal, yo creo que esto punto es subjetivo pero puede ser afinado si es que se direcciona digamos a cuestiones en las cuales pueda ser aplicada y que no haya una disquisición tan grande sobre derechos subjetivos en el caso tradicional yo creo que puede ser bien útil.

Entrev11

Es obviamente que no es tutelar tu sabes que yo estoy de la posición de que el precedente en mención no garantiza de manera eficaz o no es coherente con lo que establece el artículo 25, reitero de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, es decir debemos tener un curso rápido eficaz sencillo para salvaguardar los derechos constitucionales que presuntamente estarían amenazados, de manera que insisto el pleno del tribunal constitucional a la luz del artículo 7 puede enmarcar un nuevo precedente de repente dar pautas claras respecto al concepto de especial trascendencia constitucional.

Pregunta 06: ¿En sentido contrario, en atención a lo estipulado por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), es posible que una demanda de amparo merezca una sentencia favorable bajo el argumento que se ha decidido de manera estimatoria en casos sustancialmente iguales?

Entrev1	No se le formuló esta pregunta
Entrev2	Claro, o sea como le mencionaba, cada quien es diferente, y es más en el fondo como ya se lo he mencionado había una crítica en donde se limita los derechos de los recurrentes a poder salir su derecho de defensa pudiendo informar que se escuche en una audiencia pública por parte del Tribunal y al final no hay un instrumento de fondo o un análisis profundo del caso y como le mencionaba y todos los otros supuestos atentan con, ya sea porque lo considera un terreno constitucional o en el caso sumamente idénticos que no se ha rechazado anteriormente, en ambos casos afectan los derechos de los litigantes.
Entrev3	No se le formuló esta pregunta
Entrev4	Si los casos son iguales, tienen que tener igual trato, yo creo que sí.
Entrev5	A ver vamos a tomar esto de manera diferenciada, el propio Tribunal Constitucional en diversa jurisprudencia, diversas sentencias la propia Corte interamericana de los derechos humanos establecieron un criterio que yo considero que para todo abogado o por lo menos a los estudios en la materia de los procesos constitucionales nos haríamos las siguientes preguntas, toda interpretación que vaya en desmedro del justiciable no debe ser aplicable en contrario censo, toda interpretación que sea a favor o pro-hominem debe ser aplicable entonces yo considero esto que si bien es cierto la crítica no debería ser lo sustancialmente, y dijimos que es un absurdo, pero si se mantiene es criterio porque obviamente me pueden decir pero Dr. Una cosa es opinión y otra cosa es la realidad, y la realidad es que ese criterio está vigente, ese criterio es un criterio obligatorio, yo lo que podría alegar es a lo siguiente, yo tengo un caso como le mencionaba al Dr. Juan Gutiérrez un tema de habeas data, donde un caso, supongamos que el hecho fue, fueron 3 hechos A B y C y se vulneró el derecho a la información, ahora en la realidad se presenta el caso A X y C, oye uno fue A B y C y el otro es A X y C, yo me digo serán sustancialmente iguales o no, iguales no son porque uno es A B y C y el otro es A X y C, pero yo puedo decir, yo puedo interpretar pro-hominem oye pero se parecen son sustancialmente son iguales porque de 3 hay 2, yo podría decir si en el otro caso le diste la razón, en

mi caso yo podría afirmar que serían sustancialmente iguales pero no son iguales pero sustancialmente son iguales, tendría que darse el mismo resultado es decir, tendría que declararse también fundada que a posteriori se presentara también ese habeas data, en consecuencia, así como el tribunal aplicaría sustancialmente igual para desestimar un caso también debería con mucha más razón aplicarlo sustancialmente igual para favorecer al justiciable en el marco del principio pro-hominem y como señalaba, toda interpretación, sea un derecho un caso o un criterio, siempre tiene que aplicarse a favor de la persona, no puede aplicarse un criterio en contra de una persona, ahora al margen de que sea a favor o no, ratificando lo que mencionaba lo sustancialmente igualitario sencillamente es un contrasentido, yo lo que considero y se lo manifestaba al Dr. Juan Gutiérrez el tema de Trascendencia, yo voy a citar a un gran jurista en materia procesal como es el profesor ADOLFO ALVARADO BELLOSO, que él mencionaba que en materia procesal o es blanco o es negro, o disculpando con la venia de su persona Dr. Juan Gutiérrez, en la realidad por ejemplo una mujer está embarazada o no está embarazada, no hay mujer media embarazada, yo no le pregunta a una mujer, estás media embarazada, no, se pregunta estás o no embarazada, lo mismo ocurre en el ámbito procesal, o es igual o no es igual pero no puede haber lo sustancialmente igual como en la realidad no puede haber una mujer media embarazada, entonces aplicando ese símil, la conclusión es que este criterio debería ser derogado, bueno al margen de que no se derogado, yo creo que un argumento válido en el marco del principio pro-hominem de las libertades, es que en casos entre comillas sustancialmente iguales si fueron para desestimar con mucha más razón debería ser para declarar la sentencia estimatoria, eso sería toda la respuesta ante esa pregunta.

Entrev6

Antes de responder esa pregunta sería bueno recordar que el propio condigo procesal constitucional desde el punto de vista garantista, no es cierto, en donde pone de relieve la protección, en este caso la especial protección de la constitución sobre los derechos fundamentales que es uno de los pilares, no es cierto, de la constitución de 1993, establece que en caso de duda aun en caso de duda por el principio pro-homine por el principio favor de un proceso se debe admitir toda demanda, no es cierto de Amparo, habeas corpus o habeas Data, específicamente

	hablando, y darse paso a que dentro del proceso se verifique o no la afectación o violación de los derechos fundamentales involucrados.
Entrev7	No se le formuló esta pregunta
Entrev8	No se le formuló esta pregunta, por ser extranjero.
Entrev9	Por supuesto bajo esa lógica claro que sí, es precisamente la sentencia favorable que emite el tribunal constitucional está basado a la abundante jurisprudencia que viene señalando eso se viene dando en la práctica, por supuesto que sí.
Entrev10	No se le formuló esta pregunta
Entrev11	Evidentemente que sí, tu sabes que al mismo hecho corresponde un derecho terminado, entonces si un justiciable invoca que su caso es parecido a un caso que el tribunal constitucional ya se ha pronunciado de manera estimatoria, entonces es lógico que también ese caso que se plantea el tribunal constitución pueda ser amparado porque si no, no estaría cumpliendo el carácter tuitivo que tienen los procesos constitucionales.

Anexo 3



GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Título de la investigación

Neointerpretación del carácter tutelar del amparo frente al precedente vinculante fijado en la STC N° 0987-2014-PA

Autor: Mg. Abg. Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano

Asesor: Dr. Rodolfo Fernando Talledo Reyes

Objetivos:

PRINCIPAL:

Interpretar si el proceso de amparo preserva intangible su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC N° 0987-2014-PA.

ESPECÍFICOS

Determinar si existe una paradoja en el campo de la justicia de la libertad como consecuencia de la reducción del carácter tutelar del amparo frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC N° 0987-2014-PA.

Determinar si, la especial trascendencia constitucional conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA, constituye una

metodología eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo.

Determinar si, el tratamiento de la especial trascendencia constitucional en los términos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA persigue confirmar el carácter tutelar de la jurisdicción de la libertad o la simple reducción de su carga procesal.

Determinar si, el rechazo de la demanda de amparo bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, conforme a lo estipulado por el Tribunal Constitucional en la STC N° 0987-2014-PA, es coherente con el carácter tuitivo de la jurisdicción de la libertad.

Determinar si, a contrario sensu, en atención a lo estipulado por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC N° 0987-2014-PA, una demanda de amparo merezca una sentencia favorable bajo el argumento que se ha decidido de manera estimatoria en casos sustancialmente iguales.

Muestreo

Edad	Profesión	Centro laboral	País	Experiencia en el tema	Función	Cant.
30-70	Abogado	Tribunal Constitucional	Perú	Amplia	Magistrado	01
30-50	Abogado	Tribunal Constitucional	Perú	Amplia	Abogado del Gabinete de Asesores	01
30-50	Abogado	Poder Judicial	Perú	Amplia	Juez Constitucional	01

30-70	Abogado	Poder Judicial	Perú	Amplia	Personal permanente	01
30-50	Abogado	Poder Judicial	Perú	Amplia	Abogado de la Procuraduría	03
30-50	Abogado	Universidad Privada	Perú	Amplia	Docente y litigante	03
		Estudio Jurídico Particular				
30-50	Abogado	Universidad Pública	Bolivia	Amplia	Docente y litigante	01
		Estudio Jurídico Particular				

3.1 Organización y secuenciación de las preguntas

Introducción:

Según Álvarez y Jurgenson (2003), en la investigación cualitativa la entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y desmenuzar el significado de sus experiencias. Steinarklave, citado por Álvarez y Jurgenson, define el propósito de la entrevista en la investigación cualitativa cual es obtener descripciones del mundo de vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos descritos (1996; pág. 6)

Propósito:

El presente trabajo persigue bajo una óptica comprensiva, abordar uno de los fenómenos relevantes para la disciplina jurídica del Derecho Constitucional en su

versión sustantiva y procesal: Neointerpretación del carácter tutelar del amparo frente al precedente vinculante fijado en la STC N° 0987-2014-PA

En efecto, los nuevos lineamientos formulados en el Perú en materia de Amparo delinea un nuevo derrotero a seguir en el sistema de impartición de justicia en el campo de la dogmática constitucional; por ello, es de capital importancia abordar la paradoja identificada de manera abierta y amplia, con el apoyo de diversas técnicas conducentes al recojo de información fidedigna que nos sirva de sustento para la estructuración de alternativas, columnas de un paradigma alternativo, orientado a la defensa de los derechos fundamentales de la persona, acaso la piedra angular del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

Razones del muestreo

La muestra siguiendo a Corbin y Strauss (2002) es discriminativa, maximizándose las oportunidades para la argumentación, así como las relaciones entre las categorías permitiendo así realizar la saturación de aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente.

Siguiendo a Patton (1988) el muestreo es también por conveniencia, atendiendo las razones de orden práctico por el cual se ha procurado obtener información optimizando el uso del tiempo y de los recursos financieros disponibles.

Conforme se puede evidenciar en la tabla que se muestra a continuación, los expertos consultados cumplen el perfil antes descrito. Decidimos entrevistar a 01 Magistrado y 01 Asesor del Tribunal Constitucional Peruano, por cuanto son quienes nos conocen de cerca las instituciones comprometidas por el precedente vinculante fijado en la STC N° 0987-2014-PA, conocido en el medio como caso Francisca Vásquez Romero. Asimismo, se ha procedido en entrevistar abogados expertos en el área de Derecho Constitucional adscritos a la Procuraduría del Poder Judicial, Catedráticos Universitarios y Abogados litigantes en el campo constitucional. Todas las personas señaladas en el referido cuadro tienen experiencia en el tema materia de indagación cuyas percepciones recogidas nos permiten la construcción de las interpretaciones que permiten la propuesta de mejora frente a la problemática detectada.

El guión de la entrevista, listado de temas y posibles preguntas.

Los temas a ser abordados en el marco de la entrevista son los siguientes;

- Especial trascendencia constitucional
- Jurisdicción de la libertad
- Proceso constitucional de amparo
- Precedente constitucional vinculante

3.2 Contenido y naturaleza de las preguntas

Las preguntas que se formulan para efecto de la entrevista programada, son de naturaleza jurídica, abiertas y orientadas a provocar una explicación de parte del entrevistado frente al fenómeno estudiado.

3.3 Formulación de las preguntas

Descripción de la hoja de vida del entrevistado:

¿Puede explicar si representa para Usted una paradoja en el campo de la jurisdicción de la libertad, la reducción del carácter tutelar del amparo frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia a partir de la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero)?

¿Desde vuestra experiencia, considera que el proceso de amparo preserva inválida su finalidad frente al incremento de supuestos para la procedencia del recurso de agravio constitucional en dicha materia, a partir de la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero)?

¿La especial trascendencia constitucional conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), constituye una metodología eficiente para la defensa de los derechos que son objeto de protección del amparo?

¿El tratamiento de la especial trascendencia constitucional en los términos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero) persigue confirmar el carácter tutelar de la jurisdicción de la libertad o la simple reducción de su carga procesal?

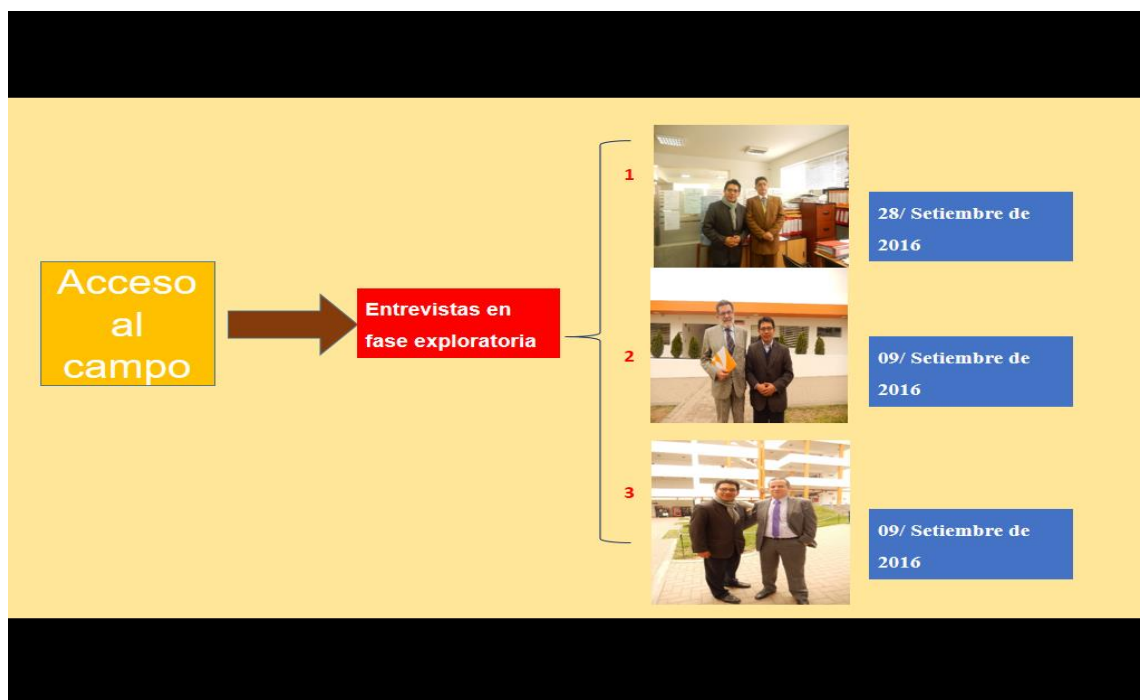
¿El rechazo de la demanda de amparo bajo el argumento que se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, conforme a lo estipulado por el Tribunal Constitucional en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), es coherente con el carácter tuitivo de la jurisdicción de la libertad?

¿A contrario sensu, en atención a lo estipulado por el Tribunal Constitucional Peruano en la STC 0987-2014-PA (Caso Francisca Vásquez Romero), es posible que una demanda de amparo merezca una sentencia favorable bajo el argumento que se ha decidido de manera estimatoria en casos sustancialmente iguales?

Muchas gracias por vuestra colaboración

Anexo 4

Imágenes del proceso de entrevistas.



Fase exploratoria y fase formal



Anexo 5

Texto completo de la STC 0987-2014-PA



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC

SANTA

FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Francisca Lilia Vásquez Romero contra la resolución de fojas 278, de fecha 14 de noviembre de 2013, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró improcedente la demanda de autos

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de marzo de 2013, la recurrente interpone demanda de amparo contra los integrantes de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como contra el Presidente y el Procurador Público del Poder Judicial, solicitando que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tercería preferente de pago correspondiente al Exp. N° 1460-2006 desde la Resolución N° 38, de fecha 4 de diciembre de 2009 hasta el Decreto N° 5, de fecha 25 de enero de 2013, por haberse vulnerado sus derechos "al debido proceso, de petición, de defensa, de libre acceso al órgano jurisdiccional y a la tutela procesal efectiva".

Refiere que en el proceso de ejecución de garantías seguido en su contra por el Banco Wiese Sudameris (ahora Scotiabank), hasta la fecha no se le ha notificado la ejecutoria suprema que resolvió su recurso de casación, ni el Decreto N° 40, de fecha 19 de octubre de 2011. Sostiene, igualmente, que la Sala Civil Suprema emplazada ha actuado en forma ilegal porque el proceso de tercería preferente de pago que es civil lo transformó en constitucional y, "cambiando de jurisdicción", lo remitió a la Sala Constitucional Suprema emplazada; y que los jueces del Cuarto Juzgado Civil de Chimbote y los vocales de la Sala Superior emplazada han tramitado con fraude el Exp. N° 1460-2006.

El Tercer Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 26 de marzo de 2013, declaró improcedente la demanda, por considerar que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

derechos invocados, porque la recurrente pretende replantear la controversia pese a que ha sido debidamente resuelta por los órganos jurisdiccionales emplazados; y en razón a que ha vencido el plazo de prescripción para interponer la demanda, por cuanto la Resolución N° 40 le fue notificada el 26 de octubre de 2011.

La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que entre la fecha de notificación de la Resolución N° 40 y la de interposición de la demanda ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción.

FUNDAMENTOS

§ Procedencia de la demanda

1. Antes de dilucidar la controversia, el Tribunal Constitucional estima necesario pronunciarse respecto a la declaración de improcedencia liminar de la demanda.
2. El Tercer Juzgado Civil de Chimbote declaró improcedente la demanda, por considerar que los hechos y el petitorio no estaban referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, toda vez que la actora pretende replantear una controversia debidamente resuelta por los órganos jurisdiccionales emplazados. En consecuencia, se estimó de aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. Considera, además, que ha vencido el plazo de prescripción para interponer la demanda, lo cual supone – aunque no haya sido expresamente citada – la aplicación de la causal de improcedencia prevista en el inciso 10) del numeral 5° del mismo cuerpo legal.
3. Por su parte, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó dicho pronunciamiento por considerar que el plazo de prescripción transcurrió en exceso, siendo de aplicación el inciso 10) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional.
4. Debe tenerse presente que sólo cabe acudir al rechazo liminar de la demanda de amparo cuando no exista margen de duda respecto de su improcedencia. Dicho con otras palabras, cuando de una manera manifiesta se configure una causal de improcedencia específicamente prevista en el Código Procesal Constitucional.
5. En ese sentido, corresponde analizar ambos pronunciamientos a efectos de verificar si la demanda se subsume, o no, en alguno de los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 5° del Código Procesal Constitucional, conforme lo dispone, además, el numeral 47° del mismo.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

6. Respecto a la configuración de la causal de improcedencia prevista en el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, debe precisarse que la demandante ha alegado que no se le han notificado resoluciones y que se alteró el trámite procesal de su pretensión ante la Corte Suprema; supuestas vulneraciones que pueden ser interpretadas como conexas con el contenido del derecho al debido proceso.
7. En cuanto al cómputo del plazo de prescripción, conviene tener presente que el inciso 5) del artículo 44° del Código Procesal Constitucional, prescribe que "Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista".
8. Al respecto, la demandante aduce que hasta la fecha no se le ha notificado la ejecutoria suprema que resolvió su recurso de casación, ni el Decreto N° 40, de fecha 19 de octubre de 2011, de modo tal que el agravio invocado consistiría en una omisión, razón por la cual no habría transcurrido el plazo de prescripción para interponer la demanda y por ello no cabría aplicar la causal de improcedencia prevista en el inciso 10) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional.
9. El Tribunal Constitucional entiende que esta alegación de hechos se encuadra, *prima facie*, dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso.
10. Sin embargo, conviene enfatizar que el análisis propuesto respecto de si las cuestionadas resoluciones afectan o no los derechos invocados supone un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y debe realizarse luego de trabada la litis.

§ El Recurso de Agravio Constitucional planteado en autos

11. Establecido lo anterior, cabe decidir si en todos los casos en los que la demanda ha sido declarada improcedente *in limine*, y el Tribunal Constitucional entiende que debe emitirse un pronunciamiento sustantivo, corresponde ordenar que el Juez del Proceso la admita a trámite.
12. El inciso 2° del artículo 202 de la Constitución establece que corresponde al Tribunal Constitucional:



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

“... 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento”

13. Por ende, la competencia de este Tribunal se habilita frente a aquellos casos en los que se haya declarado improcedente o infundada la demanda.

14. En el contexto de este diseño normativo, cabría preguntarse cómo proceder cuando se trata de pretensiones carentes por completo de fundamento, como la que sostiene que los jueces demandados incurrieron con su resolución en delito de lesa humanidad.

15. En el Recurso de Agravio Constitucional se afirma que:

a. “... advirtiendo que es una falsedad y un fraude, el Auto N° 38 del 4-12-2009 expedido por los vocales Walter Ramos Herrera, Angela Graciela Cárdenas Salcedo y Jesus Sebastián Murillo Domínguez para hacer cobrar a Scotiabank Perú SAA la falsa deuda de los 3 pagarés que no están firmados por los recurrentes” (Fojas 300 de autos)

b. “... resolviendo una cosa por otra y como litigantes y juez y parte contra la agraviada, sin desvirtuar la infracción a mis derechos humanos y sin precisar la ley que les faculte hacer a Scotiabank que cobre deuda falsa” (Fojas 301 de autos); y

c. “... Agravio Moral: Se ha causado y sigue causando una inmensa tortura moral y psicológica que consume la intimidad de la agraviada al producir preocupaciones, pena, estrés, depresión, insomnios, melancolía y otros sufrimientos” (Fojas 314 de autos).

16. Si bien la demanda se refería, *prima facie*, al debido proceso, como se ha señalado, los planteos de la demandante carecen por completo de fundamentación constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional entiende que en casos como este, podría emitirse, extraordinariamente, un pronunciamiento sustantivo.

17. Tal posición se sustenta en diferentes principios relacionados con la naturaleza y fines de los procesos constitucionales y, particularmente, para efectos del presente caso, en los de economía e informalidad. [Cfr. STC 04587-2004-PA/TC, fundamentos 16 a 19].



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

18. Por lo que hace al principio de economía procesal, este Tribunal ha establecido que si de los actuados existen los suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo pese al rechazo liminar de la demanda, resulta innecesario obligar a las partes a reiniciar el proceso, no obstante todo el tiempo transcurrido. Con ello, no sólo se posterga la resolución del conflicto innecesariamente, sino que, a la par, se sobrecarga innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales competentes.
19. En cuanto al principio de informalidad, este Tribunal ha precisado que si en el caso concreto existen todos los elementos como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, éste se expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas por un juez o tribunal, de manera que una declaración de nulidad de todo lo actuado, por el sólo hecho de servir a la ley, y no porque se justifique en la protección de algún bien constitucionalmente relevante, devendría en un exceso de ritualismo procesal incompatible con el "(...) logro de los fines de los procesos constitucionales", como ahora establece el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

§ Justificación del pronunciamiento sobre el fondo en el presente caso

20. Un pronunciamiento sustantivo en el presente caso no afectará el derecho de defensa de todas las partes emplazadas, como así lo demuestran las instrumentales que obran en autos y lo confirma la línea jurisprudencial asumida por este Tribunal ante supuestos análogos. En efecto, y en lo que se refiere a los órganos judiciales demandados, conviene recordar que el Tribunal Constitucional peruano, tratándose de supuestos de amparo contra resoluciones judiciales, como ocurre en el caso de autos, ha considerado que, ante afectaciones al debido proceso, es posible condicionar la intervención de las partes, no requiriéndose la participación de los órganos judiciales demandados, al tratarse de cuestiones de puro derecho [Cfr. Sentencia recaída en el Expediente N° 05580-2009-PA/TC, fundamento 4].
21. En el caso concreto, la pretensión incoada se circunscribe a cuestionar determinadas resoluciones judiciales, razón por la cual, para este Tribunal, la falta de participación de los órganos judiciales emplazados en el presente proceso no constituye razón suficiente para declarar la nulidad de todo lo actuado. Este Tribunal Constitucional entiende que en autos existen suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento de fondo, resultando innecesario condenar a las partes a transitar nuevamente por la vía judicial para llegar a un destino que ahora puede dilucidarse.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

22. En todo caso, de autos se verifica que los emplazados han sido notificados en diversas oportunidades con cada uno de los diferentes actos procesales posteriores al concesorio del recurso de apelación, conforme consta a fojas 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 262, 263, 264, 266, 268, 270, 272, 273, 275, 277, 282, 283, 285, 287, 289, 290, 292, 294, 296, 317, 318, 319, 320, 322, 324, 326, 328, 330 y 332, con lo cual su derecho de defensa no se ha visto afectado en tanto han tenido conocimiento oportuno de la existencia del presente proceso. Por lo expuesto, para este Tribunal queda claro que el derecho de defensa de los emplazados ha quedado plenamente garantizado en la presente causa, toda vez que tuvieron la oportunidad de hacer ejercicio de él.

23. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que si bien es cierto la demanda de amparo de autos no se admitió a trámite, sin embargo, una evaluación de los actuados evidencia:

- a) En atención al principio de economía procesal, que en autos existen suficientes recaudos y elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia; y,
- b) Por lo que hace al principio de informalidad, que el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa del emplazado Poder Judicial, quien fue debidamente notificado a partir del concesorio del recurso de apelación.

24. Por lo mismo, el Tribunal Constitucional considera que es competente para resolver el fondo de la controversia.

§ Petitorio de la demanda y argumentos de la demandante

25. Conforme consta en los antecedentes de la presente sentencia, mediante la demanda de amparo de autos la recurrente persigue que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tercería preferente de pago correspondiente al Expediente N° 1460-2006 desde la Resolución N° 38, de fecha 4 de diciembre de 2009, hasta el Decreto N° 5, de fecha 25 de enero de 2013, por haberse vulnerado, según alega, sus derechos al debido proceso, de petición, de defensa, de libre acceso al órgano jurisdiccional y a la tutela procesal efectiva.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

26. La actora manifiesta que en el proceso de ejecución de garantías seguido en su contra por el Banco Wiese Sudameris (ahora Scotiabank), hasta la fecha no se le ha notificado la ejecutoria suprema que resolvió su recurso de casación, ni el Decreto N° 40, de fecha 19 de octubre de 2011. Agrega, asimismo, que la Sala Civil Suprema emplazada ha actuado en forma ilegal porque el proceso de tercería preferente de pago, que es de naturaleza civil, lo “transformó” en constitucional y, “cambiando de jurisdicción”, lo remitió a la Sala Constitucional Suprema emplazada. Añade, por último, que los jueces del Cuarto Juzgado Civil de Chimbote y los vocales de la Sala Superior emplazada han tramitado con fraude el Expediente N° 1460-2006.

27. En el momento de examinar el fondo de la cuestión, se advierte que la demanda se sustenta en afirmaciones como las que se indican a continuación:

- a) “(...) los jueces del 4° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa-Chimbote en posta jurisdiccional indebida e ilegal, en complicidad con los auxiliares judiciales y evidentemente en acuerdo con los vocales supremos y los vocales de la Sala Civil de Chimbote tramitan con fraude el Expediente N° 1460-2006”. (fojas 70, énfasis agregado).
- b) “(...) los magistrados demandados en confabulación han violado el texto expreso y claro del artículo 1° de la Ley N° 27682, la Constitución, las leyes, el debido proceso y en cadena a todos los demás derechos humanos de la recurrente, es claro que los trasgresores agresores con esa conducta disfuncional y con fraude y con ensañamiento, crueldad, crimen y delitos de lesa humanidad imprescriptibles han hecho víctima de cruel injusticia a la recurrente que tiene que ser corregida”. (fojas 72, énfasis agregado).
- c) “(...) la fraudulenta demanda cambiada al número 1460-2006, está expresado y precisado hasta la saciedad que esa demanda está interpuesta, admitida y tramitada violada reiteradamente el debido proceso. Y siendo que el Poder Judicial con sus magistrados como juez y parte en su interés litigando en lugar del Banco y rehusándose escuchar, oír y entender el reclamo de la recurrente”. (fojas 97, énfasis agregado).

§ Análisis de la controversia

28. La recurrente alega que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, de petición, de defensa, de libre acceso al órgano jurisdiccional y a la tutela procesal



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

efectiva, porque los jueces del Cuarto Juzgado Civil de Chimbote, los jueces de la Sala Superior emplazada y los jueces de las Salas Supremas emplazadas se habrían confabulado para litigar en su contra y tramitar con fraude el proceso de tercería preferente de pago recaído en el Expediente N° 1460-2006 y favorecer al Banco Wiese Sudameris (hoy Scotiabank).

29. Sin embargo, de la revisión de los actuados este Tribunal advierte que no obra medio probatorio alguno que acredite tales alegatos. En efecto, de los actos procesales aportados no se evidencia la confabulación alegada, ni el fraude imputado, y también cabe enfatizar que ninguno de ellos prueba que a la recurrente se le haya imposibilitado o negado el libre acceso al órgano jurisdiccional.

30. En consecuencia, y respecto de este primer extremo, el Tribunal Constitucional estima que no se ha acreditado la violación de los derechos invocados *supra*.

31. De otro lado, la recurrente también alega que no se le ha notificado la ejecutoria suprema que resolvió su recurso de casación, ni el Decreto N° 40, de fecha 19 de octubre de 2011.

32. Sobre el particular, de la lectura del escrito de demanda se infiere que la recurrente conoce el contenido de los referidos actos procesales, toda vez que ha transcrito la parte considerativa del Decreto N° 40, lo cual permite presumir a éste Tribunal que éstos sí le fueron notificados, *máxime* cuando en autos no obran suficientes elementos de prueba que permitan arribar a la *convicción de que lo manifestado sea cierto*. En consecuencia, y respecto de este extremo, este Tribunal estima que no se encuentra probada la violación alegada.

33. En cuanto a la alegada violación del derecho a no ser sometido a procedimientos distintos de los previstos por ley, que en puridad se refiere al derecho a la jurisdicción predeterminada por ley, debe tenerse en cuenta que este Tribunal consideró que, eventualmente, dicho derecho podría haberse visto afectado en el presente caso (Cfr. Fundamento 9, *supra*). Al respecto conviene recordar que su contenido plantea dos exigencias muy concretas: en primer lugar, que quien juzgue sea un juez u órgano con potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional o por una comisión especial creada ex profesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante un órgano jurisdiccional. Y, en segundo término, que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley [Cfr. Sentencia recaída en el Expediente N°



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

0290-2002-HC/TC].

34. Al respecto, cabe precisar que de la Resolución S/N, de fecha 9 de julio de 2010, emitida por la Sala Civil Suprema emplazada, y que corre a fojas 57 de autos, se desprende que la causa le fue remitida a la Sala Constitucional Suprema emplazada porque se solicitó “la tercería preferente de pago ante una posible ejecución de un predio rústico, constituido por la parcela de terreno N° 11283”. Tal es la justificación expresada por la Sala Civil Suprema emplazada para remitir la causa a la Sala Constitucional Suprema emplazada, la cual es conforme con el inciso 4) del artículo 35° del Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que la Sala de Derecho Constitucional y Social conoce “De los recursos de casación en materia de Derecho Laboral y Agrario cuando la ley expresamente lo señala”.

35. En consonancia con esta disposición, la Resolución Administrativa de Presidencia N° 006-2001-P-CS, de fecha 30 de abril de 2001, dispone en su artículo 1° que la referida Sala es la competente para conocer “de los recursos de nulidad y casaciones agrarias pares e impares (...)”.

36. En tal sentido, debe tenerse presente que la demandante no ha negado ni contradicho que la mencionada parcela de terreno sea un predio rústico, de manera que resulta claro que la Sala Constitucional Suprema emplazada se constituyó en el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver su recurso de casación, por cuanto la materia versó sobre un asunto de derecho agrario, como lo es la posible ejecución de un predio rústico. Por lo mismo, este Colegiado puede concluir que tampoco se ha lesionado el derecho a no ser sometido a procedimientos distintos de los previstos por ley.

37. Estando a lo expuesto y al no haberse acreditado los hechos que sustentan la pretensión, el Tribunal Constitucional estima que la presente demanda debe ser declarada infundada.

38. Al respecto, enfatiza que demandas de esta naturaleza mediante las cuales se invocan derechos fundamentales pero sin demostrar en modo alguno de qué modo habría ocurrido la vulneración o qué contenido específico del mismo fue ilegítimamente intervenido, obstaculizan el normal desenvolvimiento de la justicia constitucional.

§ Del examen del Recurso de Agravio Constitucional

39. Con fecha 9 de diciembre de 2013, la recurrente interpuso el recurso de agravio



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

constitucional solicitando que este Tribunal Constitucional corrija, según afirma, el grave error y causales de nulidad del prevaricador, fraudulento, incongruente y nulo auto N° 13 con el cual los eternos prevaricadores y fraudulentos encubiertos por la OCMA y el CNM rechazaron la demanda”.

40. El artículo 18 del Código Procesal Constitucional ha delineado la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, estableciendo que tal recurso debe ser interpuesto contra la resolución de segundo grado que declare infundada o improcedente la demanda y presentado en el plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución.

41. Una lectura descontextualizada de dicha disposición podría conducir a creer que bastaría para que se conceda el recurso con la desestimación de la demanda y el cumplimiento del plazo para la interposición del recurso, pero este Tribunal Constitucional ya ha señalado, en la STC 02877-2005-HC/TC, que “a partir de la jurisprudencia y las disposiciones del Código Procesal Constitucional mencionadas, puede inferirse que el contenido constitucionalmente protegido de los derechos es un requisito de procedencia de la demanda, pero también del RAC” (Fundamento Jurídico 27).

42. Aún más, en dicho expediente, y con carácter de precedente, se dejó sentado que:

“Aparte de los requisitos formales para su interposición, se requerirá que el RAC planteado esté directamente relacionado con el ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; que no sea manifiestamente infundado; y que no esté inmerso en una causal de negativa de tutela claramente establecida por el TC” (Fundamento Jurídico 31).

43. Lamentablemente, y a pesar de la claridad del precedente y su obligatoriedad general, se repiten casos como el presente en el que se interpone un Recurso de Agravio Constitucional manifiestamente infundado, que se limita a invocar formalmente derechos reconocidos por la Constitución, pero con una completa carencia de fundamento.

44. La atención de estos casos produce demoras que impiden atender oportuna y adecuadamente aquellos otros en los cuales verdaderamente existen vulneraciones que exigen una tutela urgente.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

45. El Reglamento Normativo de este Tribunal Constitucional, que actualmente se encuentra vigente, aborda este problema en su artículo 11:

"Una de las Salas se encargará de calificar la procedencia de las causas que lleguen al Tribunal. La Sala determinará si, tras la presentación de los recursos de agravio constitucional, se debe ingresar a resolver sobre el fondo. Para realizar tal análisis, aparte de los criterios establecidos en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, la Sala declarará su improcedencia, a través de un Auto, en los siguientes supuestos: si el recurso no se refiere a la protección del contenido esencial del ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; si el objeto del recurso, o de la demanda, es manifiestamente infundado, por ser fútil o inconsistente; o, si ya se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente idénticos, pudiendo acumularse".

46. Queda claro que el precedente y el Reglamento normativo se orientan en el mismo sentido, por lo que no deberían prosperar recursos que contengan pretensiones manifiestamente improcedentes o que resulten irrelevantes.

47. Este Colegiado ha sostenido que "resulta claro que la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela" (STC 04119-2005-AA, Fundamento jurídico 64, entre muchos otros) y por lo tanto debe concentrar sus recursos en la atención de reales vulneraciones que requieren tutela urgente.

48. A fin de optimizar adecuadamente el derecho a la tutela procesal efectiva, el Tribunal considera indispensable en esta ocasión explicitar los supuestos en que, sin más trámite, emitirá sentencia interlocutoria denegatoria, estableciendo el precedente vinculante que se desarrolla en el siguiente fundamento 49.

§ De la sentencia interlocutoria denegatoria

49. El Tribunal Constitucional emitirá sentencia interlocutoria denegatoria cuando:

- a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque;
- b) La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional;
- c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional;



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 00987-2014-PA/TC
SANTA
FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

La citada sentencia se dictará sin más trámite.

50. Existe una cuestión de especial trascendencia constitucional cuando la resolución resulta indispensable para solucionar un conflicto de relevancia o cuando se presente la urgencia de una revisión sobre el contenido de un derecho fundamental.
51. De este modo, el Tribunal Constitucional, a la luz de su jurisprudencia, cumplirá adecuada y oportunamente con su obligación de garantizar la supremacía de la Constitución y el efectivo respeto de los derechos fundamentales. Preservará, así, la autoridad que le ha confiado el pueblo a través del Congreso de la República.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional

HA RESUELTO

1. Declarar **INFUNDADA** la demanda al no acreditarse la vulneración de derecho constitucional alguno de la recurrente.
2. Establecer como **PRECEDENTE VINCULANTE**, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la regla contenida en el fundamento 49 de esta sentencia.

Publíquese y notifíquese

SS.

URVIOLA HANI
MIRANDA CANALES
BLUME FORTINI
RAMOS NUÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que certifico:

OSCAR DÍAZ MUÑOZ
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Acta de Aprobación de originalidad de Tesis

Yo, Rodolfo Fernando Talledo Reyes, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte, revisor de la tesis titulada *Neointerpretación del Carácter Tutelar del amparo frente al precedente Vinculante fijado en la STC* del (de la) estudiante *Gutierrez Otazco Juan Ernesto* constato que la investigación tiene un índice de similitud de *08.87-2014-PA* 08.% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El/la suscrito(a) analizó dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituye plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Lima, 04 de agosto del 2018

Rodolfo Fernando Talledo Reyes

DNI: 10217463

feedback studio Tesis para optar Grado de Doctor en Derecho UCV: Neointerp /0

Resumen de coincidencias

8 %

1	pt.scribd.com	3 %
2	www.justicaviva.org.pe	2 %
3	www.avogacia.org	1 %
4	repositorio.ucv.edu.pe	<1 %
5	www.cecoch.cl	<1 %
6	docplayer.es	<1 %
7	edwinduartes.blogspot...	<1 %

1.- INTRODUCCIÓN

Página: 1 de 67 Número de palabras: 11516 Text-only Report High Resolution Activado

21:18 2/05/2018

Tesis para optar Grado de Doctor en Derecho UCV:
Neointerpretación del carácter tutelar del amparo frente al
precedente vinculante fijado en la STC N° 0987-2014-PA

INFORME DE ORIGINALIDAD

8%

ÍNDICE DE SIMILITUD

8%

FUENTES DE
INTERNET

0%

PUBLICACIONES

%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

pt.scribd.com

Fuente de Internet

3%

2

www.justiciaviva.org.pe

Fuente de Internet

2%

3

www.avogacia.org

Fuente de Internet

1%

4

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

<1%

5

www.cec Coch.cl

Fuente de Internet

<1%

6

docplayer.es

Fuente de Internet

<1%

7

edwinduartes.blogspot.com

Fuente de Internet

<1%

8

edwinfigueroag.wordpress.com

Fuente de Internet

<1%



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
"César Acuña Peralta"

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres: (solo los datos del que autoriza)

GUTIÉRREZ OTINIANO JUAN ERNESTO

D.N.I. : 42075359

Domicilio : MARCO POLO 1554 - S.M.P.

Teléfono : Fijo : Móvil : 945503544

E-mail : juangutierrezotiniano@outlook.es

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS

Modalidad:

☐ Tesis de Pregrado

Facultad :

Escuela :

Carrera :

Título :

☐ Tesis de Post Grado

☐ Maestría

Grado :

Mención :

☒ Doctorado

Grado : DOCTOR EN DERECHO

3. DATOS DE LA TESIS

Autor (es) Apellidos y Nombres:

GUTIÉRREZ OTINIANO JUAN ERNESTO

Título de la tesis:

REINTERPRETACIÓN DEL CARÁCTER TUTELAR DEL AMPARO
FRENTE AL PRECEDENTE FIJADO EN LA STC N° 0987-2014

Año de publicación :

2018

4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN VERSIÓN ELECTRÓNICA:

A través del presente documento, autorizo a la Biblioteca UCV-Lima Norte,
a publicar en texto completo mi tesis.

Firma :

Fecha :

11-09-18



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FORMATO DE SOLICITUD

SOLICITA:

Levanta Observaciones
y Solicita Vista Bueno

ESCUELA DE POSGRADO

Juan Ernesto Yutiérrez Otáñez con DNI N° 42073355
(Nombres y apellidos del solicitante) (Número de DNI)

domiciliado (a) en MARZO POLO 1554 S.M.P.
(Calle / Lote / Mz. / Urb. / Distrito / Provincia / Región)

ante Ud. con el debido respeto expongo lo siguiente:

Que en mi condición de alumno de la promoción: Doctorado en Derecho
(Promoción) (Nombre del programa)

identificado con el código de matrícula N° 6000134220
(Código de alumno)

de la Escuela de Posgrado, recorro a su honorable despacho para solicitarle lo siguiente:

Levantadas las observaciones, Solicito se levante
Visto Bueno para la publicación de la
Tesis:-



Por lo expuesto, agradeceré ordenar a quien corresponde se me atienda mi petición por ser de justicia.

Lima, 7 de 8 de Septiembre de 2018

(Firma del solicitante)

Documentos que adjunto:

- a. Nuevo anillado
- b. Documento original
- c.
- d.

Cualquier consulta por favor comunicarse conmigo al:

Teléfonos: 945503354
Email: juan.yutierrez@univalle.edu.pe